



UNIVERSIDAD DE CUENCA

Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Políticas y Sociales

Maestría en Derecho Penal

“Incidencia de las políticas públicas locales para la prevención de la violencia contra la mujer y el femicidio en la ciudad de Cuenca”

**Trabajo de titulación previo a la obtención del
título de Magíster en Derecho Penal**

Autor:

Ab. Genaro Marcelo Soto Alemán

C.I. 0102218799

Directora:

Dra. Adriana Victoria Rodríguez Caguana

C.I. 0912619608

Cuenca - Ecuador

25/07/2019



RESUMEN

La violencia de género constituye una violación de derechos humanos. Por ello es que, los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales, se han preocupado por detectar, prevenir y erradicar esta problemática. En Latinoamérica en general y en Ecuador en particular se han aprobado un conjunto de normas legales y se han implementado una serie de políticas públicas con el fin de combatir este problema social. No obstante existir estas leyes especiales en Ecuador, las estadísticas indican que, en efecto, las políticas públicas implementadas para combatir y erradicar la violencia contra las mujeres no han sido suficientes. Si observamos una legislación carente de evaluación y comunicación con los gobiernos locales, no es para asombrarse que los resultados en los últimos años sobre los índices de violencia contra la mujer se hayan incrementado en el cantón Cuenca. Este trabajo de investigación trata de evidenciar el vacío comunicativo existente entre las políticas públicas locales dictadas por el GAD municipal de la ciudad de Cuenca, en relación con las instituciones públicas locales responsables de un tratamiento integral del problema, como la Fiscalía Provincial, Consejo de la Judicatura Provincial, Distrito Educativo Zonal del Azuay, asumiendo que esto podría ser una de las causas para que el índice de violencia contra la mujer en la ciudad siga siendo preocupante. Con esta investigación se demuestra que la lucha contra la violencia de género solo producirá resultados positivos si, unido a una legislación coherente y eficiente, se unen políticas públicas concretas, medibles, congruentes, evaluables y, sobre todo, participativas. Estos elementos se analizan en la presente investigación, la que, mediante el empleo de una metodología mixta, se logra arribar a conclusiones sustentadas.

PALABRAS CLAVE: Violencia de género. Derechos humanos. Relaciones de poder. Políticas públicas.



ABSTRACT

Gender violence constitutes a violation of human rights. That is why the national and international legal systems have been concerned with detecting, preventing and eradicating this problem. In Latin America in general and in Ecuador in particular, a set of legal norms has been approved and a series of public policies have been implemented in order to combat this social problem. Despite the existence of these special laws in Ecuador, statistics indicate that, in effect, the public policies implemented to combat and eradicate violence against women have not been sufficient. If we observe legislation lacking evaluation and communication with local governments, it is not surprising that the results in recent years on the rates of violence against women have increased in the canton of Cuenca. This research work tries to highlight the communicative void existing between the local public policies dictated by the municipal GAD of the city of Cuenca, in relation to the local public institutions responsible for an integral treatment of the problem, such as the Provincial Prosecutor's Office, the Council of the Provincial Judiciary, Zonal Azuay Educational District, assuming that this could be one of the reasons why the rate of violence against women in the city continues to be worrisome. This research shows that the fight against gender-based violence will only produce positive results if, together with coherent and efficient legislation, concrete, measurable, congruent, evaluable and, above all, participatory. These elements are analyzed in this research, which, through the use of a mixed methodology, it is possible to arrive at conclusions supported.

KEYWORDS: Human rights. Gender violence. Power relations. Publics politics.



ÍNDICE DE CONTENIDOS

RESUMEN	2
ABSTRACT	3
ÍNDICE DE CONTENIDOS	4
CLÁUSULA DE LICENCIA Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL.....	7
CLÁUSULA DE PROPIEDAD INTELECTUAL.....	8
INTRODUCCIÓN.....	9
CAPÍTULO 1.	11
MARCO TEÓRICO	11
1.1. Nociones doctrinales sobre la violencia de género	11
1.1.1. Aproximación conceptual en torno a la violencia de género.....	11
1.1.2. Violencia de género y las relaciones de poder.....	16
1.1.3. Violencia de género y derechos humanos.....	20
1.1.4. Clases y formas que adopta la violencia de género	22
1.1.5. Ciclo de la violencia de género.....	25
1.1.6. La violencia de género como un problema social y/o de salud	28
1.2. Aproximación teórica al fenómeno de femicidio.....	30
1.2.1. Diferenciación entre femicidio y asesinato.....	31
CAPÍTULO 2	34
MARCO JURÍDICO	34
2.1. El femicidio en Ecuador.....	34
2.1.1. Clasificación del femicidio	34
2.1.2. Análisis de los principales componentes en torno al femicidio en Ecuador	35
2.2. La víctima en el delito de femicidio.....	38



2.2.1. Análisis del contexto familiar, laboral y social de la víctima	38
2.3. La protección a la mujer y regulación del femicidio en Ecuador	41
2.3.1. Constitución de la República	41
2.3.2. Acuerdos y Tratados Internacionales	44
2.3.3. Código Orgánico Integral Penal (COIP).....	46
2.3.4. Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la Violencia a las Mujeres	47
2.4. Análisis del tipo penal de femicidio en el COIP	48
2.4.1. Tipicidad	48
2.4.2. Antijuricidad	48
2.4.3. Culpabilidad.....	49
2.5. Aspectos vinculados con la ejecución de la infracción	50
2.5.1. Autoría	50
2.5.2. Participación	50
2.5.3. Tentativa	51
CAPÍTULO 3	52
POLÍTICAS PÚBLICAS	52
3.1. Contexto de la Violencia contra la mujer y femicidio en Cuenca.....	52
3.2. Políticas Públicas de Prevención y Erradicación de la violencia contra las mujeres en el Ecuador.....	56
3.3. Políticas públicas implementadas en Cuenca para erradicar la violencia contra las mujeres	64
3.4. Análisis e interpretación de los resultados de las encuestas y aplicadas.....	71
3.4.1. Encuesta a promotoras de derechos contra la Violencia de Género.	71
3.4.2. Encuesta a abogados y abogadas en el libre ejercicio de la profesión.....	79
3.4.3. Encuesta a funcionarios y funcionarias cantonales relacionados con la prevención y erradicación de la Violencia contra la Mujer	90
3.4.4. Encuesta a jueces, juezas y fiscales	100



3.4.5. Una aproximación para una propuesta de mecanismos legales e institucionales que disminuyan la violencia contra la mujer en la ciudad de Cuenca.....	110
CONCLUSIONES.....	115
RECOMENDACIONES	118
BIBLIOGRAFÍA	120



CLÁUSULA DE LICENCIA Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL

Cláusula de licencia y autorización para publicación en el Repositorio Institucional

Genaro Marcelo Soto Alemán, en calidad de autor y titular de los derechos morales y patrimoniales del trabajo de titulación “Incidencia de las políticas públicas locales para la prevención de la violencia contra la mujer y el femicidio en la ciudad de Cuenca”, de conformidad con el Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, reconozco a favor de la Universidad de Cuenca una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra, con fines estrictamente académicos.

Asimismo, autorizo a la Universidad de Cuenca para que realice la publicación de este trabajo de titulación en el Repositorio Institucional, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

Cuenca, 25 de julio del 2019.

Genaro Marcelo Soto Alemán

C.I: 0102218799



CLÁUSULA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Cláusula de Propiedad Intelectual

Genaro Marcelo Soto Alemán, autor del trabajo de titulación “Incidencia de las políticas públicas locales para la prevención de la violencia contra la mujer y el femicidio en la ciudad de Cuenca”, certifico que todas las ideas, opiniones y contenidos expuestos en la presente investigación son de exclusiva responsabilidad de su autor.

Cuenca, 25 de julio del 2019.

Genaro Marcelo Soto Alemán

C.I: 010218799



INTRODUCCIÓN

Según la ONU a nivel mundial aproximadamente 50.000 mujeres son asesinadas diariamente, lo que significa que una mujer muere en el mundo cada 10 minutos, constituyéndose en una de las principales causas de muerte de mujeres asesinadas en América Latina en edades entre 15 y 44 años. En el Ecuador 6 de cada 10 mujeres han sido víctimas al menos una vez de algún tipo de violencia, para finales del 2017, se registraron 151 casos de femicidio, de los cuales al menos el 50% pudieron ser evitados si tan solo la víctima habría reconocido a tiempo las alertas de violencia, y/o las denunciaba a tiempo.

Estos casos de violencia, se evidencian con más frecuencia en los sectores rurales de nuestro país, pues la encuesta realizada por el INEC (2012) muestra que la violencia de género se presenta más entre mujeres indígenas con un 67,8% y en la mayoría de los casos, el principal victimario resulta ser un familiar cercano, casi siempre de género masculino; lo que demuestra que la violencia de género parte desde las estructuras sociales y patrones culturales.

“En el país aún predomina una cultura patriarcal, machista y androcéntrica en la que prevalece la opinión y el criterio del hombre” (Mejía, 2015), de la realidad actual, el que la mujer haya logrado reivindicaciones y superaciones de todo orden, no quiere decir que la violencia contra ella se ha erradicado, como se mencionó, la violencia tiene que ver con un cambio profundo de concepción social, acerca de lo que significa ser hombre y lo que significa ser mujer, buscando cambiar los patrones culturales y sociales en toda la población.

Entre los principales instrumentos legales en pro de la erradicación de la violencia de género fue el implementado en el año 2007, cuando se creó el Plan para la Erradicación de la Violencia contra la Niñez, Adolescencia y Mujeres, 4 años después de la creación de este plan, se lleva a cabo por primera vez en Ecuador la Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres 2011, mediante la cual se pudo evidenciar cifras alarmantes de violencia hacia la mujer, entorno de violencia a nivel de país, que también se manifiesta en el cantón Cuenca, ciudad en la que desde hace ya varios años atrás se viene implementando políticas y acciones normativas tendientes a regular la lucha contra la violencia de género, propósito que no ha logrado los resultados esperados.

En este contexto y debido a la creciente violencia de género, el pasado 26 de noviembre de 2017 la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó por unanimidad el proyecto de Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.



Siendo que el objetivo central de la investigación radica en determinar la eficacia de las políticas públicas para la prevención y eliminación de la violencia contra la mujer en el cantón Cuenca, valorando las acciones y medidas que han sido adoptadas a lo largo de estos años. Para ello el estudio se ha estructurado en tres capítulos.

El capítulo uno ha sido destinado al análisis del marco teórico, en el que se han desarrollado los principales postulados doctrinales en torno a la violencia contra las mujeres, y las categorías relacionadas.

El capítulo dos se destinó al planteamiento del marco legal en el que se analizarán los principales instrumentos jurídicos internacionales y normativas existentes en el Ecuador en torno a la protección de las mujeres ante este problema social. Elemento importante que será abordado en este capítulo es la tipificación del delito de femicidio a través de un análisis en torno a cada uno de los elementos configurativos de este tipo penal.

Finalmente, el tercer capítulo analiza las políticas públicas y la realidad social referente a la violencia contra las mujeres en el cantón Cuenca, destacando los indicadores de violencia en este territorio, así como las principales políticas públicas implementadas a lo largo de los últimos años, tabulándose e interpretándose las encuestas realizadas a los diferentes grupos y proponiéndose aquellas medidas que creemos fueren pertinentes para la solución de la problemática.

En esta investigación abordaremos el tema de la violencia de género a partir de la siguiente interrogante ¿La implementación y aplicación de políticas públicas para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, adoptadas en el cantón Cuenca, han resultado efectivas en la realidad del territorio? De la realidad estadística conocida, podemos pronosticar que la poca eficacia lograda de las mismas, propenden a mantener los índices de violencia, imponiéndose la necesidad de nuevas y variadas estrategias que incidan de forma positiva en dicha problemática.



CAPÍTULO I

MARCO TEÓRICO

1.1. Nociones doctrinales sobre la violencia de género

1.1.1. Aproximación conceptual en torno a la violencia de género

Diversas han sido las conceptualizaciones que en torno a la violencia de género se han empleado en la historia. Cada delimitación ha sido consecuente con una postura determinada y un entorno histórico y geográfico complejo. Aunque en la actualidad los criterios son más cercanos, aún no existe consenso en una definición absoluta de la violencia de género. Esta dificultad, según la investigadora Perela (2010) se origina en el hecho de que el fenómeno de la violencia de género es multicausal, y que se sostienen en fundamentos de poder y dominación en las que el sistema patriarcal constituye su pilar esencial y que aún hoy, en pleno siglo XXI, no logra desaparecer.

Una importante reflexión en torno a esta institución, la realizan las investigadoras Toro & Ochoa (2017) quienes afirman que:

La violencia de género obedece a una discriminación de carácter sexista que da cuenta de la desigualdad y de la dominación de un sujeto sobre otro, perpetuada gracias a un sistema de creencias que delimitan lo que hace un hombre y lo que hace una mujer (...) Este tipo de violencia es producto de la dominación masculina instaurada como *habitus*, a la vez aceptado y naturalizado, basado en una visión androcéntrica que aparece como neutra, pero que divide las cosas y las actividades en un sistema de oposiciones: masculino, femenino. (pp. 67-68)

Esta consideración posee gran relevancia en la idea de conceptualizar y comprender la violencia de género. Teniendo ello en consideración, es claro que la violencia de géneros se origina en el establecimiento, según las autoras antes citadas, de un hábito, de un comportamiento repetitivo y reproducido ampliamente en las sociedades contemporáneas y lo peor, aceptado como normal, lo que contribuye indiscutiblemente a perpetuar los comportamientos que distinguen injustificadamente los roles entre los femenino y lo masculino.

Es así, como exponen autores como Valls & otros (2007) el principal elemento que genera violencia, es la existencia de ciertos patrones culturales que provocan el sometimiento



de los seres humanos a ciertos preceptos de carácter social, cultural, educativo, tradicional, generacional, desarrollada por la estructura social en la que residen.

Adicional a ello, la ilustre académica Martín Bardera (2014) afirma que “La violencia de género es la máxima expresión de una violencia estructural y simbólica que erige al hombre como dominante y a la mujer como dominada” (p. 55), lo que constituye un motivo suficiente como para que las diversas funciones del Estado adopten políticas que logren romper con esta cultura ilógica y discriminatoria pero aún muy acentuada en la civilización contemporánea. No en vano, la investigadora Rodríguez (2015) ha expresado que:

La violencia de género es producto de la jerarquización del género y constituye además un mecanismo de control social, contribuyendo a construir y perpetuar las desigualdades en función a la diferencia sexual y con ello a mantener la estratificación social de género, tanto por sus efectos a nivel personal como a nivel simbólico colectivo, en el imaginario social. (p. 214)

Ciertamente la violencia de género es una categoría amplia y su alcance no solo se restringe a los ámbitos físico y psicológico, como tal puede plasmarse en cualquier acto de agresión en el entorno sexual, económico, laboral, patrimonial, en la red y otras tantas, de forma tal que, el género constituye la causal esencial por la que se adopta el tipo de comportamientos.

La amplia mayoría de la doctrina jurídica considera que cuando se habla de violencia de género, se hace alusión de forma directa, a la violencia contra las mujeres (Ortiz, 2013). Existe una tendencia cada vez más sólida, a vincular el término de estudio con el tema exclusivamente de las mujeres, lo que desde un punto de vista etiológico es limitado, ya que existen otras construcciones de género que padecen de violencia sistemática en el sistema patriarcal, como es el caso de los homosexuales o transexuales e incluso hombres que no cumplen con el estereotipo masculino. De ahí que sea necesario, como presupuesto para elaborar una definición de violencia de género, conocer, por ende, qué es el género.

El investigador Barraca (2011) refiere que para poder percibir bien la noción del género, tal y como se concibe en la actualidad, es necesario entender los fenómenos evolutivos en torno a la sociedad y las relaciones sexuales y con ello, a los diferentes contrastes que se han evidenciado en su interior a lo largo de la historia. En este sentido, González, Zuttay Perugache (2016) coinciden en el hecho de que en torno a la noción de



género siempre han existidos confusiones, pues, incluso muchos académicos tienen a involucrar esta noción, con las cuestiones de la sexualidad.

No obstante, cuando se hace referencia al género, se alude a una construcción que tiene lugar en los ámbitos social y cultural que realiza el individuo sobre otros seres humanos y que están estrechamente vinculados con las cuestiones de los roles que supuestamente debe desempeñar tanto el hombre como la mujer en el espacio social. Refiere Gallegos (2012) que el género guarda estrecha relación con “(...) un conjunto de prácticas, ideas, discursos y representaciones sociales que reglamentan y condicionan la conducta objetiva y subjetiva de las personas” (p. 705). De esta forma es claro, sigue exponiendo la autora, que el género proporciona las herramientas necesarias para poder distinguir cuestiones que han sido construidas por la cultura social en la que se forma y desarrolla un individuo, en el que las cuestiones biológicas no son consideradas.

Teniendo ello en consideración, es claro que el concepto de género implica la valoración de una persona, de las virtudes, valores, cultura, creencias, o comportamientos que incorporen los individuos y que permiten caracterizarlos entre el grupo, por medio de la materialización de acciones, ideas, conductas, expectativas, que poseen los seres humanos, sin importar el sexo al que pertenezcan. Por lo tanto, cuando se alude a la noción de género, no debe establecerse una distinción en el ámbito biológico del ser humano, ello es hombre o mujer, y mucho menos única y exclusivamente a lo femenino, sino que se erige como un aspecto sociocultural, por medio del cual se puede distinguir el comportamiento o consideraciones que se realicen en torno a uno u otro ser humano.

De esta forma, si bien es cierto que la violencia de género no puede confundirse exclusivamente con la violencia hacia las mujeres, la realidad actual en el ámbito doctrinal ha construido una noción que determina la estrecha vinculación que existe entre ambas violencias; es decir, la violencia contra las mujeres es una de las manifestaciones de violencia de género. Es así que autores actuales como Yugueros (2012); Rosser, Suriá, García y Villegas (2015); Berrocal (2016) y Quiñonez (2017), analizan la factibilidad de identificar como sinónimos o cuestiones similares el empleo del término violencia de género para hacer referencia a violencia contra las mujeres.

Atendiendo este hecho en la doctrina jurídica han surgido diversas teorías que han intentado dar una explicación objetiva y concreta al fenómeno de la violencia de género. Por un lado, se encuentran las teorías sociológicas, que fundamentan la violencia desde la figura

del agresor y sustentan el elemento causal en la construcción de una cultura machista con respecto a las mujeres. Siendo así, estas teorías asumen la existencia de diferentes causas que provocan la violencia de género.

Uno de los máximos exponentes de esta teoría, ha sido Donald Dutton (1985), quien considera que es la organización y estructura de la propia sociedad, el conjunto de argumentos culturales y creencias que son forjadas en ella y las diferentes formas de concebir la vida y el comportamiento para lograr la felicidad en la interacción con los demás seres humanos, donde tiene sus pilares la violencia de género (Dutton D. G., 2012). Otro exponente, Albert Bandura (1987), refiere que en esta teoría los entornos más cercanos a los individuos son los que lo predisponen de cierta manera para seguir un comportamiento determinado. Defensor de la Teoría del Aprendizaje Social, refiere que los comportamientos de agresividad o violencia que tengan como destino el género, o las mujeres, es una conducta aprendida, reproducida de un modelo formativo en el que se manifestó dicha problemática.

Otro elemento importante dentro de estas teorías sociológicas, es la llamada Teoría del Modelo Interactivo de la Violencia Doméstica, defendida por Stith y Rosen (1992), quienes refieren que existen factores de orden personal y vinculados con la historia del individuo, que han tenido lugar en su desarrollo dentro de un núcleo familiar determinado, que lo ubica en una posición de mayor riesgo para imitar los comportamientos que ha observado dentro de la familia. De esta forma si un ser humano, se ha formado en una familia donde el abuso de autoridad, y otros comportamientos de agresividad han constituido el elemento esencial y característico de las relaciones intrafamiliares, indudablemente repetirá dichas reglas y normas de comportamiento en la construcción de su familia.

Dentro de este gran grupo de teorías sociológicas, se encuentran otro conjunto de teorías que, si bien han tenido menos acogida por la doctrina, sin lugar a duda constituyen un referente de gran relevancia en el ámbito de la determinación conceptual y la naturaleza jurídica de la violencia de género. De esta forma es meritorio referir la llamada Teoría de los Recursos de William J. Goode (1971), que se refiere al hecho de que sin lugar a dudas la familia se erige como una estructura de poder en el que un sujeto, incapaz de hacer frente a sus frustraciones, accederá a recursos tales como la violencia para sostener su dominio; la Teoría del Intercambio, defendida por Richard J. Gelles (1983); que se refiere en esencia al hecho de que toda persona que se encuentre en una relación determinada, evalúa o valora los beneficios o perjuicios que recibe y que están en juego, con el propósito de continuar con la



relación, aún en un entorno de violencia, manifestándose desfavorablemente para la persona más dependiente dentro de la relación de dominio.

Otro conjunto de teorías que intentan explicar la esencia de la violencia de género, son las llamadas teorías psicológicas. Estas doctrinas intentan dar una explicación del fenómeno ante el hecho de que las mujeres en la mayoría de las ocasiones no logran abandonar a la persona que las agrede, centrándose en el círculo o ciclo de la violencia. En este tipo de teorías el agresor tiene un rol preponderante, por la influencia psicológica que ejerce sobre la víctima y con ello el afianzamiento de su poder.

Dentro de este conjunto de teorías se encuentran aquellas que estudian, la postura que asume la mujer con la finalidad de separarse de su pareja. Algunas de ellas son la Teoría de los Costes y Beneficio, defendida por Pfouts (1978), en la que la mujer tiene que valorar si el mantener la relación con el agresor le proporciona más beneficios que costos, o viceversa.

La Teoría de la Trampa Psicológica, expuesta por Leonore Walker (1984), en la que determina que la violencia de género se caracteriza en esencia, por la existencia de tres fases esenciales, una de tensión, una de agresión y una finalmente de reconciliación, evidenciándose un ciclo caracterizado por la existencia de las tres etapas que nunca terminan.

Otra teoría psicológica, es la llamada Teoría de la Unión Traumática, defendida por Donald G. Dutton y Susan L. Painter (1981), quienes refieren que la violencia de género se erige en base a la relación traumática que existe entre el hombre y la mujer, en la que existe una desigualdad de poder con relación a la mujer, y en la que el hombre constantemente se hace de diferentes mecanismos para sostener e incrementar su dominio, y aun así se crea en la mujer un lazo afectivo muy fuerte.

Una última teoría dentro de este conjunto es la llamada Teoría del Síndrome de Adaptación paradójica a la violencia doméstica, defendida por Sandor Ferenczi (1988), en la que se considera que el fenómeno de la violencia de género surge a partir de la consideración de la femina de que ella es la que origina todo el comportamiento justificado del agresor.

De lo referido anteriormente, está claro que muchas han sido las teorías que han intentado explicar la noción conceptual y la naturaleza de la violencia de género. Es meritorio señalar que la Declaración sobre la Eliminación de la violencia contra la mujer, de la Organización de Naciones Unidas (ONU), refiere que, debe considerarse como tal cualquier acto de agresión que se ha realizado en contra de una persona del sexo femenino, y que como



consecuencia se produjo en esta un perjuicio en el entorno físico, sexual o psicológico, pudiendo incluirse también cualquier otro comportamiento que suponga la realización de amenazas, coacción o la limitación injustificada de la libertad de la mujer, ya tenga lugar en el ámbito público como en el privado (ONU, Asamblea General, 1993).

Atendiendo lo expuesto hasta este momento, considero que definir la violencia contra las mujeres no es tarea fácil. Indudablemente en el fenómeno se materializan un conjunto de causales y circunstancias que limitan la capacidad de ofrecer una definición concreta y objetiva. No obstante, existen determinadas reglas que se manifiestan en la problemática y que posibilitan determinar su esencia. De esta forma, considero que la violencia de género o violencia contra las mujeres, como universalmente se le ha denominado, constituye cualquier acto de agresión hacia otra persona, debiendo ser ésta del sexo femenino, y que dicho comportamiento tenga la finalidad esencial de sostener, perdurar o incrementar el dominio de un hombre o grupo de hombres sobre el sexo opuesto, y que como consecuencia de ello se produzca algún tipo de perjuicio en los derechos de la mujer, en el que como consecuencia de dichos actos se produzca una disminución del pleno y efectivo ejercicio y goce de los derechos y garantías que posee la mujer.

De esta forma es importante señalar, que la violencia de género, no puede materializarse sólo cuando se aprecia un resultado efectivo en la mujer, sino también, cuando encontramos manifestaciones de violencia de género de forma solapada, en el planteamiento de estrategias, leyes y políticas públicas que permiten la reducción de los espacios a este importante grupo poblacional.

1.1.2. Violencia de género y las relaciones de poder

Es indudable que el fenómeno de la violencia de género está ligado a las relaciones de poder. Históricamente la autoridad masculina se ha impuesto y a partir de ello los derechos de las mujeres han quedado relegados a un segundo plano. Desde el entorno político, militar, cultural e incluso familiar, el papel que se han visto obligadas a desempeñar las mujeres, ha estado caracterizado por un comportamiento relegado, y ello ha estado secundado y originado en la misma estructuración de las relaciones de poder.

Tradicionalmente, los comportamientos que en cada etapa histórica han mostrado los hombres y las mujeres en sus relaciones sociales, han estado diferenciadas por las cuestiones vinculadas al género. Ha sido el androcentrismo, reforzado con el sistema patriarcal, el que ha



delimitado el modelo de las relaciones sociales, el papel de unos y otros en general y de hombres y mujeres en particular. De esta forma, toda gira en torno al ser masculino, quien por demás y amparado en dicha consideración, es quien posee la capacidad para realizar todas y cada una de las acciones que, en la sociedad, llevan al éxito. Gil y Lloret (2007) refieren que:

(...) el patriarcado, es un sistema de organización social en el que el poder político, económico, religioso, militar y la organización familiar están encabezados por hombres (...). El patriarcado es una organización muy antigua que llega hasta nuestros días y que se produce en diferentes grados en muchas de las sociedades (...). (p. 23)

Por su parte la académica María Teresa Barro (2014) expresa que:

Patriarcado é un sistema de goberno da sociedade humana que impón autoritarismo e dictadura e usa a familia patriarcal para fixar padróns de superioridade e inferioridade nata, xerarquía indiscutíbel e inxusticia que logo se repiten en todas as estruturas políticas, sociais e económicas. (p. 73)

Teniendo en cuenta ello, es claro que las relaciones desiguales de poder que se materializan entre el hombre y la mujer, y que en gran medida son las que originan el fenómeno de la violencia de género, tienen su asidero en el androcentrismo y el patriarcado, perspectivas que sostienen que la existencia de la civilización, está sustentada en el hecho de que el hombre es y debe ser el centro de atención y ocupación de todo, y que en base a ello es quien impone las reglas y normas de comportamiento y por encima de su voluntad no se puede encontrar ningún otro ser humano, criterio errado que constituye el fundamento y el pilar sustancial de la desigualdad de las relaciones de dominio entre las mujeres y el hombre.

Según expone la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) (2012):

Relaciones desiguales de poder, son aquellas que limitan un desarrollo equitativo, entre hombres y mujeres. Esto evidencia en posiciones de desventaja de las mujeres en relación a los hombres, materializadas por la subordinación, la falta de acceso a los recursos, a la educación, así como vulnerabilidad ante la pobreza y la violencia. (pp. 8-9)

Considerando ello, es claro que cuando se habla de relaciones desiguales de poder, vinculadas al género, estas constituyen cualquier tipo de comportamientos que limiten o



impidan el desarrollo pleno de las mujeres, por encontrarse en una situación de desventaja en relación con los hombres, las que se evidencian en los diferentes órdenes del desarrollo humano. Sobre este aspecto la importante investigadora sobre género, Marcela Lagarde (1994) señalaba que cuando se alude a las relaciones de poder entre hombres y mujeres, pueden entenderse el conjunto de procesos que se encuentran interrelacionados e interdependientes que se manifiestan en las formas en las que los hombres de forma particular o en grupo, intervienen en la vida de las mujeres, materializándose desde una postura siempre de superioridad y dominio.

Es así como, esta forma de pensar y actuar que tan enraizada se encuentra en la sociedad contemporánea, tuvo su esencia en la familia, en donde comenzaron a materializarse los primeros síntomas de lo que después estructuraría una cultura patriarcal. Mientras el hombre salía de caza, las mujeres quedaban al cuidado de los niños y del hogar, resguardadas de los peligros de la naturaleza, constituyéndose desde la etapa primitiva, como un elemento de desigualdad que, con el paso del tiempo, fue incrustándose mucho más hasta convertirse en un elemento base de la sociedad.

Sobre este mismo elemento Morales (2012) expone que el fenómeno del patriarcado estrechamente vinculado con el acto de castigar a las mujeres, es tan antiguo como la civilización misma y que en cada época del desarrollo humano, ha ido transformándose no tanto para ofrecer mayor justicia en el trato de los hombres para con las mujeres, sino para fortalecer el dominio masculino. Refiere la autora que elementos como la omnipotencia y la impunidad han ido de la mano con este sistema de jerarquía masculina que ha imperado a lo largo del desarrollo de la humanidad, estableciéndose todo este poder generalmente dentro de las familias, en la mano de una sola persona, siempre el hombre.

De esta forma el sistema patriarcal que ha regido las relaciones desiguales de poder por cuestiones de género a lo largo de la historia, se ha materializado en el entorno de la coerción y del consentimiento. Mientras que el primero se refiere a la existencia de reglas rígidas en torno a los roles que juegan las mujeres y los hombres en las relaciones sociales y familiares, en las que se determinan normas de comportamiento estrictas hacia las mujeres y políticas de poder para ejercitar la violencia contra ellas (Velázquez, 2011). Este tipo de esquemas patriarcales pueden observarse actualmente en las culturas del oriente medio. El segundo es la consecuencia de la transmisión de una cultura de patriarcado de generación tras



generación, identificada con el papel relegado a la casa y tareas hogareñas, pero en un entorno de asentimiento, el que es mayoritariamente aceptado en la realidad actual (Puleo, 2005).

Sin lugar a duda, el patriarcado es la institución que ha permitido en la actualidad un sostenimiento de las relaciones de poder que autorizan y justifican la violencia de género. Es en esencia este sistema patriarcal del consentimiento, en el que no solo los hombres imponen las reglas de la convivencia, sino que de forma solapada es admitida y aceptada por la mayoría de las mujeres, rige las relaciones sociales actuales y son, como se ha referido, las que legitiman la violencia de género.

Ecuador no ha estado al margen de esta práctica. Heredera de las tradiciones europeas más avanzadas y no siempre más beneficiosas, en su afán de implementar y copiar cada uno de los estándares de la existencia humana y de las relaciones sociales, también adoptó el patriarcado como forma de convivencia y posicionamiento del poderío masculino vigente hasta la actualidad. En este sentido el autor ecuatoriano Trujillo (2011) refiere que:

La madre enseña a sus hijas, que las mujeres tienen que ser hacendosas, fieles, piadosas. Se olvidan de ciertas capacidades intelectuales, atributos nuevos de las características de ser mujer, de su fortaleza psicológica, capacidad intelectual, cualidades que se consideraban exclusivas de los hombres. (p. 30)

Esta reflexión evidencia que, en el Ecuador, aún está enraizado el patriarcado y en términos de violencia de género, ha sido la causa primera del gran conjunto de hechos que han tenido lugar en el país. De esta forma el abuso, el maltrato, la agresión, el desprecio, las amenazas, el minimizar a la mujer, la intimidación, el abuso psicológico, verbal, físico, sexual, económico, la prohibición de actos como estudiar o trabajar, el impedir que las mujeres usen métodos anticonceptivos, constituye algunas de las manifestaciones de la violencia de género según Pérsico (2003).

Es así como estas relaciones heterogéneas de poder en materia de género, se traducen en un conjunto de pensamientos enraizados en la cultura de la sociedad, por medio del cual se justifican y legitiman un conjunto de comportamientos de violencia de género sustentados en la consideración de que el hombre al serlo, es quien debe establecer las reglas inquebrantables en toda familia, relegando en la mayoría de las ocasiones a la mujer a los quehaceres domésticos y tareas del hogar. Este mismo paradigma transita de la familia hacia las relaciones económicas, sociales, culturales y políticas de los Estados. Aunque mucho se ha



intentado hacer, las relaciones desiguales de poder, constituyen hoy, un tema pendiente por resolver definitivamente. Les corresponde a las actuales generaciones comenzar a estructurar relaciones mucho más homogéneas en cuestiones de género, de forma tal que la cultura del patriarcado sea absolutamente desterrada de nuestras sociedades y con ella, cualquier situación de violencia de género.

1.1.3. Violencia de género y derechos humanos

Los derechos humanos constituyen sin lugar a duda, una categoría que le imprime a la existencia humana un entorno de seguridad y protección que permite el correcto desarrollo del ser humano. Es así como estructurados en varios componentes de orden ético con un alcance jurídico, se sustentan en el hecho de que los seres humanos necesitan poseer determinadas condiciones que le permitan realizarse como tales en un entorno digno.

Los derechos humanos han sido considerados en su generalidad como los derechos que son atribuibles al hombre y que por dicha condición le son consustanciales e inherentes. Ello implica que existen un conjunto de prerrogativas que le son conferidas a la persona humana, fuere cual fuere su condición, porque la inherencia de dichos derechos, viene dada porque la mujer, el hombre, el niño, adolescente y anciano, pertenecen todos sin exclusión a la condición humana. Sobre este aspecto, Del Vecchio (1957) y Maritain (2001) ya defendían desde principios del siglo pasado, la existencia de una naturaleza humana en un conjunto de derechos y que sustentados en ellos, existían un conjunto de facultades y principios que le eran propios a las personas.

Otros autores, como Bidart Campos (1989) refiere que los derechos humanos pueden ser considerados como derechos naturales, porque se encuentran derivados de la propia naturaleza de ser humano, adquiriendo por ello cualidad de fundamentales, porque le son esenciales para su propia existencia. Este autor, además, los considera como derechos subjetivos porque “(...) se subjetivizan en la persona humana” (p. 27). De esta forma, es claro que los derechos humanos se erigen como derechos subjetivos, porque es la persona natural quien, en su condición de titular de un derecho humano determinado, lo aplica, materializa, exige y adopta un comportamiento en aras de garantizarlo, existiendo, por ende, una personificación o individualización en cada uno de ellos.

A pesar de la diversidad de criterios sobre derechos humanos, pues mientras por ejemplo, Pérez-Barba (1976) los considera como “derechos subjetivos fundamentales”;



Fernández (1991) los concibe como ideales o exigencias; Pérez Luño (1991) como facultades; Pintos (1993) como derechos subjetivos propiamente dicho; la realidad es que, los derechos humanos se erigen como aquel conjunto de potestades, facultades y derechos subjetivos que le son atribuibles a la persona natural, por la propia naturaleza que le es inherente, de forma tal que todo ser humano posee estos derechos.

Aunque el tema de los derechos humanos adquiere mayores connotaciones a principios del siglo XX, no es hasta pasada la segunda mitad de dicho periodo en que se comienza a establecer relaciones entre, la violencia de género y los derechos humanos de las Mujeres. A consideración de la investigadora Ushakova (2012), es a finales del siglo pasado, debido a la acción de los movimientos feministas y la lucha por los derechos de la mujer, cuando comienza la ONU a preocuparse y tratar estos temas. Es así como la Asamblea General de la ONU, en el año 1975 lo calificó o declaró como Año Internacional de la Mujer, organizándose la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer en México y con ello, la declaración del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer (1976-1985) (ONU, 2018).

En este influjo feminista, se logra proclamar la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979); la conversión del Fondo de contribuciones voluntarias que funcionaba en el referido decenio en el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), estructurándose bajo la dirección de ONU Mujeres; la promulgación de la Plataforma de Acción de Beijing (ONU, 1995). También en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ONU, 2000) y recientes esfuerzos se implementan también en aras de garantizarle mayor protección a la mujer.

Ello evidencia que, desde mediados del siglo XX, el mundo se ha preocupado y ocupado por establecer mecanismos jurídicos de protección de los derechos humanos de las mujeres en el orden internacional. Pero es en la Segunda Conferencia Mundial de Derechos Humanos que tuvo lugar en Viena, en 1993, donde se refrenda que los derechos humanos de la mujer “(...) son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales” (ONU, 1993, párraf. 18), refiriendo que pueden concebirse como derechos humanos de las mujeres, la plena participación en la vida política, civil, económica, social y cultural, el respeto a la igualdad, la prohibición de cualquier acto discriminatorio en razón del sexo, la eliminación de cualquier manifestación de violencia, acoso, explotación sexual, entre otros.



Este reconocimiento de los derechos de las mujeres como derechos humanos se deriva, según Facio (2003), de un reconocimiento inicial de un conjunto de derechos individuales frente al Estado, reconociendo ciertos derechos a las mujeres, noción de derechos humanos que favoreció en el ámbito internacional, primero para todos los seres humanos, y después a las mujeres. Posterior a ello, se estableció la idea de que las mujeres podrían ser titulares de derechos jurídicos, porque como se recordará, el patriarcado profundamente arraigado en las sociedades contemporáneas, no ofrecía un entorno participativo activo a las mujeres.

De esta forma, se profundizada la lucha por la reivindicación de los derechos de las mujeres, logra crearse un estado favorable para que a las mujeres se les reconocieran un conjunto de derechos que derivaron posteriormente en derechos humanos. De manera que, sustentado en el carácter meramente neutral que emplea la Declaración Universal de los Derechos Humanos en términos de género, se logra reforzar dicha lucha y entonces con ella, se logra un reconocimiento de los derechos de las mujeres, evolucionando hacia una eliminación del androcentrismo en muchas políticas públicas.

Es así que, en los principales instrumentos internacionales de derechos humanos, que le son atribuibles exclusivamente a las mujeres, está que la violencia contra las ellas, es una manifestación de discriminación y atentado contra su vida e integridad personal, lo que se evidencia como un componente contrario al reconocimiento de los derechos humanos, cuya finalidad es pronunciarse en torno a su erradicación, y de manera indiscutible, asumir, que cualquier conducta que implique violencia contra las mujeres es en esencia, una vulneración de los derechos humanos de las mujeres.

1.1.4. Clases y formas que adopta la violencia de género

Sin lugar a duda, la violencia de género adquiere clases y formas, tan variadas como los comportamientos de agresividad contra las mujeres. En este sentido, la mayoría de la doctrina jurídica coincide en que son tres las manifestaciones en las que las mujeres pueden ver vulnerados sus derechos. No obstante, estos tres criterios clasificatorios son enriquecidos por diversos investigadores que, en su afán de diversificar las manifestaciones de violencia de género, enriquecen las posturas en torno a la distinción entre unas y otras.

Una de las primeras clases en que se materializan los comportamientos de agresividad y violencia en contra de las mujeres, por el mero hecho de serlo, es la psicológica. A consideración de la investigadora Perela (2010) Los comportamientos que implican esta



forma de violencia, tienen como finalidad la disminución en el entorno emotivo psicológico de la mujer, y se manifiesta en esencia por medio de comportamientos amenazantes, degradantes, bochornosos, de apatía hacia la otra persona. En este sentido, este tipo de vulneración implica que, el individuo desprecia cualquier tipo de criterio, actitud, comportamiento, conducta o trabajo realizado por la mujer, reduciendo la verdadera utilidad e importancia de su conducta, a los efectos de perturbarla en el ámbito de la autoestima y con ello incidir de forma negativa en su desarrollo como ser humano.

A consideración de los investigadores españoles García-Baamonde, Blázquez y Moreno (2012) la violencia psicológica de género puede ser concebida como “cualquier acto o conducta que hiera la dignidad y pueda provocar la desvalorización, humillación sufrimiento o enfermedad mental (...) así como aquellos actos o conductas que ocasionen un clima de angustia (...)” (p. 628). En este sentido queda claro que cualquier comportamiento de desvalorización, que implique cualquier intento de poner en ridículo a la persona o descalificarla por medio de burlas, considerar que cualquier acto que realice es insignificante, oponerse a sus decisiones, menospreciar sus consideraciones, ser hostil por medio del reproche de los insultos y amenazas, constituyen algunas de las materializaciones de este tipo de comportamientos.

Además, según los autores antes citados, los actos de intimidación, críticas o corrección de conductas u opiniones que tenga la mujer, para que esta adopte determinados comportamientos, así como la imposición de órdenes que respondan a los intereses del agresor y la invasión a su privacidad, con la finalidad de separarla del grupo social, se unen al conjunto de normas de comportamientos agresivos en el orden psicológico que atentan contra los derechos de las mujeres.

Otro entorno donde se manifiesta la violencia, es en el ámbito sexual, considerado por la mayoría de la doctrina jurídica como manifestación o comportamiento violento que asume un individuo en el entorno sexual, imponiéndole a la mujer el adoptar determinada conducta en este sentido, sin que sea de su pleno consentimiento. Sobre este tipo de manifestación de agresividad, los académicos Gómez-Durán, Lailla-Vicens, Arimany-Manso & Pujol-Robinal (2014) señalan que este tipo de comportamiento violento debe ser considerado y tratado como un problema de la salud pública que impacta de forma negativa y contundente en los derechos humanos del individuo y que igualmente incide en los ámbitos de la salud de las mujeres.



En este sentido la investigadora Maximiliana Gil (2015) refiere que cuando se alude a la violencia sexual se debe entender aquel tipo de comportamientos al que la mujer:

(...) suele ser sometida a contactos, insinuaciones o acciones de naturaleza sexual no consentidas, que comprende desde expresiones verbales con connotación sexual, «piropos», acciones invasivas con objetos sexuales o penetración por vía oral, anal y vaginal hasta confiscaciones de su cuerpo con fines comerciales, actos que pueden atentar contra la capacidad reproductiva de la mujer. (p. 818)

Teniendo en consideración a Maximiliana Gil, es claro que este tipo de manifestación de violencia hacia las mujeres, implica cualquier tipo de conducta que el agresor asume en el orden sexual, siempre que la finalidad de la misma sea representar el empoderamiento, dominio, o afianzar sus consideraciones de poder por sobre el sexo femenino. Desde mi consideración, no todo comportamiento que adopta un hombre en el orden sexual para con una mujer, implica violencia de este tipo, pues la manifestación de agresividad en el ámbito del género, implica la necesaria existencia en el ámbito psicológico del agresor, de una intencionalidad marcada en el entorno de una relación de poder.

Una tercera manifestación de este tipo de agresividad, es la violencia física. Según expone la investigadora Rivadeneira (2017) de los últimos estudios que se han realizado en el mundo, se estima que el 30% del total de las mujeres han sido sometidas algún tipo de violencia en el entorno físico; que en América latina este tipo de manifestación varió entre el 7,7% al 53,35%; mientras que en el Ecuador se estima que 6 de cada 10 mujeres han sido víctimas de la violencia de género y de ellas el 31%, de violencia física. Esta, ha sido concebida desde la amplia postura de la doctrina así como de las normativas jurídicas existentes como “Todo acto de fuerza que cause, daño, dolor o sufrimiento físico en las personas agredidas cualquiera que sea el medio empleado y sus consecuencias, sin considerarse el tiempo que se requiera para su recuperación” (Camacho, 2005, p. 200).

Cualquier comportamiento que implique un vejamen en el entorno físico de la mujer, y que por algún motivo lo dañe, aunque sea o no visible, puede ser concebido como este tipo de manifestación violenta. En este sentido se considera que en el planeta existen más de 5 millones de mujeres que cada año sufren cualquier tipo de manifestación de violencia física (Figueroa, y otros, 2004).

Manifestaciones de violencia de género, que en el año 1994 fue incluida en la propuesta de la Asamblea General de las Naciones Unidas, fecha en la que dicha instancia emite la Resolución 48/104, Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, que en su artículo uno, refiere, que debe concebirse como violencia contra la mujer cualquier tipo de acto de agresividad que tenga como fundamento la pertenencia al sexo femenino, también cualquier tipo de daño en el orden físico, sexual o psicológico, así como la realización de cualquier otro comportamiento como las amenazas o la coacción.

En tal virtud, aunque otros autores han hecho referencia a otras manifestaciones de violencia de género, tales como la simbólica que se encuentra destinada al reforzamiento de los roles y estereotipos sobre lo masculino y femenino (Chaher, 2012); así como la violencia patrimonial o económica en la que existe una subordinación financiera de la mujer para con el hombre, dependiendo de él en todo sentido (Deere, Twyman, & Contreras, 2014); las manifestaciones de violencia física, sexual y psicológica, constituyen la tríada principal en las que se ha sustentado la materialización de los comportamientos agresivos por la condición de género. No obstante, es pertinente señalar que bajo ninguna concepción pueden restringirse o considerarse que éstas son las únicas tres formas o clases en que se materializan los comportamientos violentos hacia las mujeres, pues como se dijo al principio, existen tantas formas de concretar dichos comportamientos agresivos, como posibilidades el hombre encuentre de materializar su relación de poder.

1.1.5. Ciclo de la violencia de género

Ha sido de gran relevancia la consideración en la doctrina jurídica, derivada de las constantes investigaciones que se realizan en torno a la violencia de género, determinar el ciclo que le caracteriza. En torno a esta categoría las investigadoras Kipen&Caterberg (2006) refieren que la manifestación de este tipo de agresividad se encuentra en constante cambio, exponiendo que se trata de:

Un estado cambiante no fijo, que cambia continuamente en respuesta a circunstancias dadas. Podemos pensar que el aumento o disminución de estados fisiológicos podrían estar inducidos o causados por situaciones del medio o del estrés. Explicar la etiología de la violencia sólo por características biológicas reduce su esencia y desdibuja los efectos del proceso interactivo entre individuos y entre estos y sus ambientes sociales.



La razón de la violencia en contra de la mujer y los femicidios hay que entenderla en el cruce de factores negativos provocados para mantener el sistema patriarcal. (p.100)

Y es en esencia, sustentado en lo expuesto por las autoras, que la violencia de género puede concebirse como un fenómeno cíclico, que redundando en la realización de comportamientos y situaciones que se encuentran en constante evolución, pero que no encuentran un fin. Es así como la mayoría de la doctrina jurídica ha considerado que existen tres fases o etapas que definen este tipo de fenómeno. En primer lugar, se encuentra la fase de tensión, seguida por una etapa de explosión o agresividad y finalmente, la fase de reconciliación. Estas tres etapas fueron identificadas en el año 1984, por Lenore Walker, quien constituye la pionera en los estudios que intentan hacer que la comunidad internacional, académica y los ordenamientos jurídicos nacionales, se interesaran por el estudio y solución de los conflictos generados en el ámbito de la violencia de género. En su obra *"The Battered Woman Syndrome"* (2000), es donde por primera vez se refiere al ciclo de la violencia.

La primera fase que como ya se ha referido es la de tensión, es aquella en la que se manifiestan rasgos de irritabilidad en el agresor, sin la existencia de ninguna causal o justificación aparente. En este momento o etapa se manifiestan comportamientos de agresividad por parte del individuo hacia la mujer, pero que se materializan en un orden menor, y que generalmente son fácilmente solucionados por la mujer, por medio de comportamientos de complacencia o alejamiento.

Refiere la investigadora Morabes (2014) que en la fase de acumulación de tensiones, generalmente la mujer da a conocer al agresor, que ella permite los actos de violencia, legitimándolos y admitiendo su responsabilidad en el hecho de que el agresor tenga que arremeter contra ella. Es característico de esta etapa el hecho de que la mujer no se enoja por los comportamientos violentos que se tienen contra ella, intentando constantemente minimizar dichos actos y atribuyéndose la culpa de su realización.

Una segunda etapa, es la de explosión o agresión, en la que existe un comportamiento descontrolado, consecuencia de la acumulación de las tensiones. En esta fase al estallar dicha conducta, es cuando se manifiesta, con mayor énfasis la violencia en sus diferentes clases o manifestaciones, materializándose en la víctima un colapso en sus sentimientos y emociones, caracterizada finalmente por un aislamiento u ocultamiento de las consecuencias de dichos actos de agresión hacia su persona. En este momento la amplia mayoría de las mujeres



deciden ocultar el resultado de los actos violentos hacia su persona, hasta que desaparecen, aunque en muchas ocasiones es en esta fase, cuando las mujeres deciden denunciar el haber sido víctimas de dichos comportamientos.

Según expone el investigador Yugueros (2014) esta fase también llamada de explosión violenta, es cuando se materializan los golpes, las agresiones de orden sexual, y se profundizan las de orden psicológico. También las diferentes investigaciones han deducido que es en este momento cuando el agresor realiza la mayor cantidad de amenazas a la integridad física y a la propia existencia de la mujer, incluyendo otros destinatarios de su comportamiento tales como los hijos. Generalmente es en este período, cuando en muchas ocasiones la mujer fallece como consecuencia de dichos comportamientos violentos.

Una tercera fase, es la de reconciliación o como también se le denomina, de conciliación o luna de miel. En esta etapa son inexistentes cualquier tipo de agresión o comportamiento del agresor para con la mujer que impliquen violencia. La estrategia que sigue este es la manipulación de las emociones y los sentimientos de la fémina, por medio de una conducta cariñosa en la que se proveen diversas justificaciones y se solicita el perdón o disculpas a la mujer agredida, con la única finalidad de que está permanezca silenciosa ante las agresiones que recibió en la fase anterior.

Es típico en esta etapa la manifestación por parte del agresor de su supuesto arrepentimiento y la juramentación de que en lo adelante el cambiará su comportamiento y no repetirá dichos actos. A consideración de la investigadora Rondón Pereyra (2015) en este período el agresor manifiesta un profundo pero superficial sentido del remordimiento, intentando que la mujer agredida y víctima de su comportamiento violento, lo perdone. Es sin lugar a dudas esta fase la última dentro del ciclo de la violencia, pero que, debido a la condición emocional y psicológica de la mujer, procede a realizar las disculpas pertinentes y con ello el inicio nuevamente del ciclo de la violencia de género.

En este sentido para los investigadores Delgado, Sánchez & Fernández (2012) en sentido general estas fases cíclicas en torno a la violencia de género, se encuentran asociadas sin ninguna duda a un patrón base, vinculados a los comportamiento que tradicionalmente delimitan el rol del género femenino y lo masculino, siendo asimiladas por las primeras y conservadas por los segundos, de forma tal que los roles y las concepciones que en torno a ellos han existido a través de la historia constituyen un componente preponderante en el mantenimiento de estas fases.



1.1.6. La violencia de género como un problema social y/o de salud

Es indiscutible que las manifestaciones de violencia de género se erigen en la actualidad, como un problema social de inestimable valor y a la que hay que continuar ofreciéndole las respuestas y soluciones concretas, eficientes y pertinentes. La cuestión esencial y que convierte a las manifestaciones de la violencia de género en un verdadero problema para la sociedad, a decir del psicólogo e investigador Jorge Corsi (2012) se traduce en las diferentes denominaciones que ha adquirido el fenómeno a lo largo de los años. Para este autor las consideraciones de que la violencia de género pueda ser asimilada de igual forma como violencia doméstica o violencia intrafamiliar, así como violencia en la familia, constituyen derivaciones de gran relevancia en el ámbito social del fenómeno en sí.

Existen grandes dificultades para poder ofrecer una respuesta efectiva al fenómeno de la violencia de género, debido a la invisibilización y a la naturalización de los procesos que se realizan en torno al mismo, fenómeno que por el valor relevante de sus causas, consecuencias y efectos han adquirido la condición de problema social.

Con relación a la construcción social de violencia de género como problema social, refiere el investigador Viano (1987) que cuando en cualquier sociedad contemporánea existe un adulto que pertenece a la clase económicamente empoderada, cualquier mirada en torno a las fases de agresividad y violencia de género, contra ellos, constituyen un tabú, sin embargo cuando dicho comportamiento va dirigida contra aquellos individuos que se consideran de un estrato socialmente inferior, como mujeres, niños, niñas, adolescentes o personas que pertenecen a las minorías, cualquier acto de agresión contra ellos es percibido socialmente con una relevancia menor.

Entonces la idealización del fenómeno de la violencia de género teniendo en consideración los estratos sociales, son la consecuencia de una construcción sociocultural, en el que las relaciones de poder y el patriarcado continúan siendo en la actualidad, un componente esencial en el tratamiento de la violencia de género como fenómeno y problemática social.

Con lo señalado, está claro que la violencia de género es fácilmente concebible como un problema social de envergadura. Como es sabido y a consecuencia de los comportamientos de agresividad que ejecuta el agresor para con la víctima, se producen en esta un conjunto de consecuencias lesivas que le impiden desarrollarse plenamente en el orden físico, psicológico,



sexual, emocional, patrimonial. De esta forma la víctima de violencia, imbuida en un entorno de denigración y de condiciones inferiores, es incapaz de desarrollar plenamente sus capacidades como miembro activo e importante de la sociedad.

Unido a ello en muchas ocasiones como consecuencia de los comportamientos de agresividad, la mujer termina siendo gravemente herida e incluso se le produce la muerte, provocando con ello no sólo la vulneración de uno de los derechos y principios fundamentales de la humanidad, que es la vida misma, sino trayendo consigo consecuencias nefastas para la familia. Adicionalmente a ello, los niños, niñas y adolescentes que se educan y se forman en un ambiente de violencia, tienden no sólo a ser víctimas de los comportamientos agresivos que se ejecutan dentro del hogar, sino que, como consecuencia del proceso formativo, incorporan a su personalidad y desarrollo los mismos rasgos, permitiéndoles reproducir dichos patrones en un futuro.

En torno al fenómeno de la violencia de género como un problema de salud, fue considerado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una dificultad de dicha índole que es necesario atender desde los diferentes sistemas de salubridad de cada nación. En este sentido para los investigadores Velzeboer, Ellsberg, Clavel & García (2003) la consideración de que la violencia contra las mujeres se erige como un problema de salud radica en los efectos o consecuencias de los comportamientos agresivos hacia las víctimas.

Sobre este aspecto las autoras consideran que, ante los diferentes maltratos materializados en este entorno, se producen resultados mortales y no mortales. Dentro de los primeros encuentran aquellos actos que tienen como finalidad la provocación del fallecimiento de la mujer, o el contagio con una enfermedad mortal como son las consecuencias derivadas del SIDA. Dentro de los resultados que no provocan el fallecimiento de la mujer se encuentran aquellos que afectan su salud física tales como las lesiones, los síntomas en el orden físico, cualquier tipo de discapacidad, obesidad severa; también se encuentran los llamados trastornos crónicos y los vinculados con la salud mental, reproductiva y cualquier otro comportamiento que sea no positivo para la salud de la mujer víctima de este tipo de maltratos.

Como se evidencia, es claro que la violencia de género se erige en la modernidad, como un problema social que se sustenta no sólo en las relaciones de dominio y empoderamiento derivadas de una cultura patriarcal, tampoco solo, en las consecuencias de



las relaciones sociales y de familia alrededor de la que gira este tipo de comportamiento; sino que también puede concebirse como un problema de salud, porque afecta de forma directa y material el entorno físico, sexual y psicológico, como mínimo de la mujer, provocándole daños que son necesarios de ser tratados con los especialistas correspondientes.

1.2. Aproximación teórica al fenómeno de femicidio

Habiéndose observado las principales posturas que delimitan la naturaleza y esencia de la violencia de género, cabría entonces no perder de vista los elementos en torno a la manifestación extrema de este fenómeno. Los comportamientos agresivos tal y como se han expuesto con anterioridad, que tienen como destinatario a las mujeres, termina en ocasiones en la muerte de la mujer. Es a partir de ello que se han constituido propuestas en torno a la construcción de una noción para este tipo de situaciones, el femicidio.

Russell (2013) refiere que “As long ago as 1976, I chose the new term femicide to refer to the killing of females by males because they are female” (p. 19). En este sentido y retornando a la fuente de la noción conceptual de esta terminología, es claro que el femicidio debe ser considerado como el acto por medio del cual un hombre mata a una mujer, por el mero hecho de pertenecer al sexo femenino. En este tipo de acontecimientos, el fallecimiento de la mujer como consecuencia de los comportamientos violentos del hombre cuya finalidad es dar fin a su existencia, no tienen lugar en un ámbito tal y como acontece en el asesinato u homicidio, pues no se trata del extinguir la vida de la mujer por el mero placer de hacerlo, sino como consecuencia de un reforzamiento en las relaciones de poder.

Los investigadores Campbell & Runyan (1998) redefinen la noción de femicidio, pues incorporan a la conceptualización de este, cualquier otro tipo de muerte que hayan sido provocadas como consecuencia del accionar o las omisiones resultantes en el fallecimiento de una o varias mujeres, pero que como consecuencia de la naturaleza de estas muertes no puede atribuírsele responsabilidad jurídico penal a ningún ser humano. Es así como bajo esta nueva noción son incorporados aquellos fallecimientos de las mujeres, que pueden ser a causa de una mala nutrición derivada de discriminaciones por razones de género, a la inseguridad en la práctica del aborto, al tráfico de mujeres para someterlas a cualquier tipo de acto delictivo, ausencia de un sistema de salubridad eficiente que garantice y proteja la existencia misma de las mujeres, entre otras.



Como se ha manifestado es comprensible entender que el femicidio, debe ser entendidas como la provocación de la muerte de una mujer o un grupo de mujeres, por el mero hecho de pertenecer al sexo femenino, sin importar los medios o circunstancias en los que éstos tengan lugar. Entonces es necesario discurrir que como femicidio, debe ser considerada aquella muerte a una mujer provocada como consecuencia de la materialización de las relaciones de poder y empoderamiento típicas o derivadas del sistema patriarcal.

1.2.1. Diferenciación entre femicidio y asesinato

Debemos destacar que entre el delito de femicidio y el asesinato existen distinciones que son de gran importancia. El asesinato a consideración del investigador ecuatoriano Zavala Baquerizo (2002):

(...) es uno de los delitos que conmueven la conciencia social, no sólo por el hecho de tener como objeto material a la persona, sino porque para cometer el homicidio se hace uso de ciertos medios, o el agente actúa por especiales motivos o fines el que demuestran su gran desprecio por la vida humana (...). (p. 17)

Adicionalmente a ello el destacado experto Francisco Muñoz Conde (2004) refiere que cuando se hace alusión a este delito, se debe entender cómo “(...) la muerte de una persona a consecuencia de la acción realizada por otra, valiéndose de medios especialmente peligrosos o revelando una especial maldad o peligrosidad (...)” (p. 48). De esta forma, queda claro que, el asesinato es el comportamiento que asume una persona con la mera finalidad de dar muerte a otra, empleando y utilizando un conjunto de medios necesarios, cuya finalidad y contundencia sean suficientes como para terminar con la existencia del sujeto destinatario de dicha acción.

En este sentido la intencionalidad puede ser variada, ello es el ánimo o los intereses de provocar la muerte de la otra persona, la que no obedece a criterios preestablecidos, sino que en esencia y principalmente, la voluntad es la de terminar con la vida de la otra persona, lo que no acontece en el caso del femicidio. Es imprescindible aquí referir la concepción que sobre asesinato expone el Código Orgánico Integral Penal (COIP) del Ecuador. En el artículo 140 se establece esta figura delictiva, que en esencia y tal como aborda la doctrina jurídica, es



un homicidio cualificado, porque deben darse el conjunto de circunstancias para que de forma efectiva y concreta pueda materializarse este injusto.

Siendo así, la norma penal ecuatoriana refiere que el asesinato es el acto por el medio del cual una persona mata a otra, cuando el ejecutor comete dichos actos contra un ascendiente o descendiente, cónyuge, conviviente, hermana o hermano; cuando la víctima se hubiera encontrado en demostrada condición de indefensión, por medio de cualquier acto que se relacione con la provocación de una inundación, envenenamiento, incendio; cuando se aprovechará de la noche o despoblado para ejecutar el acto; cuando haya crueldad en la ejecución del acto contra la víctima, cuando se realiza para ocultar el cometimiento de otro tipo de acto delictivo; cuando el fallecimiento es producido aprovechándose de la realización de concentraciones masivas, conmoción popular u otro tipo de evento; y, cuando se ejecuta contra una autoridad o personalidad pública o testigo protegido. (Ecuador, Asamblea Nacional, 2014)

Art. 140.- "Asesinato.- La persona que mate a otra será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años, si concurre alguna de las siguientes circunstancias: 1. A sabiendas, la persona infractora ha dado muerte a su ascendiente, descendiente, cónyuge, conviviente, hermana o hermano. 2. Colocar a la víctima en situación de indefensión, inferioridad o aprovecharse de esta situación. 3. Por medio de inundación, envenenamiento, incendio o cualquier otro medio se pone en peligro la vida o la salud de otras personas 4. Buscar con dicho propósito, la noche o el despoblado. 5. Utilizar medio o medios capaces de causar grandes estragos. 6. Aumentar deliberada e inhumanamente el dolor a la víctima. 7. Preparar, facilitar, consumir u ocultar otra infracción. 8. Asegurar los resultados o impunidad de otra infracción. 9. Si la muerte se produce durante concentraciones masivas, tumulto, conmoción popular, evento deportivo o calamidad pública. 10. Perpetrar el acto en contra de una o un dignatario o candidato a elección popular, elementos de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, fiscales, jueces o miembros de la Función Judicial por asuntos relacionados con sus funciones o testigo protegido. (Ecuador, Asamblea Nacional, 2014)

En torno al femicidio, conforme lo tratado anteriormente, es la provocación de la muerte de una mujer como consecuencia de su pertenencia al sexo femenino. El COIP refiere que:



Art. 141.- Femicidio.- La persona que, como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, dé muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género, será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años. (Ecuador, Asamblea Nacional, 2014)

Es claro que, en el acto de dar muerte a una mujer, se configura el femicidio, siempre que dicho acto sea consecuencia de las relaciones de poder que se han configurado en la vinculación o relación, hombre-mujer. Quiere con ello señalar que la materialización de esta figura delictiva, no basta con que el hombre de muerte a una mujer por el mero hecho de que esta pertenezca al género femenino, sino que es necesario que se evidencie que este acto, esté relacionado a un entorno constante de relaciones de poder y dominio, materializadas a lo largo de un periodo determinado y en el que se evidencie un ciclo constante de violencia, que delimite la naturaleza del empoderamiento del hombre por sobre la mujer.

Para la investigadora Marzabal Manresa (2013) en la determinación del delito de femicidio, es imperativo que se califiquen de forma adecuada y concreta determinadas circunstancias que delimitan el ánimo del agresor, y que por ello tipifican dicha figura delictiva, distinguiéndola del asesinato. Dentro de las condiciones que es necesario analizar y demostrar en juicio, son la manera de ejecución del acto, la dirección, el número y la violencia de los golpes, las condiciones sobre el espacio y el tiempo en el que tiene lugar, los elementos conexos que rodean el comportamiento, los actos precedentes a dicha acción, el vínculo existente entre la víctima y el victimario y definitivamente, la causa que da origen a la ocurrencia de dicho delito.

Es claro que a partir de estos elementos que se han referido, el femicidio y asesinato poseen una estrecha relación, pues el resultado final es el mismo, ello es, la extinción de la vida de otro ser humano. Sin embargo es el contexto en el que tiene lugar la acción de matar, la que le ofrece la distinción a una y otra figura delictiva, pues mientras el asesinato es la muerte a otro ser humano teniendo en cuenta determinadas circunstancias establecidas de forma taxativa en la norma penal, el femicidio es la provocación de la muerte en el que el sujeto destinatario de la acción siempre será una mujer, y que tiene como elemento condicionante la manifestación de relaciones de poder y la provocación de la agresión a la mujer por el mero hecho de pertenecer a dicho género.



CAPÍTULO II

MARCO JURÍDICO

2.1. El femicidio en Ecuador

2.1.1. Clasificación del femicidio

Teniendo en cuenta la evolución y el perfeccionamiento del trato que se ha dado al fenómeno del femicidio, es pertinente realizar una breve alusión a los diferentes tipos o manifestaciones del mismo, para lo cual se tendrá como fundamento lo expuesto por Diana Russell. Para esta académica la mayoría de la doctrina contemporánea, coincide en que el femicidio se manifiesta por medio de tres formas: el íntimo, no íntimo y por conexión.

El femicidio íntimo es aquel en el que el agresor o sujeto activo del delito es una persona con quien la mujer tiene o tenía, algún tipo de relación de orden íntimo, familiar, de convivencia o afines (Toledo, 2009).

La OPS refiere que el femicidio íntimo debe ser considerado como aquel “(...) cometido por un esposo o enamorado actual o anterior” (OPS, 2013, p. 1). De esta forma no quedan dudas, que el femicidio íntimo es aquel en el que existe una relación de cercanía y conocimiento absoluto entre el agresor y la víctima, materializado por medio de un vínculo que los hace cercanos. En este sentido según datos ofrecidos por la misma institución cerca del 35% del total de asesinatos hacia las mujeres que tienen lugar en todo el mundo, tienen como sujeto activo de la infracción a un individuo que puede ser considerado dentro del entorno íntimo de la víctima

Otra de las manifestaciones es el llamado femicidio no íntimo, realizado por extraños el que a consideración de Osorio Montoya (2017) siguiendo la postura de Barnuevo (2015) es aquella “(...) conducta criminal que comprende el ámbito de una muerte violenta causada por un hombre hacia una mujer con la que nunca llegó a sostener ningún tipo de relaciones íntimas, de familiaridad o convivencia” (p. 29). Por su parte la OPS siguiendo este mismo criterio refiere que este tipo de femicidio se trata del “(...) cometido por alguien que no tiene una relación íntima con la víctima” (OPS, 2013, p. 3).

Como se puede evidenciar en esencia las nociones sobre el femicidio no íntimo coinciden en la doctrina. Ciertamente este tipo de asesinato calificado, comprende aquel comportamiento en el que el hombre decide quitarle la vida a una mujer, por el mero hecho de



serlo y como consecuencia de circunstancias de dominio y poder por sobre el sexo femenino, pero en el que la víctima no guarda ninguna relación de familiaridad, convivencia, o intimidad para con el agresor.

Finalmente se encuentra el llamado femicidio por conexión. Esta manifestación implica a consideración de Pontón (2009) los asesinatos de mujeres que han tenido lugar, derivados de conflictos que pueden ser o no ser armados, en el ejercicio de una tarea de protección a otras mujeres. Se trata en esencia de aquellas muertes de mujeres que han tenido lugar, en ocasión de intentar garantizar la vida e integridad física de otras mujeres y que como consecuencia de ello han recibido de alguna forma, algún tipo de agresión que les haya provocado la muerte.

2.1.2. Análisis de los principales componentes en torno al femicidio en Ecuador

Ecuador como todos los países latinoamericanos, ha sido heredero de una cultura de orden androcéntrico y patriarcal, que ha insistido en una diferenciación y distinción de los roles que deben ser ejecutados tanto por los hombres como por las mujeres, en la que los primeros llevan a cabo el papel de jefatura en la casa, mientras que la actuación de las mujeres queda relegada al tradicional plano doméstico que implica la atención y cuidado del hogar y de los hijos. Aunque en la actualidad se ha avanzado favorablemente en este sentido, aún la cultura androcéntrica prevalece y se resiste en extremo su erradicación.

Entre los estudios pioneros en el orden nacional, en torno al femicidio, está el realizado por la investigadora y académica Ana Carcedo, quien con la colaboración de la académica costarricense Camila Ordóñez Laclé, en su estudio, concluyeron que el 77.5% de los fallecimientos de mujeres que pudieron contabilizarse entre los años 2005 a 2007, en el Ecuador, y de los que existía suficiente información como para poder analizar casuísticamente los hechos, pueden calificarse como femicidios; mientras que el 16.3% de ese total pueden concebirse como posibles actos de este tipo (Carcedo & Ordóñez, 2011).

En los últimos años, igualmente se han registrado un incremento en la materialización de femicidios en el Ecuador. Según la Comisión Ecuemenica de Derechos Humanos (CEDHU) en el país entre los años 2010 y 2013 se registraron un total de no menos 27 casos de femicidios, mientras que según datos aportados por la policía nacional sólo entre el año 2010



y 2012, se registraron 728 casos presumiblemente que podían calificar como femicidios (Ecuador, La Hora, 2013).

Según la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), conforme datos de la Fiscalía General de la Nación, en el país entre los años 2014 y 2017, fecha a partir de la cual se incluyó al femicidio como delito dentro del Código Integral Penal, los casos de femicidio han ido en aumento.

Según datos expuestos en los medios públicos del Ecuador en el año 2017 se registraban 132 casos de femicidios en todo el país, de los cuales la mayor cantidad de casos se registraban en la provincia de Pichincha, en la que el conviviente era en la mayoría de los casos el sujeto activo de dicha figura delictiva y en la que el *modus operandi* más empleado era el apuñalamiento (Ecuador, El Universo, 2018). Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en este mismo período se registraron en el Ecuador 91 casos, y en las que el 28.3% de los actos tuvo lugar en el domicilio de un familiar; el 26.2% ocurrió en el domicilio de la víctima; el 5.7% en el domicilio del victimario; el 34% de las víctimas tenían algún tipo de relación de convivencia con el agresor (Ecuador, INEC, 2017).

Según datos igualmente expuestos por el INEC, desde que entró en vigor la tipificación en el COIP del delito de femicidio, se han registrado 244 hechos delictivos de esta naturaleza de los cuales hasta el año 2017, 74 se encontraban en investigación previa, 10 en instrucción fiscal, 26 en etapa evaluatoria y preparatoria de juicio y 33 en la etapa de juicio. Adicionalmente a ello se expone que el 67.2% de los agresores ya han sido procesados, y del total de las causas que ya han sido resueltas el 82.1% tuvo sentencia condenatoria (Ecuador, INEC, 2017).

Según la CEDHU en el año 2017 se registraron en el Ecuador un total de 151 femicidios (Ecuador, El Universo, 2018). En el año 2018 hasta principios del mes de marzo se habían registrado en el Ecuador 18 actos de femicidios lo que equivalía a que cada 84 horas una mujer era asesinada por este concepto en el territorio nacional, manifestándose que el 83% del total fueron femicidios íntimos (Ecuador, El Comercio, 2018). Sin embargo, hasta el mes de abril de 2018, la suma ascendía a 25 mujeres, lo que implica que cada 3 días, es asesinada una mujer por cuestiones de género en el país, informándose igualmente que en el 82% de los casos los agresores fueron sus parejas, ex parejas o convivientes, lo que evidencia que el femicidio íntimo, continúa siendo el de mayor prevalencia en la realidad ecuatoriana (Ecuador, El Comercio, 2018).



Como elemento esencial de estos datos aportados se evidencia primero que no existe una fuente oficial que informe sobre el fenómeno en la realidad nacional, segundo, que es a través de los medios de comunicación, donde se puede obtener cifras que difieren entre ellos y que como es de considerar, no son datos oficiales que puedan considerarse como fidedignos. Como consecuencia de esta realidad ONU Mujeres, que es la institución de las Naciones Unidas encargadas de proteger y garantizar que en cada estado se implementen políticas nacionales, a favor de la mujer y para la erradicación de cualquier tipo de violencia de género, le interesó en el año 2017, la necesidad de que el Ecuador, ofrezca estadísticas claras en torno a los femicidios en el país. En una visita realizada por dicha instancia a finales del año pasado, se concluyó que si bien en materia legal y judicial se había avanzado mucho, es necesario que se dé un proceso de profesionalización de las cifras, pues las estadísticas aportadas por organismos de derechos humanos en el país difieren de las presentadas por los entes oficiales (Ecuador, Diario La Hora, 2017).

No obstante, esta realidad, y aunque se han dado pasos de avance en el orden legal y judicial, continúan realizándose esfuerzos por establecer mecanismos de protección hacia las mujeres. Por ejemplo recientemente en el mes de marzo del presente año, se convocó y realizó el “Primer Evento Técnico Científico sobre Femicidio – Ecuador 2018”, auspiciado por el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y la Universidad Andina Simón Bolívar, bajo el título “La investigación del Femicidio la medicina legal y ciencias forenses: la multi e interdisciplinariedad en el abordaje de la investigación del Femicidio”, donde se trataron cuestiones de gran relevancia en torno al fenómeno en el Ecuador (Ecuador, SNMLCF, 2018).

Adicionalmente a ello se ha creado una Comisión Interinstitucional de Estadística de Seguridad, cuyo objetivo es proponer los mejoramientos que sean pertinentes para producir la información estadística necesaria en materia de femicidio en el país, que permitan definir políticas públicas por medio de las cuales se intente reducir la materialización de este tipo de comportamientos. Esta comisión estará integrada por el gobierno nacional, el INEC, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, la Fiscalía General del Estado, el Consejo de la Judicatura y el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos (Ecuador, Ministerio del Interior, 2017).

En sentido general estas son las principales cuestiones que han sido abordadas en torno a la naturaleza y manifestación del femicidio en el Ecuador. De esta forma podemos

concluir, que este tipo de comportamientos continúan en la realidad nacional, observándose de ello la ineficacia de las políticas públicas aplicadas. También queda claro que la forma que en mayor grado ocupa este delito, son los llamados femicidios íntimos, evidenciándose que, en la gran mayoría de los casos, las víctimas son familiares, convivientes, ex convivientes, o parejas del agresor, lo que induce a creer que es en las relaciones de intimidad donde con mayor frecuencia se materializan este tipo de comportamientos, y es a donde con mayor énfasis se debe orientar la atención pública.

2.2. La víctima en el delito de femicidio

Cualquier análisis en torno a la manifestación del delito de femicidio, impone la necesidad investigativa de hacer breves referencias a un conjunto de cuestiones que de forma innegable inciden en el comportamiento de este hecho delictivo. Aunque no se intenta con este punto proveer un profundo y suficiente análisis de orden criminológico, que permita determinar los fundamentos que posee la víctima y permiten que se encuentren un constante ciclo de violencia de género, que no en pocas ocasiones, termina con su fallecimiento. Es por ello que antes de terminar el análisis doctrinal en torno a todas y cada una de las categorías estudiadas, nos planteamos como un último aspecto analizar, el contexto familiar, laboral y social en el que se desarrolla y educa a la mujer, y que la ubica en la situación de desventaja ante este tipo de fenómenos.

2.2.1. Análisis del contexto familiar, laboral y social de la víctima

Está claro que el entorno familiar, laboral y social del individuo incide en la construcción de la personalidad. Ciertamente la formación del ser humano está dada por un conjunto de elementos de gran valía, que determinan sin lugar a duda el comportamiento del individuo en su madurez. El comportamiento de la mujer, es el resultado del medio en el que se ha desarrollado y ha influido sobre ella.

Los investigadores Martínez, Anaya & Salgado(2014) quienes analizaron la incidencia de la educación y la familia en la construcción de la personalidad y con ella de las virtudes y defectos del ser humano, concluyeron que:

(...) queda patente la confluencia, puesto que, vistas así las cosas, también podríamos decir que los estilos y las dinámicas familiares facilitan o dificultan el desarrollo de las virtudes sociales, por cuanto la conciencia de la propia filiación —en virtud del tipo de



vínculos originarios que se establezcan— se ve favorecida o dificultada (...) A su vez, las virtudes sociales (...) ponen de manifiesto la existencia de estructuras familiares equilibradas, sanas, con estilos de autoridad ajustados que permiten un desarrollo armónico de la personalidad. (p. 463)

Esta reflexión deja claro el hecho, de que los patrones y normas que se practican en el ámbito de la familia, se traducen en comportamientos sociales acordes a las exigencias y necesidades de cada ambiente. Es claro que la educación y lo que se percibe en el proceso de formación y desarrollo a lo largo de la historia de un individuo, inciden de forma definitiva en la construcción de su personalidad. Es así como las normas de comportamiento que se practican en una familia, las dinámicas que tienen lugar a su interior originan en el propio ser humano una consciencia derivadas de la filiación, que determina su comportamiento posterior.

Por así decir, una mujer que desde su infancia ha observado que en su seno familiar se estructuran relaciones erigidas sobre la base del poder y dominio patriarcal, incorporará dichos cánones de comportamiento a su personalidad, reproduciéndolos en la conformación futura de su propia familia. Es así como se coincide con el criterio expuesto por el investigador López(2015) desde el entorno familiar es necesario promocionar y garantizar una educación en igualdad, capaz de romper y quebrantar con los tradicionales cánones impuestos por una cultura patriarcal, que vulneran los más elementales principios de la existencia humana.

Otro entorno donde puede materializarse la violencia de género y donde es necesario adoptar medidas eficientes y concretas, es en el ámbito laboral. Refiere la investigadora Acevedo(2012) que en el ámbito de las relaciones de trabajo se pueden generar entornos que provean y manifiesten el resultado de las relaciones de dominio y empoderamiento del hombre. Como en cualquier otro tipo de relaciones, las laborales y todas las situaciones que se originen en ella se sustentan en criterios derivados de la concepción de clase, género y etnia, prácticas que son discriminatorias.

Teniendo en cuenta ello la ausencia de prácticas honestas y sanas en una empresa determinada, predisponen a sus trabajadores para que lo aprendido en el entorno familiar se reproduzca en el ámbito laboral. Es a partir de ello en que también a las mujeres se le establecen normas diferentes en torno a los horarios, a los contenidos de las actividades que deben realizar, a las prohibiciones de adoptar determinados comportamientos, a ser sujetos de



rumores y actos humillantes, a sufrir acciones derivadas del acoso sexual, o incluso cualquier tipo de agresión en el ámbito verbal. Desde nuestra consideración la violencia de género derivada en el ámbito laboral es consecuencia de la manifestación de una cultura de orden patriarcal y subordinada a cuestiones de dominio forjadas en el entorno familiar.

Finalmente, el entorno social de la víctima es uno de los elementos que igualmente poseen gran relevancia para el análisis de la violencia de género. Sobre este aspecto los investigadores de Vera & Rodríguez(2009) refieren que en el ámbito de la construcción de la personalidad inciden determinados componentes siendo uno de los más importante los llamados “(...) valores del grupo social de pertenencia, que hace posible un proceso identitario basado en los valores del colectivo (...) lo cual implica un auto concepto y bienestar subjetivo vinculado a las normas y reglas del grupo (...)” (p. 101).

En este sentido es claro que la pertenencia de la mujer a un grupo determinado, le impone de forma objetiva y concreta el necesario cumplimiento de un conjunto de reglas de comportamiento que deben obedecer a los cánones establecidos en dicho grupo, derivándose de ello asumir un conjunto de comportamientos que obedecen a la cultura grupal. Es así como el ente comunitario incide de sobremanera en las consideraciones sobre las relaciones de dominio y poder dentro de un grupo social determinado. Construir por ende una cultura sustentada en una colectividad igualitaria es requisito indispensable para disminuir cualquier tipo de comportamientos sustentado en el patriarcado y con ello la eliminación de cualquier manifestación de violencia de género.

El sometimiento de las mujeres a todos estos estilos y dinámicas de formación de su personalidad, le proveen sin lugar a duda de rasgos distintivos proclives a la permisión de ser agredida. Es así que, si en el ámbito familiar se estructuraron relaciones sustentadas en el dominio de lo masculino, estas reforzadas en el ámbito social, se materializarán en lo laboral. De esta forma se puede considerar que la fémina sufre tal y como lo exponen Flores y Olamendi(2012) por ende del llamado Síndrome de Indefensión Aprendida, que “Consiste en el desarrollo de un lazo traumático -afectivo que une a la víctima con su agresor a través de conductas de docilidad y sumisión” (p. 41); o el llamado Síndrome de Estocolmo descrito como un “(...) vínculo interpersonal traumático -afectivo entre la víctima y su agresor” (p. 41), que se materializa en esencia en aquellas féminas que han sido sometidas a cualquier tipo de maltrato por parte de sujetos con lo que se encontraban íntima y sentimentalmente relacionados, y en la que constantemente justifican el comportamiento agresivo de la pareja,



dependiendo absolutamente de ellos por lo que le resulta imposible reaccionar ante las constantes actitudes violentas.

En sentido general, es indudable que los entornos familiar, laboral y social guardan una estrecha vinculación con el fenómeno de la violencia de género en general y el femicidio en particular. De esta forma la construcción de una personalidad sumisa y atada a los cánones imperantes de una cultura machista y patriarcal, caracterizadas por el dominio absoluto de lo masculino por sobre lo femenino, son consecuencia de una desestructuración de la naturaleza cultural, formada en la familia, sostenida y reforzada en la sociedad y materializada e igualmente continuada en el ámbito laboral. Es así que desde nuestra concepción es en estos tres entornos, donde se deben dirigir en esencia las medidas o políticas de prevención de la violencia de género.

2.3. La protección a la mujer y regulación del femicidio en Ecuador

A partir de la necesidad internacional y nacional de garantizar los derechos humanos de las mujeres, Ecuador ha implementado un conjunto de preceptos legales que buscan asegurar a la mujer el desarrollo pleno de sus capacidades en un entorno sano. Es así como se han promulgado un conjunto de leyes y ratificado un sinnúmero de instrumentos jurídicos internacionales, en aras de lograr garantizar dichos objetivos. Sin embargo, entendemos bien que la sola formulación jurídica no conlleva un cambio fáctico en las relaciones de género. En este capítulo se busca analizar el marco jurídico nacional el que permite indiscutiblemente realizar una valoración sobre la eficacia o no de las normas existentes en el ordenamiento jurídico nacional para enfrentar esta problemática.

2.3.1. Constitución de la República

Durante los dos últimos lustros en el Ecuador, se ha evidenciado una fortalecida corriente de defensa y promoción de los derechos de las mujeres, comprometida primero con que se reconozcan y se consagren en la norma constitucional, y luego que se promuevan y respeten los mismos. Y es justamente, que, como producto de esa lucha constante y denodada, progresivamente se va logrando ese propósito en los diferentes ámbitos de interés para las mujeres.

La década de los noventa, fue para las mujeres la oportunidad para favorecer sus derechos, es así que las acciones unificadas de los movimientos feministas de aquella época



incidieron favorablemente para que sus planteamientos sean acogidos en buena medida en la Constitución de 1998.

A inicios del nuevo milenio, el momento coyuntural de la época, respaldado por una significativa participación del movimiento femenino en la vida política, conjuntamente con otros movimientos sociales, reclamo una profunda reforma a la estructura social y política del estado ecuatoriano, requerimiento que solo fue posible a partir de enero de 2007, cuando Rafael Correa asumió el cargo de presidente de la República y convocó a una Asamblea Constituyente de Plenos Poderes para redactar la nueva Constitución, oportunidad que fue aprovechada con plena justicia para ampliar sus derechos, en donde se plantearon justas reivindicaciones, como prioridades irrenunciables de las mujeres, las que fueron acogidas y plasmadas en la nueva carta magna.

Entonces la nueva Carta Magna, debe entenderse como un instrumento jurídico político que renueva la estructura social y política del Estado y que favorece entre otros aspectos muy importantes, la promoción de los derechos fundamentales y la dignidad de las mujeres, garantizando la equidad, la justicia social, y paridad en su composición.

Complementariamente a lo anotado, el art. # 4 de la Carta Democrática Interamericana (CDI), destaca como componente fundamental del ejercicio de la democracia, el respeto a los derechos sociales, ante ello la proclamación contenida en el artículo primero la nuestra Constitución, con el carácter de ser un Estado Constitucional de Derechos y Justicia Social, es lo que compromete al estado mismo a convertir la igualdad en uno de sus objetivos, basando su actuación en la construcción de mecanismos democráticos que rompan el sistema estructural vertical, jerárquico y patriarcal.

Para Ávila Santamaría (2011) este carácter de Estado Constitucional de Derechos y Justicia Social, le significa al Estado entre otras obligaciones, contar con una herramienta jurídica que le permita a la luz de normas constitucionales proteger los derechos humanos, y dentro de esta protección general, la defensa en particular de los derechos humanos de las mujeres, puesto que la violencia contra las mujeres se ha reconocido como una vulneración que limita el goce de sus derechos.

El precepto constitucional de protección de los derechos humanos de las mujeres, no se justifica con solo encasillar jurídicamente los hechos de violencia denunciados dentro del catálogo de delitos, juzgarlos y dictaminar una medida de protección a las víctimas y sanción



a los victimarios, más bien es un derecho activo a vivir “*una vida libre de violencia*”, desde una visión de género, erradicando las inequidades que entraña el ejercicio de poder y control social, que generan la tendencia de violencia contra las mujeres.

La Constitución de la República del Ecuador, aprobado en el año 2008, establece el conjunto de principios y valores esenciales de todas las relaciones sociales en el país. La Carta Magna ecuatoriana regula entre otras cuestiones el deber del estado de garantizar sin ningún tipo de discriminación, el disfrute de todos y cada uno de los derechos reconocidos tanto en la citada norma, como en aquellos preceptos de orden internacional (art. 3). Adicionalmente se reconoce en el artículo 11 numeral 2 el hecho de que todas las personas en el Ecuador son iguales y que por ende pueden disfrutar de los mismos derechos, deberes y oportunidades, prohibiéndose la discriminación por cualquier criterio, dentro de lo que se encuentra la pertenencia a un sexo determinado (Ecuador, Asamblea Constituyente, 2008).

En el artículo 35 referido a los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, la Constitución, ubica a las mujeres dentro de aquel sector poblacional que tiene derecho a recibir atención prioritaria y especializada tanto en el orden público como privado. Las sitúa también dentro de aquel conjunto de personas de atención prioritaria, ante la posibilidad de que fueren víctimas de algún tipo de manifestación de violencia doméstica o sexual. En el artículo 43 se establece la prohibición de que las mujeres embarazadas reciban algún tipo de trato discriminatorio por el mero hecho de estarlo.

Dentro de los derechos de libertad reconoce el derecho a la integridad personal en su artículo 66 numeral 3, refiriendo que todas las personas tienen derecho a vivir una vida libre de violencia en todos los entornos de su vida, estableciendo en el inciso b, que se deben adoptar todas las medidas pertinentes para erradicar cualquier manifestación de violencia, especialmente aquella que es ejercida en contra de las féminas. En el artículo 70 se reconoce el deber del Estado en formular y ejecutar el conjunto de políticas cuya finalidad sea el logro de la igualdad de género, particularizado entre el hombre y la mujer.

En el artículo 33, la Constitución reconoce el deber del Estado de garantizar a la mujer el pleno derecho al acceso al empleo, en condiciones de igualdad con los hombres, prohibiendo cualquier tipo de discriminación, acto de violencia o acoso en el entorno laboral que tenga como sujeto destinatario a las mujeres. En sentido general, éstas son las principales consideraciones que reconoce la Carta Magna ecuatoriana en torno a la protección de las mujeres.

2.3.2. Acuerdos y Tratados Internacionales

Internacionalmente se han aprobado un conjunto de instrumentos jurídicos de gran relevancia, que han constituido el fundamento esencial y el apoyo fundamental para que los diferentes países regulen sus normativas de protección a las mujeres en contra de cualquier tipo de violencia en general, y específicamente en el ámbito del femicidio. Entre ellos, uno de los más importantes instrumentos es la *Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer*. En esta norma se regula el hecho de que todo acto de violencia que atente contra las mujeres, sería como una forma de discriminación (art. 1). Adicionalmente, en su artículo 2 reconoce el deber de las partes signatarias, de promulgar las normas jurídicas pertinentes que prohíban cualquier acto discriminatorio en contra de este sector poblacional, garantizando la igualdad con relación al hombre, estableciendo las sanciones contra cualquier comportamiento de discriminación, ya fuere en el entorno administrativo como judicial, así como eliminar cualquier disposición, decisión o ley que presuponga la posibilidad de que la mujer sea discriminada (ONU, 1979).

También establece el deber de los Estados, de adoptar todas las medidas que fueren necesarias para erradicar cualquier tipo de prejuicio o estereotipo que imponga actos diferenciadores para los hombres y las mujeres (art. 5). Impone a los miembros firmantes, la obligación de establecer normas y decisiones por medio de las cuales se elimine cualquier tipo de trata de mujeres y explotación sexual por medio de la prostitución (art. 6). Adicionalmente en su artículo 11 establece el deber de que se adopten todas las decisiones jurídicas pertinentes para garantizarle a las mujeres el pleno acceso al empleo, y su protección en situación de desventaja como pudiera ser la etapa del embarazo, entre otras cuestiones(ONU, 1979).

Otro de los instrumentos existentes en el orden internacional, constituyen las recomendaciones generales dictadas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW). De especial relevancia es la Recomendación General No. 12, en la que se recomienda a todos los Estados, a que incluyan en los informes periódico que deban realizar al Comité información, sobre las políticas públicas y normativa jurídica que ya ha sido dictada para garantizar la protección a las mujeres contra cualquier acto de violencia, así como los servicios instituidos en cada país a los efectos de apoyar a las víctimas de violencia de género(ONU, CEDAW, 1989).



De igual relevancia es la Recomendación General No. 19, en la que se establece que la violencia en contra de las mujeres constituye un acto de discriminación acorde a lo establecido en la Convención. Aclara que cualquier acto de violencia realizada por autoridades públicas, también constituye un acto de violación de las obligaciones de los gobiernos al no impedir la realización de este tipo de actos en contra de las féminas. Expone que los Estados son responsables, por el hecho de no impedir a tiempo o por omisión, de cualquier comportamiento en el entorno público o privado que atente contra la dignidad y los derechos humanos de las mujeres. Invita a reconocer los derechos humanos de las prostitutas, resultante de un respeto a ultranza del principio de igualdad, y por ende la necesidad de también establecer medidas que garanticen la vida e integridad personal de dicho sector(ONU, CEDAW, 1992).

En el año 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en el que convoca a todos los países, a dictar cuantas medidas y normas fueran necesarias y que permitieran a todas las autoridades y funcionarios encargados de garantizar la protección a las mujeres, de adoptar las políticas pertinentes para ello, así como establecer las sanciones que fueren necesarias y las políticas de concientización en la sociedad(ONU, Asamblea General, 1993).

También es de gran importancia la llamada Declaración y Plataforma de Acción de Beijín. En este documento se aprueban un conjunto de objetivos estratégicos que los Estados deben implementar en sus respectivos países. Dentro de ellos se encuentra la necesidad de impartir la enseñanza y capacitación en materia de derechos humanos que sea necesario, y que se enfoque desde una perspectiva de género a todo el personal policial, militar y penitenciario, a los efectos de sensibilizarlos con las cuestiones vinculadas a las mujeres. También alienta la aplicación de cualquier tipo de medida que tienda a determinar las causas y efectos que genera la violencia de género en contra de las mujeres. Incita a la promulgación de leyes que establezcan sanciones para aquellos miembros de las fuerzas policiales o militares que por cualquier acto realicen un atentado en contra de la integridad personal de las mujeres, entre otras cuestiones(ONU, 1995).

En sentido general estos son los principales instrumentos jurídicos internacionales en materia de protección de los derechos de la mujer. Adicionalmente a ello existen un conglomerado de recursos igualmente interesantes, que en su conjunto lo que hacen es reforzar los pronunciamientos de los principales tratados y convenios ya señalados. De esta

forma se pueden mencionar la Resolución No. 52/86 del Asamblea General de las Naciones Unidas sobre medidas de prevención del delito y de justicia penal para la eliminación de la violencia contra la mujer(ONU, Asamblea General, 1998); la Resolución No. 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que exhorta y delimita la importancia de la participación de las mujeres en el logro de la paz, así como la necesidad de que las mujeres tengan un papel activo en las negociaciones en todo el mundo en el logro de tales objetivos(ONU, Consejo de Seguridad, 2000).

Como se evidencia, en el entorno internacional existen un conjunto de instrumentos jurídicos foráneos, de gran valía en la lucha a favor de los derechos humanos de la mujer. Desde los mismos se logra construir un marco legal de gran valía en la lucha contra cualquier acto discriminatorio o de violencia que atente contra los derechos humanos de las mujeres. De esta forma se han convertido en un referente de innegable relevancia a los efectos de incluir sus postulados en los ordenamientos jurídicos nacionales.

2.3.3. Código Orgánico Integral Penal (COIP)

El COIP regula de forma concreta el acto de femicidio estableciendo la figura delictiva de la forma siguiente:

Art. 141.- Femicidio.- La persona que, como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, dé muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género, será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años.(Ecuador, Asamblea Nacional, 2014)

De esta definición se pueden determinar determinados elementos esenciales, tales como el hecho de que el femicidio se erige en esencia en un asesinato, pero con caracteres especiales, porque el dar muerte a una mujer quien siempre debe ser el sujeto destinatario de los actos vulneradores de la norma, y cuya acción esté terminada por la derivación de una manifestación en las relaciones de poder. En este sentido no el mero asesinato de una mujer, sino que el comportamiento violento que termine la muerte de la misma, tiene que ser como consecuencia de una consideración personal de superioridad y dominio con relación a esta, por lo que el hecho de pertenecer a dicho género, constituye el animus o motivo esencial en la adopción de dicho comportamiento.

Para dicha figura delictiva se regulan un conjunto de circunstancias agravantes, establecidas en el artículo 142. En este sentido el legislador estableció que se debe imponer el máximo de la pena cuando el victimario haya cometido dicha infracción en aras de haber pretendido establecer o restablecer cualquier tipo de relación de intimidad con la víctima; cuando haya existido con esta algún tipo de familiaridad o vínculo conyugal, de convivencia, intimidad, noviazgo, compañerismo, u otro vínculo en los que haya enterado confianza entre víctima y victimario. Otra de las circunstancias agravantes es el hecho de que el acto o de dar muerte a la mujer, hubiere sido realizado en presencia de la descendencia u otro familiar de la mujer; así como, que el cuerpo de la víctima hubiera sido expuesto o arrojado en cualquier lugar de acceso público.

2.3.4. Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la Violencia a las Mujeres

Como una de las más recientes acciones por parte del Estado ecuatoriano, en su intención de perfeccionar los mecanismos legales que garanticen la erradicación del femicidio y de cualquier acto de violencia hacia la mujer, fue la promulgación de la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, en el mes de febrero de este año 2018. En este sentido la citada norma establece que su finalidad es la prevención y erradicación de cualquier tipo de violencia que pueda ser ejercitada contra las féminas, por medio de la transformación de las reglamentaciones y componentes de la cultura y estereotipos que sustentan la desigualdad en torno a ello (Ecuador, Asamblea Nacional, 2018).

Un elemento importante de la citada norma es el hecho de que conceptualiza que entender por violencia de género contra las mujeres, estableciendo que puede ser concebido como cualquier comportamiento que basado en el género provoque algún tipo de daño, muerte, o sufrimiento en los entornos físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial, a las mujeres en cualquiera de los órdenes público o privado (art. 4). Adicionalmente reconoce el conjunto de derechos que poseen las mujeres, estableciendo como tales el derecho a una vida libre de violencia, a que se respete su dignidad e integridad, a la educación en un contexto de interculturalidad, a recibir información de forma oportuna y clara, a que se le garantice la confidencialidad y privacidad de todos sus datos, a recibir orientación asistencial de forma gratuita y especializada, a ser escuchadas, entre otros (art. 9).

Reconoce además y conceptualiza los tipos de violencia, determinándolos en el ámbito físico, psicológico, sexual, económico y patrimonial, simbólico, político y gineco-obstétrica (art. 10). Regula un sistema nacional de protección de los derechos de la mujer, con un conjunto de ejes de trabajo en el ámbito de la prevención, de atención, de protección que en su conjunto determinan el actuar de dichas autoridades. Estos son los principales elementos que comprende la referida normativa. Sin lugar a duda constituye un esfuerzo de importancia para intentar disminuir las manifestaciones de violencia de género y femicidio en el Ecuador. Le corresponderá al tiempo de terminar si los preceptos contenidos en dicha ley, son eficientes para lograr tales fines.

2.4. Análisis del tipo penal de femicidio en el COIP

2.4.1. Tipicidad

Como se sabe el conjunto de acciones u omisiones que en el orden delictivos realiza una persona, son narradas y descritas por la norma, denominándoseles tipos penales. De esta forma es claro que la infracción sería como un hecho de carácter típico, delimitándose por medio del conjunto de elementos que estructuran la figura creada por el legislador y plasmada en la norma. Es así como las circunstancias que caracterizan e identifican determinado comportamiento, cuando coincide con la descripción fáctica detallada en la ley, es lo que se le denomina tipicidad. Se trata en esencia del conjunto de conductas que asume un individuo, que permiten encuadrarlas en el catálogo penal de comportamientos o que se consideran como infracciones básicas que sustentan el delito.

En este sentido tal y como se ha expuesto en el delito de femicidio regulado en el artículo 141 del COIP, la tipicidad está dada por el hecho de dar muerte a una mujer. En este sentido el verbo rector en esencia es este, por lo que implica el provocar de forma voluntaria y consiguiente el fallecimiento de una mujer. En este aspecto hay determinadas circunstancias que son de relevancia en la tipicidad del femicidio, y es que dicha acción se deriva por el hecho de que la víctima es una mujer, o por la condición de pertenencia a dicho género.

2.4.2. Antijuricidad

Una vez que el operador jurídico ha logrado encuadrar el comportamiento del individuo en el verbo típico delimitado por la norma correspondiente a la figura delictiva de referencia, es necesario analizar si dicho comportamiento es antijurídico. Esto implica la necesidad de realizar el llamado juicio de valor de dicha conducta, de forma tal que se deduzca si el comportamiento realizado por el sujeto que cumple con los estándares normativos establecidos en la tipicidad de la figura delictiva, generó peligro o lesionó el bien jurídico que se protege con la regulación de dicho delito. En esencia se trata de un acto valorativo que realiza el operador jurídico para determinar si en efecto, el comportamiento típico atentó o puso en peligro o dañó el bien jurídico tutelado.

Está claro que en el delito de femicidio, el bien jurídico tutelado es la vida de la mujer. En este sentido es claro que no basta para que se configure la figura delictiva descrita, la mera realización de comportamientos que hayan provocado lesiones en la víctima, sino que es necesario que el resultado del acto o del infractor, sea la provocación del fallecimiento de la persona, o la realización de un comportamiento que objetiva y concretamente hagan presumir que, aunque no se logró la muerte de la mujer, la intencionalidad fue esa. Es claro que en torno al comportamiento del individuo existen un conjunto de circunstancias, que no siempre le permiten consumir el acto, es así como el femicidio en una figura que, aunque presupone como comportamiento típico la producción de la muerte de la mujer, ésta pueda realizarse y admite la tentativa.

2.4.3. Culpabilidad

La culpabilidad se refiere al juicio de declaración o una manifestación de la intencionalidad del sujeto. Se materializa través del dolo o la culpa. En torno al dolo, aunque existen varios elementos o teorías que intentan explicarlo, en esencia constituye la intencionalidad que posee el sujeto infractor de cometer el hecho porque sabe que, haciéndolo, logra el resultado deseado. De esta forma es claro que se materializa un elemento intelectual por medio del conocimiento y en este sentido asume la conducta, y otro elemento volitivo, pues existe deseo de lograr el resultado concordante con su actuar. Por su parte la culpabilidad o imprudencia como lo delimitan muchos ordenamientos jurídicos, es aquel comportamiento en el que el sujeto actuante previó la posibilidad de que tuviera lugar los efectos dañinos de su comportamiento, esperaba evitar dichas consecuencias; o cuando aun debiendo haber previsto dichos resultados peligrosos para el bien jurídico tutelado, no lo hizo.



En el delito de femicidio, en materia de culpabilidad, rige el dolo. El acto marcado de dar muerte a una persona del sexo femenino por el mero hecho de pertenecer al mismo, y como derivación del ejercicio de las relaciones de dominio o poder, implica agotar el elemento cognitivo y volitivo que exige la figura del dolo. En este sentido, el hecho que se analiza, el actor tiene el conocimiento de que su comportamiento provocará indudablemente el fallecimiento de la mujer; siendo igualmente su intención con el conjunto de actos a realizar, privarle de la vida.

2.5. Aspectos vinculados con la ejecución de la infracción

2.5.1. Autoría

En materia de autoría, es claro que el individuo o sujeto activo en la materialización del hecho delictivo de femicidio, puede ser en principio cualquier persona. Aunque pudiera parecer que solamente el sujeto infractor en la materialización de dicho injusto, tuviera que ser un hombre, no necesariamente tiene que ser así. El hecho de que el legislador en el COIP estableciera como el elemento activo que debe realizar el hecho por medio de la denominación “La persona”, implica que el autor en la configuración del elemento típico del mismo no se limita o restringe al hecho de ser del sexo masculino. Es así como, en este sentido el ejecutor del fallecimiento de la mujer, aunque mayormente es un hombre, no necesariamente tiene que serlo.

Baste con que se trate de una persona, con el que la víctima posee algún tipo de relación o la ha tenido, y que como consecuencia de esas relaciones de poder materializadas a través de comportamientos de violencia, provoque el fallecimiento de la otra persona por el mero hecho de pertenecer al género femenino. En este sentido y en principio, las personas de este sexo, también podrían ser en un entorno determinado autores del hecho delictivo de femicidio.

2.5.2. Participación

La participación como es conocido, es el comportamiento que asumen determinadas personas que sin impactar o incidir de forma directa en los objetivos planteados con una infracción típica, participan en la consumación del mismo. Se trata de determinados elementos personales que apoyan o ayudan al individuo principal, ello es al autor, al agotamiento de la conducta típica. Es así como desde nuestra consideración en el delito en



cuestión, se puede materializar las diferentes manifestaciones de la participación, ello es en esencia la complicidad. Diversas podrían ser las acciones ejecutadas por otros individuos, con la finalidad de que el autor pueda ejecutar de forma concreta el fallecimiento o de la fémina y lograr los objetivos planteados con su comportamiento directo. De esta forma a estos partícipes, que claramente no tendría la condición de autores, se les trataría en virtud de las reglamentaciones establecidas para los mismos.

2.5.3. Tentativa

La tentativa consiste en la incapacidad que posee el autor de un hecho delictivo para completar el elemento típico de la acción descrita en la norma. Se trata del no agotamiento de los verbos rectores descritos en el delito. De esta forma en el delito que se analiza, claramente en muchas ocasiones el autor no lo logra consumir todas las acciones para lograr efectivamente el fallecimiento de la mujer. Esta materialización deriva en esencia de dos elementos fundamentales. Una pudiera ser la tentativa derivada de la concientización por parte del autor y un arrepentimiento en el último momento, de consumir el hecho delictivo. En este sentido estaríamos en presencia de un arrepentimiento voluntario, en el que se eliminaría el elemento volitivo de la intencionalidad, ello es del dolo.

Otro elemento por medio del cual se puede materializar la tentativa, es cuando influyen agentes externos a la voluntad del autor de la figura delictiva, que impiden que éste logre consumir el hecho. En muchas ocasiones el sujeto activo de la figura del femicidio, no logra agotar el elemento típico y la intencionalidad que establece el comportamiento de la figura, debido a la intervención de otros individuos que evitan que este consuma el hecho. En este punto se mantenían en el sujeto el elementos volitivo y cognitivo, configurándose de forma absoluta el dolo y con ello la intencionalidad de lograr tales fines, pero es abortado por voluntades ajenas a su persona. En ambos casos la normativa establece el tratamiento para tales situaciones.

CAPÍTULO III

POLÍTICAS PÚBLICAS

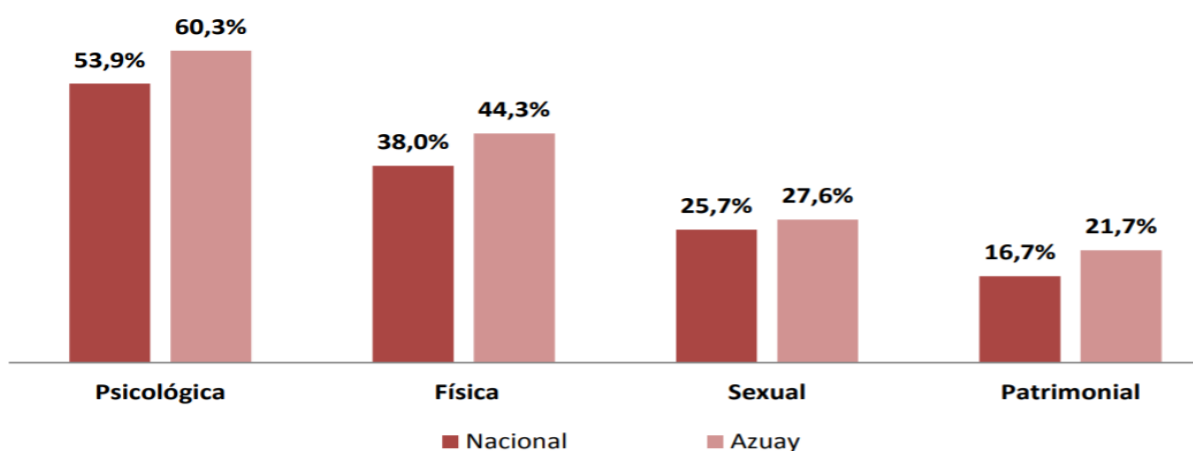
3.1. Contexto de la Violencia contra la mujer y femicidio en Cuenca

Como se ha consignado a lo largo de la investigación, el femicidio es un fenómeno que ha afectado a todo el Ecuador y, en particular, a la ciudad de Cuenca en la cual se desarrolla la presente investigación. Aunque se han considerado un conjunto de acciones, la realidad no es alentadora, puesto que para combatir de forma eficiente y adecuada la violencia de género en general y el femicidio en particular las acciones deben darse de forma conjunta entre las principales instituciones del Estado.

El Azuay es uno de las provincias ecuatoriana en la que los datos sobre violencia de género alcanzan cifras preocupantes. Según datos del INEC, esta provincia registra un 68.8% de índice de violencia de género con respecto al resto del país, encontrándose un 8.2% por encima del promedio nacional. Esta realidad evidencia que existen deficiencias en torno a la implementación de estrategias locales que garanticen a la población y especialmente a las mujeres, la garantía de protección ante este tipo de eventos.

De las tradicionales formas de violencia de género, la psicológica es la que predomina, tanto en la media nacional como en la provincial. En todas las formas de violencia, Azuay se encuentra por encima del promedio nacional. El siguiente gráfico así lo evidencia.

Gráfico 1.



Fuente:(Ecuador, INEC, 2012).

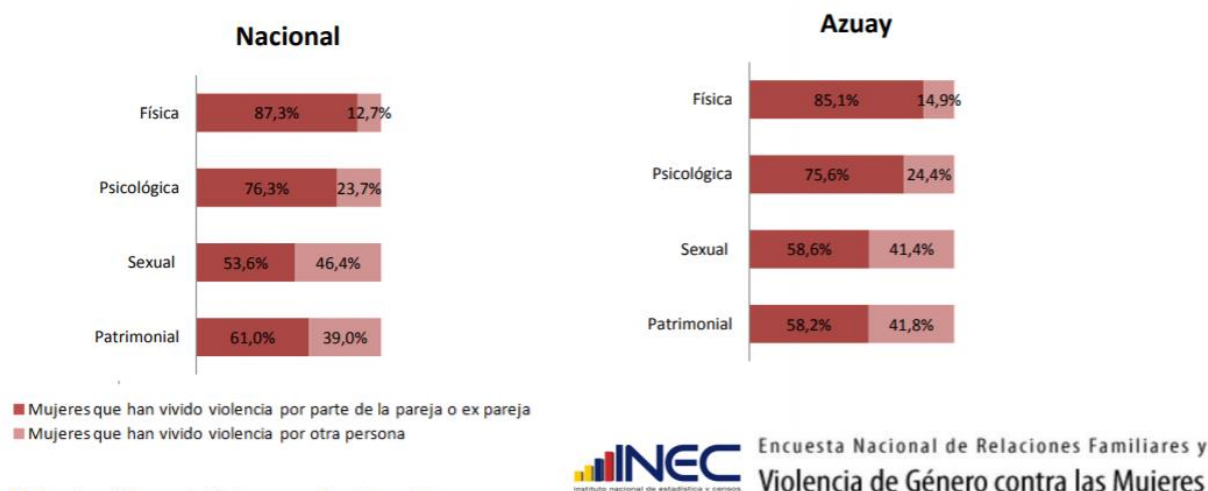
Con posterioridad a este año, no se cuentan con datos estadísticos oficiales que permitan conocer la relación entre hecho de esta naturaleza a nivel nacional y provincial. Lo

cierto es que en el año 2018, hasta el mes de noviembre, según cifras de la Fiscalía General del Estado, en el país se habían recibido un total de 66.506 denuncias por casos de violencia de género, de los cuales un aproximado de 2.000 habían tenido lugar en Azuay, lo que representa el 3% del total nacional, evidenciándose que aún continúa siendo un grave problema.

Como se evidencia en el Gráfico 1, es claro que la provincia del Azuay es una región en el que la violencia psicológica se manifiesta en un 60.3%, la física en un 44.3%, la sexual en un 27.6% y la patrimonial en un 21.7%. Esto, además, constituye un indicador que en todos los sentidos se encuentra por encima, como ya se ha explicado, del promedio nacional. Cabe destacar, que la ciudad de Cuenca, de entre todas las provincias del Ecuador, está identificada como una de las que más sentido de fe católica profesan, y son a veces estas manifestaciones y creencias extremas, las que arrastran social y culturalmente a una comunidad local a relegar derechos, a cambio de no des encasillarse del esquema tradicional.

Adicionalmente, el 85.1% de las féminas han sufrido la violencia física directamente de sus parejas, tal y como se muestra a continuación.

Gráfico 2.



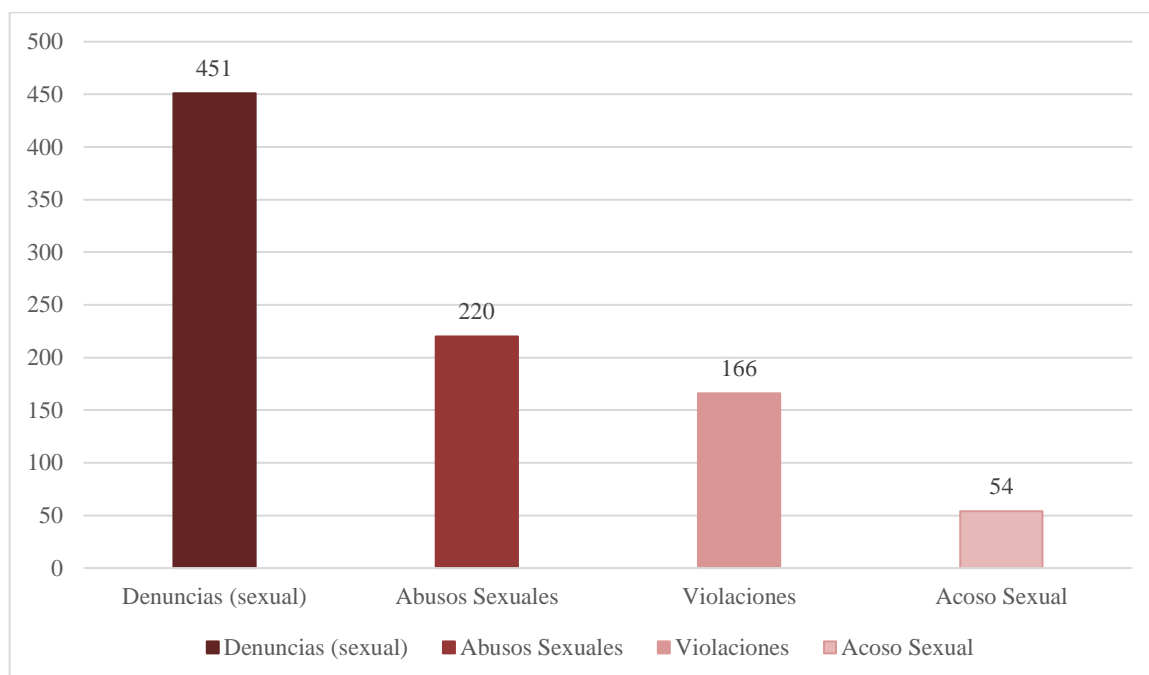
Fuente:(Ecuador, INEC, 2012).

De estos indicadores queda evidenciado que, en la provincia, el mayor porcentaje de actos de violencia hacia las mujeres procede de las parejas o ex parejas con las que la víctima ha tenido o tenía una relación. Esto ocurre en mayor medida en el índice de violencia física, seguida de la psicológica, de la sexual y, finalmente, de la patrimonial. Se puede observar que estas dos últimas manifestaciones de la violencia provienen de personas que no han tenido

vínculos íntimos con la víctima, lo que es ilustrativo de que la agresividad no solo se origina en las relaciones de intimidad entre víctima-victimario, sino que puede venir de cualquier persona. La violencia patriarcal rige en todas las esferas de la sociedad contra la mujer. (Ecuador, INEC, 2012)

En el cantón de Cuenca la situación no es tan diferente a la planteada en el entorno de la provincia.

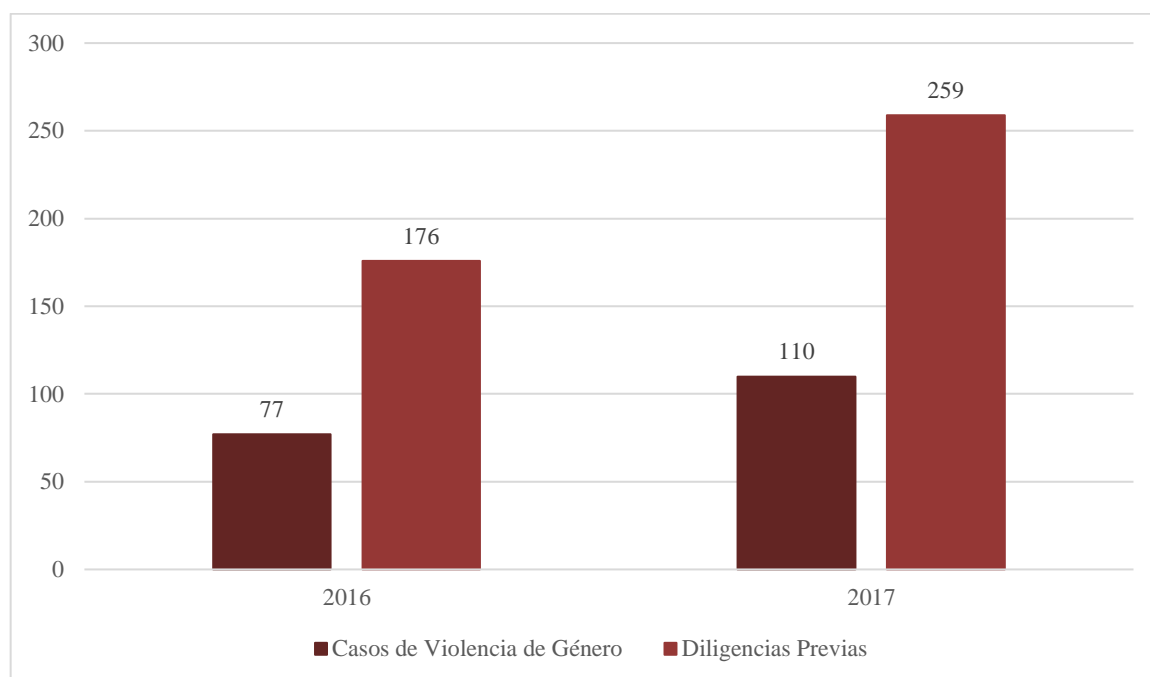
Gráfico 3.



Fuente:(Cuenca, GAD Municipal, 2017)

Según datos aportados por el Consejo de Seguridad Ciudadana de la ciudad de Cuenca, en el año 2016 el 72% de los casos los victimarios fueron personas conocidas a la víctima. Es de destacar que en este periodo, el 92% de los delitos sexuales que tuvieron lugar en el cantón, fueron contra mujeres (Cuenca, GAD Municipal, 2017).

En el año 2016, el 43% de los delitos sexuales cometidos en el cantón, tuvieron lugar al interior de los hogares, incrementándose los porcentajes de estos delitos en la vía pública y centros educativos. En el año 2017, la situación continuó empeorando. Según datos aportados por la Memoria Anual de la Fiscalía de Cuenca del año 2017, se registra en el cantón un incremento de los casos de violencia de género.

Gráfico 4.

Fuente:(Cuenca, FGE, 2018)

También del Informe de referencia se pudo constatar que en el cantón en el año 2017 hubo un total de 97 solicitudes para que se dictaran orden de protección a mujeres que se encontraban amenazadas o en estado de riesgo de ser agredidas por sus parejas o ex parejas, de las que 12 fueron rechazadas por el órgano judicial. También se evidencia que casi 100 sentencias de procesos de violencia de género han resultado en la absolución del victimario, principalmente por la negativa de las víctimas a declarar.

Hasta el mes de octubre de 2018, en la provincia del Azuay se han registrado un aproximado de dos mil denuncias por violencia contra las mujeres. Se han registrado en la provincia un total de 5 femicidios, de los cuales 3 han tenido lugar en el cantón Cuenca. Aunque los datos hasta el momento ofrecen una idea de que ha disminuido este indicador con relación al año 2017 (13 femicidios/Azuay), aún existen dificultades en este sentido en dicho territorio.

Adicionalmente, según el Consejo de Seguridad Ciudadana de Cuenca, de enero a septiembre del 2018, se han registrado un total de 394 delitos sexuales contra la mujer. En cuanto a denuncias por violencia intrafamiliar en igual periodo se han registrado un total de 1.311, de las cuales un total de 391 son por agresiones físicas, 803 psicológicas, 31 sexuales y 86 otros tipos de agresión. Todos estos elementos reafirman la idea de que, en dicho cantón, la situación de las mujeres no es la ideal.



Como se ha observado, entre actos de violencia de género y femicidio en el Azuay y en Cuenca, la situación es desalentadora. Como se ha analizado, las estadísticas claramente evidencian una realidad que contrasta en la misma dirección del país. Cuenca, no se encuentra ajeno a las prácticas en torno a la violencia de género ni a los asesinatos de mujeres por ser mujeres. Estos datos demuestran que, si bien es cierto se han realizado acciones importantes por evitar este fenómeno, en la realidad cuencana los resultados no son positivos, pues el incremento de comportamientos agresivos hacia las mujeres continúa siendo una problemática que aún no se logra erradicar. Aunque existen diversas acciones en Ecuador y en Cuenca para eliminar esta problemática y que serán analizadas en los puntos siguientes, la realidad demuestra la ineficacia de los mismos.

3.2. Políticas Públicas de Prevención y Erradicación de la violencia contra las mujeres en el Ecuador

Ofrecer un concepto de políticas públicas no es tarea fácil. A lo largo del tiempo la noción de esta categoría ha transitado por diferentes visiones, todas ellas condicionadas por el periodo histórico, así como por las condiciones económicas y sociales en las que se han desarrollado dichas posturas. Ello, unido a las dinámicas que han caracterizado al Estado en sus diferentes momentos evolutivos, ha provocado que las políticas públicas se hayan diseñado para satisfacer necesidades de la población, proteger intereses del Estado, garantizar beneficios de ciertas clases y muchas otras.

Para los académicos Torres-Melo & Santander(2013):

La política pública hay que comprenderla como el resultado de una acción colectiva que se desarrolla en lo público y de una serie de transacciones políticas, en donde el gobierno ya no tiene como único objetivo ejecutar lo planeado, sino también garantizar la coordinación y la cooperación de los actores clave. (p. 56)

Teniendo en consideración este aspecto, es claro que la determinación de una política pública se considera como la estructuración de un conjunto de acciones y medidas que de forma coherente y coordinada y en función del cumplimiento de ciertos parámetros, resulten en el logro de un objetivo favorable a la comunidad y al bienestar de todos los miembros de la sociedad. En este sentido, está claro que una política pública se erige como una actividad ejecutada por el hombre con la finalidad de que la convivencia y los estándares de vida sean mejores para una determinada comunidad. Es así que como bien expone Correa



Crespo(2012), las políticas públicas se erigen como una manifestación del poder público político que le es atribuido al Estado, pero también, y más importante, como una herramienta que permite mejorar en todos los sentidos, la vida humana.

La clasificación de políticas públicas ha variado de autor a autor. Todo depende de la perspectiva en que sea necesario delimitarlas. El académico Pastor(2014) afirma que las políticas públicas pueden clasificarse teniendo en consideración la autoridad institucional que las dicta, pudiéndose delimitar como nacional, regional, internacional, provincial, municipal, local; también, teniendo en cuenta el sector a la que van dirigidas, por lo que podrían clasificarse en políticas de educación, tributarias, de seguridad; según sus destinatarios, podrían ser políticas públicas de la tercera edad, para mujeres embarazadas, para niños; teniendo en consideración cómo se elaboran, pudiéndose clasificar en políticas autoritarias o participativas.

No obstante, existe en la doctrina una amplia consideración sobre la aportación de Theodore Lowi(1992), sobre las clases de políticas públicas, distinguiendo entre las políticas regulatorias que son aquellas que se establecen para lograr que se adopten ciertos comportamientos o se evite su realización por medio de la promulgación de normas para la sociedad en su conjunto; las políticas distributivas que son aquellas que están destinadas a ofrecer bienes y servicios a personas que se encuentran en alguna situación especial; las redistributivas aquellas medidas que son adoptadas para conceder ciertas ventajas ya no a casos concretos, sino a grupos de personas que se encuentran en una condición especial; y finalmente las políticas constitutivas, que son aquellas que establecen los fundamentos de los cambios propios del poder o el Estado.

Habiendo realizado estas observaciones iniciales, cabe destacar que, en el Ecuador, disímiles han sido las políticas públicas que se han adoptado en la lucha contra la violencia de género en general y el femicidio en particular. Desde hace más de 10 años, el Estado ecuatoriano se ha preocupado para poner en práctica políticas públicas que han sido diseñadas para eliminar el problema de la violencia de género en el país. Una primera norma de relevancia lo constituyó, la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, del año 1995. En esta norma, que constituyó una de las primeras políticas públicas de orden normativo que se adoptó en el país, se establecía que era pertinente adoptar políticas de Estado que garanticen la protección de la integridad física, psíquica y libertad sexual de la mujer y los miembros de la familia (art. 1).(Ecuador, Congreso Nacional, 1995)



Un aspecto importante de esta norma, es que define qué entender por violencia física, psicológica y sexual, permitiendo la comprensión de dichos fenómenos en la realidad nacional (art. 4). También establece ciertos principios procesales que son importantes en la aplicación de los procedimientos relacionados con la materia, dentro de los que se encontraban el de gratuidad, intermediación obligatoria, celeridad y reserva (art. 7).(Ecuador, Congreso Nacional, 1995)

En el año 2003, se promulgó el Código de la Niñez y la Adolescencia, que constituyó un esfuerzo más, en materia de protección de derechos de las niñas y adolescentes contra el fenómeno de la violencia de género. En ese sentido, esta norma establece como medida de protección a los menores ante hechos de violencia física, psicológica o sexual, la posibilidad de limitarle o prohibirle al progenitor responsable de dichas agresiones, su derecho de visitas, o restringírsele (art. 122).(Ecuador, Congreso Nacional, 2003)

En el año 2004, el Estado aprobó el Plan Nacional Decenal de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, que tiene entre uno de sus principios rectores la protección de los derechos de los menores y la eliminación de cualquier tipo de violencia que tenga como víctima a este grupo poblacional. En ese sentido se pronuncia sobre la necesidad de promocionar una cultura de la convivencia, el respeto y la armonía entre todos, el perfeccionamiento de los órganos y de las herramientas para hacer valer los derechos de los menores, asegurarles un hogar y que puedan disfrutar de todos y cada uno de los servicios públicos, así como erradicar cualquier forma o manifestación de trabajo infantil(Ecuador, CNNA, 2004). Por ello con fecha 03 de enero se publicó en el Registro oficial # 737, el Código De la Niñez y Adolescencia.

Un aspecto importante como ya se ha planteado es que, si bien es cierta, la declaración de la lucha contra la violencia de género como política de Estado constituyó un punto importante en la historia ecuatoriana en este sentido, previo a ello hubo varios esfuerzos por dotar a la nación de políticas que contribuyeran a tales objetivos. Un ejemplo de ello lo constituyó la aprobación del Plan de Igualdad de Oportunidades de las Mujeres Ecuatorianas 2005-2009, que tuvo dentro de sus principales líneas la protección del derecho que tenían las mujeres a vivir una vida libre de todo tipo de violencia, determinándose la necesidad de destinar recursos económicos para cumplir dichos objetivos, así como diseñar estrategias interinstitucionales y la creación de un marco jurídico que garantice los derechos de las mujeres.(Ecuador, CONAMU, 2005)



En el año 2006, se aprueba el Plan Nacional para Combatir la Trata, Explotación Sexual, Laboral y otros medios de explotación de personas, particularmente mujeres, niños, niñas y adolescentes. Un importante elemento de este plan, es que comienza a observarse una declaración de responsabilidad del Estado para con el problema en sí, ya que establece como principios rectores de dichas políticas, la responsabilidad estatal, igualdad ante la ley, principio de no discriminación, interés superior de los menores, comunidad participativa, los que en su conjunto estructuraron la actuación de los órganos de entonces. Se pronuncia además por vez primera, sobre los derechos de las víctimas de este tipo de violencia, estableciendo dentro de sus ejes la prevención, investigación y punición de cualquier acto de esta naturaleza y la seguridad y reparación de los derechos de las víctimas. (Ecuador, CNNA-CONAMU, 2006)

Ahora, no fue hasta el año 2007, cuando el Estado ecuatoriano por medio de la promulgación del Decreto No. 620, en el que se determina que la lucha contra este tipo de violencia se convierte en política de Estado, que comenzó una etapa intensa de políticas públicas en el país para lograr tales fines.

Sin duda alguna, esta acción ejecutiva constituye en los últimos años, uno de los esfuerzos más importantes en este sentido por dotar con carácter estratégico en el país, a la lucha contra la violencia hacia las mujeres de mecanismos legales y estrategias públicas mucho más eficientes y dirigidas a tales objetivos. Es de destacar que el Decreto No. 620 de 10 de septiembre de 2007 establece la obligación de todas las instituciones públicas en el Ecuador de diseñar e implementar estrategias desde cada órgano para de forma coordinada erradicar la violencia de este tipo en el país (art. 2). Unido a ello, dicha norma crea un órgano interinstitucional conformado por varios representantes del ejecutivo que deben realizar dichas acciones (art. 3). (Ecuador, Presidencia, 2007)

Ya en el año 2007, como derivación de la aprobación del Decreto No. 620 por medio del que se declara como política de Estado la lucha contra la violencia de género, se adoptó un nuevo Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia de Género hacia la Niñez, Adolescencia y Mujeres. Este instrumento es de gran importancia, porque ofrece nociones conceptuales en torno a qué comprender por violencia y qué por género dentro del problema en sí. También, establece los entornos en los que pueden percibirse los diversos tipos de violencia de género, así como, las causas que originan este problema, siendo ello de gran



importancia porque les permite identificar las razones que motivan el fenómeno y por ende redirigir la atención a su solución.(Ecuador, Presidencia, 2007)

En el año 2008 se aprobó el Plan Nacional para la Erradicación de los Delitos Sexuales en el Ámbito Educativo, el que logra articular varias propuestas de políticas públicas en el sector educacional dentro de los que se encuentra la garantía del cumplimiento y respecto de los derechos humanos, así como las cuestiones vinculadas a la equidad de género. Uno de los ejes fundamentales sobre el que se diseñó el Plan, fue el de la prevención y restitución de todos y cada uno de los derechos de aquellas personas que han sido víctimas de este tipo de violencia, así como la sanción que debe imponérsele a los victimarios.(Ecuador, ME, 2008)

Con posterioridad a ello, han sido los planes nacionales del Buen Vivir los que se han encargado de regular las políticas destinadas a la prevención y erradicación de la violencia hacia las mujeres. De esta forma, el Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013, el que en su objetivo 9 se pronunció sobre la necesidad de garantizar la prevalencia de todos los derechos para las personas, así como la justicia, principalmente en la erradicación de todo tipo de prácticas de violencia en general, y la destinada a las mujeres en particular. De esta forma también establece el deber de los servidores públicos de adoptar cuantas medidas sean pertinentes para lograr que ningún acto de violencia sea realizado y quede en la impunidad, de forma tal que, en esencia, este Plan ofrece algunas ideas y estrategias que son relevantes en la lucha contra este tipo de violencia.(Ecuador, SENPLADES, 2009)

Con posterioridad, en el año 2013, se aprobó el nuevo Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, el que señala “La violencia de género es estructural, ya que se origina en los roles generados a través de procesos de construcción social y cultural de “lo masculino” y “lo femenino” (p. 126). En este sentido, es claro que el Estado ecuatoriano para entonces, tiene claro que el fenómeno de la violencia contra las mujeres no debe ser considerado como un problema aislado, sino de manera integral, además, sus orígenes de diversas causales, principalmente en la construcción cultural y social de la diversidad de sexos en una sociedad patriarcal. Consideramos que esto demuestra una maduración en el pensamiento sobre género en el país.(Ecuador, SENPLADES, 2013)

En este Plan, en el objetivo 6, se pronuncia sobre la idea de perfeccionar la justicia y el respeto a los derechos humanos en el país, para lo cual establece que es pertinente erradicar la violencia de género, siendo pertinente la seguridad y protección de las mujeres ante este



problema. Unido a ello establece que es necesario que la comunidad nacional conformada por órganos y organismos públicos y privados y la sociedad en general, luche por reestructurar los patrones culturales existentes en la realidad nacional, así como que los funcionarios en cada nivel, logre de forma efectiva la eliminación de comportamientos que proporcionen el espacio para la violencia hacia las mujeres, por medio de la constante capacitación y sanción a los infractores.

Finalmente, en el año 2017, se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, el que también se pronuncia en varios momentos en torno a estas políticas. Un momento importante es cuando establece que la violencia hacia las mujeres puede manifestarse en el entorno físico, sexual, psicológico, patrimonial y otras formas, y que tiene como fundamento esencial, las relaciones desiguales de poder entre el hombre y la mujer, materializadas en todos los ámbitos de la sociedad, pero esencialmente en la familia y en las relaciones de pareja. En el objetivo 1 de este Plan, se pronuncia sobre la necesidad de que todos puedan disfrutar de una vida digna, libre de cualquier manifestación de violencia, especialmente aquella derivada del género. En este sentido, dicho instrumento expresa que:

Para dar respuesta a esta problemática, el Gobierno Nacional, en el año 2015, mediante el Plan para la Erradicación de la Violencia de Género, ha iniciado un proceso de transformación del Estado para asegurar que el sistema de justicia y de protección integral, adecuada y especializada, transformen los patrones socioculturales que naturalizan la violencia, para lo cual se busca el fortalecimiento de las relaciones intrafamiliares, grupales y comunitarias.

La erradicación de la violencia de género, solo se logrará con acciones coordinadas y articuladas entre: el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, la Secretaría Técnica Plan Toda una Vida, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública, la función Judicial, el Consejo Nacional para la Igualdad, los Gobiernos Autónomos Descentralizados, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el Ministerio de Inclusión Económica y Social y el Ministerio del Interior.(Ecuador, SENPLADES, 2017, p. 69)

Este pronunciamiento evidencia la intencionalidad del gobierno nacional de luchar por erradicar la violencia de género en el país, a través de un esfuerzo mancomunado entre todos y cada uno de los órganos e instituciones, que de formas diversas y desde entornos diferentes, pueden llevar adelante acciones que logren, en definitiva, medidas en contra de la proliferación de este tipo de comportamientos. Es importante el hecho de que desde este plan



se reafirma el pensamiento de que, para eliminar este tipo de violencia, es pertinente aunar esfuerzos entre todos los órganos públicos, dando participación al sector privado y a la sociedad en general, pues es necesario articular dichas políticas con la intervención y control de todos los actores sociales posibles.

La sociedad en general, debe ser incorporada como elemento indispensable para la solución de esta problemática, de forma tal que, los líderes barriales, comunitarios, sindicales, de sociedades civiles, de derechos humanos, se sientan reconocidos en dichas acciones.

Un importante documento que definió políticas públicas en el país, fue el aprobado en el año 2014 titulado Agenda Nacional de las Mujeres y la Igualdad de Género 2014-2017, el que se pronuncia en sentido particular sobre las diversas acciones necesarias para la eliminación y prevención de este problema en el país. En este documento se defiende en su segundo eje, el hecho de que a las mujeres hay que garantizarles el derecho a que puedan vivir una vida libre de violencia en todos los ámbitos, no existiendo ninguna excusa para no cumplirlo. Con esta intención, interesa el aumento de la protección a las mujeres que han sido o se encuentran en riesgo de ser víctimas de violencia, la necesaria sensibilidad que deben poseer aquellos funcionarios y especialistas que se relacionan con este grupo poblacional, la facilidad y agilidad con la que se debe brindar asistencia estas mujeres, entre otras acciones de igual relevancia.(Ecuador, SENPLADES-CNIG, 2014)

Estos en sentido general, constituyen algunos hitos de las más importantes políticas públicas que han sido adoptadas en la realidad nacional para la prevención y erradicación de la violencia de género. Como se observa, desde principios de siglo, en el Ecuador se han adoptado planes nacionales y políticas que en su conjunto han intentado ofrecer un marco importante de lucha contra la violencia hacia las mujeres. No obstante, como también es visible, hasta la fecha, dichas políticas podrían evaluarse de ineficaces para lograr siquiera disminuir el problema en la realidad nacional, si se considera el estado actual del fenómeno.

Desde una consideración crítica, la poca eficacia de dichas políticas se ha debido esencialmente a dos elementos; uno, ninguna de ellas destina su mayor esfuerzo a la prevención real; segundo, no se evidencia una verdadera voluntad política de implementar con coherencia, dichas políticas, considero que en efecto, estos han sido los causantes de que a pesar de contar con políticas públicas a nivel nacional, no hayan resultado ni estén resultando en cifras y realidades concordantes con los fines y objetivos que persiguen.



La prevención, es el pilar fundamental que permitiría obtener logros efectivos. No basta con el hecho de querer cambiar los patrones culturales en la sociedad ecuatoriana, es necesario establecer qué acciones concretas, medibles, se realizarán para lograr tales fines, quién será el responsable principal, cómo se evaluará y que fecha tope debe ponerse para realizar valoraciones y modificaciones a dichas acciones. En este sentido, es necesario perfeccionar la educación a todos los niveles, ofrecer a las mujeres mayores oportunidades de empleo con el que puedan conseguir independencia, mayor capacitación, mejoría en las condiciones de vida, llevar con este tipo de acciones a todos los barrios, sectores marginales y comunidades campesinas del Ecuador y no solo se queden en las grandes urbes.

Es indiscutible que todos estos factores, inciden en una postura de desventaja de la mujer con respecto al hombre. Por ende, adoptar medidas o acciones que deriven de una política pública objetiva, favorecería el incremento de la cultura y condiciones objetiva de estas, que resultarían en una posición mucho más equitativa con respecto al hombre.

Para cumplir con estos objetivos, es necesario que el Estado ecuatoriano de verdad se involucre. No basta con declaraciones y acciones legales e institucionales que solo den la idea de que el gobierno realiza tales propósitos para lograr esos fines. Es pertinente que desde el Estado se establezcan acciones concretas como el reforzamiento de la sensibilización social con el silencio de las víctimas; llevar las campañas de concientización a las empresas; creación de organizaciones difusoras de mensajes contra la violencia en cada barrio; incluir dentro de los diseños micro curriculares, temáticas a todos los niveles relacionadas con la violencia de género; diseñar y socializar a todos los grupos sociales, programas y formas de detección de la violencia en cualquier espacio y cómo actuar; empoderar a las mujeres que viven en situaciones de riesgo a través del empleo y la generación de independencia económica y reforzamiento de la educación; y otras tantas acciones que pueden adoptarse, siempre y cuando sean alcanzables y medibles, que evidencien de forma real una voluntad gubernamental por erradicar la pobreza, el desempleo, la marginación, la incultura, la falta de instrucción y educación. Todo ello es importante si se quiere que las políticas públicas resulten en cifras y avances reales en la sociedad ecuatoriana.

Por ello desde hace muchos años atrás, particularmente en el cantón de Cuenca se vienen articulando algunos procesos, entre los más importantes:

- 2001-2015: Articulación y fortalecimiento de las organizaciones de mujeres del cantón en el Cabildo por las Mujeres de Cuenca.



- 2001-2015: Campañas de promoción de los derechos humanos de las mujeres en el Día Internacional de la Mujer.
- 2000-2015: Acciones de promoción por una vida libre de violencia de género. Institucionalización de la Marcha por el Día Internacional de la No Violencia a las Mujeres el 25 de noviembre.
- 2001-2015: Procesos permanentes de formación en coordinación con instancias barriales, universitarias y educativas de todos los niveles.
- 2002-2015: Rendición de cuentas anuales por parte del Alcalde de Cuenca sobre las acciones impulsadas por la Municipalidad en materia de prevención y atención de la violencia hacia la mujer.
- 2000-2015: Creación y fortalecimiento de la Red Interinstitucional de Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar.
- 2004-2015: Observatorio Ciudadano de la Comunicación, instancia encargada de sensibilizar y educar a la población sobre comunicación no sexista, experiencia pionera en el país.
- Mesa Cantonal de Erradicación de Violencia
- Red de Salud Sexual y Salud Reproductiva del cantón Cuenca.
- Red Interinstitucional de Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar y de Género.
- Intercambio de experiencias con otras Municipalidades.

3.3. Políticas públicas implementadas en Cuenca para erradicar la violencia contra las mujeres

Cuenca no ha estado al margen del problema de la violencia de género y el femicidio. Como ya se ha analizado, las estadísticas demuestran que, en efecto, los índices de esta problemática son elevados, lo que amerita sin lugar a dudas, una intervención mayor. En este sentido desde hace años, en el cantón se han adoptado un conjunto de medidas que han intentado disminuir los eventos de violencia en contra de las mujeres.



En el año 1999 se crea la Red Interinstitucional de Atención y Prevención de Violencia Intrafamiliar de Cuenca (RIAP-VIF). Esta red se encuentra integrada por más de 22 organizaciones locales que favorecen en su conjunto a la lucha contra esta manifestación de violencia contra las mujeres en este cantón. Instituciones de gran importancia como la Asociación Pro-Bienestar de la Familia Ecuatoriana (APROFE), el Centro de Rehabilitación de Adicciones del Azuay, Mesa Cantonal de Género, autoridades de salud a nivel provincial, y otras tantas, constituyen ejemplos de esfuerzos por lograr defender de mejor forma los derechos de las mujeres.

El proceso de organización y maduración de las luchas de las mujeres, resultó en el año 2000 en la creación del Cabildo por las Mujeres de Cuenca quienes fueron en principio, las principales defensoras del I y II Plan de Igualdad de Oportunidades (2001) y (2006), que estructura ideas en torno a la defensa de la mujer. Tiene dos ejes esenciales, el primero, vinculado con el deber de la municipalidad de Cuenca de eliminar la pobreza, aspecto esencial que dedica a la inequidad de género, siendo imperativo el mejoramiento continuo de la calidad de vida de las mujeres; y segundo, que la municipalidad tiene dentro de sus prioridades la eliminación de las brechas de género, para lo cual considera invertir en el entorno público social en favor de las mujeres.(Cuenca, Cabildo por las Mujeres, 2017)

En el año 2002, el Consejo Cantonal de Cuenca aprueba la Ordenanza No. 169 que establece las Políticas para Prevenir y Erradicar la violencia Intrafamiliar en el cantón, que establece entre otras cuestiones, el hecho de que la violencia de género en el cantón debe ser considerado como una problemática de orden social, política, de salud pública y de seguridad ciudadana (art. 1). Un elemento importante de esta ordenanza es que concibe la lucha contra este problema, como una necesidad de toda la sociedad por lo que todos deben inmiscuirse en la misma. En este sentido refiere que la municipalidad fortalecerá los programas de equidad para que con ello se logre modificar los patrones socioculturales y con ello cualquier tipo de manifestación de violencia (art. 2).(Cuenca, Concejo Cantonal, 2002)

Adicionalmente, establece que, en coordinación con la ciudadanía, y la Red Interinstitucional de Atención y Prevención a la Violencia Intrafamiliar, se adoptarán programas y medidas que se orienten a la eliminación de este tipo de violencia (art. 3); Estos programas y acciones, se realizarán con la plena participación de la sociedad civil y las instituciones pertinentes (art. 4). Establece el deber de la ciudadanía de Cuenca y de los funcionarios del cantón, de denunciar cualquier manifestación de violencia intrafamiliar,



pudiendo y debiendo adoptar cuantas medidas fueren necesarias para ayudar a las víctimas (art. 5). Establece que las autoridades cantonales les brindarán toda la ayuda a las parroquias en la creación de los espacios adecuados para recibir las denuncias y atender adecuadamente a las víctimas de la violencia intrafamiliar (art. 7). La ordenanza designa al 25 de noviembre como “Día de la No Violencia Intrafamiliar y de Género” (art. 8) y crea un organismo de implementación de dicha norma (art. 9).(Cuenca, Concejo Cantonal, 2002)

Esta ordenanza fue modificada en el año 2008, por la Ordenanza No. 273 que reforma la Ordenanza que establece las Políticas para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género en el Ámbito Público y Privado del cantón Cuenca. Esta norma ratifica el hecho de que la violencia de género en todos los entornos, ya fuere público o privado, es considerado como un problema de derechos humanos (art. 1). En este sentido, refiere la creación de un Plan Decenal de Prevención y Erradicación de la violencia de género en los entornos público y privado (art. 4). Se pronuncia sobre la necesidad de capacitar a toda la población en general, pero a los funcionarios del cantón en particular, de forma que puedan brindar mejor atención a los casos que conocieren.(Cuenca, Concejo Cantonal, 2008)

Un elemento importante de esta nueva ordenanza es que crea un sistema de atención, protección, prevención y erradicación de la violencia de género en lo público y privado, el que se estructurará a partir de la participación ciudadana y con la colaboración de organizaciones nacionales y extranjeras (art. 6). En la celebración del Día de la No Violencia hacia las Mujeres de cada año (25 de noviembre), se convocará a una sesión del Concejo, en el que se analizarán los avances y retrocesos de las políticas públicas adoptadas, de forma tal que permitan modificarse y establecerse nuevas líneas de acción (art. 7).(Cuenca, Concejo Cantonal, 2008)

Otra de las políticas que han sido implementadas en Cuenca, es el Plan Cantonal de Cuenca para la Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres 2012-2020. Este Plan tiene tres ejes de intervención, el primero, dirigido a prevenir de forma concreta este tipo de violencia hacia la mujer en el entorno intrafamiliar; el segundo, la protección y atención a las mujeres que hubieren sido víctimas de este tipo de manifestación de violencia; y el tercer eje, la restitución de los derechos a aquellas mujeres que hayan sido afectadas por este tipo de violencia.(Cuenca, Concejo Cantonal, 2012)

En este plan, en su primer eje, establece como su objetivo estratégico el de contribuir a formar una cultura en dicho territorio que se caracterice por ser incluyente, permitiendo una



convivencia armónica y pacífica, libre de cualquier manifestación de violencia. En este punto, el objetivo operativo 1.2.4 se pronuncia sobre la necesidad de estructurar una política pública de orden integral que provea el espacio a las mujeres para poder desarrollar sus actividades sin ningún tipo de temor y ajenas a cualquier tipo de violencia en cualquier entorno. En este sentido, ofrece la posibilidad de que, en los espacios público y privado se adopten medidas para que las mujeres puedan utilizar los espacios públicos sin ningún temor a ser agredidas. Se pronuncia también en torno a la capacitación a todo tipo de organizaciones especialmente las campesinas y barriales, así como la prevención de violencia en el transporte público. (Cuenca, Concejo Cantonal, 2012)

Unido a ello, la ciudad de Cuenca fue sede de la IV Cumbre Iberoamericana de Agendas Locales de Género, que se celebró entre los días 15 y 18 de mayo del 2018 en la ciudad de Cuenca y de la que resultó la Declaración de Cuenca sobre los Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género en la Democracia y el Desarrollo Local: Desafíos hacia la Agenda 2030, en la que se realiza un compromiso y se hace un llamado a que se garanticen los derechos a las mujeres a vivir una vida libre de violencia; a adoptar medidas que permitan su empoderamiento político; a contribuir a su autonomía económica a través del empleo y reducción de la pobreza; a perfeccionar la institucionalidad, planificación y garantizar el presupuesto para que dichas políticas tengan lugar con un enfoque de género. (Cuenca, Alcaldía, 2018)

Durante el año 2018, la Mesa Cantonal de Erradicación de la Violencia Intrafamiliar y de Género, realizó varias acciones, dentro de las que se encuentra el fortalecimiento del espacio cantonal para generar mayor interacción y coordinación en el territorio, con el fin de ejecutar más acciones que tiendan a institucionalizar los procesos, protocolos y políticas para luchar contra dicho problema, para lo cual se ha destinado una inversión de diez mil dólares; lo que se ha gestionado a través de 33 resoluciones que han sido dictadas por esta Mesa Cantonal. (Cuenca, Alcaldía, 2018)

En este sentido, se desarrolló el programa “Cuenca Ciudad Segura para Mujeres y Niñas”, que tuvo como objetivo la creación e implementación de un modelo de ciudad seguro por medio de la reducción de los niveles de acoso sexual y otras formas de violencia sexual en contra de las mujeres y niñas en los espacios públicos de la ciudad. Este objetivo se logró a través del diseño e implementación de capacitaciones. En esta actividad, fueron beneficiadas



un total de 400 personas, con un presupuesto conjunto entre la Alcaldía Municipal y ONU Mujeres.

También se ejecutó la campaña “Basta de Acoso en el Transporte Público”, que utilizó consignas como “¡BASTA! De esa mano”, “¡FUERA! Del bus, acosador”, tuvo el objetivo de reducir la violencia de género en el sistema de transporte público de la ciudad de Cuenca, a través de mecanismos de información y sensibilización de la ciudadanía sobre las consecuencias e implicaciones del acoso sexual. Como consecuencia de esta campaña se considera que se beneficiaron un total de 170.000 mujeres y 105.000 hombres, lo que indica que las acciones derivadas de dicha acción alcanzaron a la gran mayoría de la población de la ciudad.

Como complemento de la anterior actividad, se desarrolló también en el año 2018 la “Campaña Prevención del Acoso Sexual en el Transporte Público en los días FARMASOL”, que tuvo como finalidad difundir en mayor medida la Campaña “Basta del Acosos Sexual en el Transporte Público”, concentrándose las acciones de concientización en el Día Internacional contra la Violencia a la Mujer, beneficiándose con ello a toda la ciudadanía e igualmente con una importante inversión, ejecutándose estas acciones principalmente en la cadenas de farmacia FARMASOL.

Adicional, se ejecutó como parte del programa de sensibilización en la prevención del acoso sexual en el transporte público, se realizaron actividades de capacitación a más de 2.000 choferes del transporte comercial de taxis como de buses urbanos, cuya finalidad fue la de concientizar a los hombres que se dedican a esta actividad, no solo a no ser sujetos activos de cualquier comportamiento que implique acoso de orden sexual a las mujeres y niñas que empleen este tipo de servicios, sino a actuar de forma frontal ante cualquier comportamiento de esta naturaleza de un tercero dentro de las unidades.

Como parte de las acciones en esta ciudad, en el año 2018 también se reactivó el Observatorio de Seguridad Ciudad: Área de Violencia de Género, con la participación de más de 267.650 mujeres y 237.350 hombres y con una inversión de más de 200.000 dólares. Esta actividad tuvo como premisa, la recopilación, investigación, procesamiento y análisis de información estadística de los hechos delictivos que ocurrieron en el cantón Cuenca, con la finalidad de tener un referente importante que permita a partir de ello, generar acciones que logren una mejor convivencia ciudadana en dicho territorio.



Un aspecto importante que ha tenido lugar en el año 2018, como parte de las políticas informativas, fue la publicación del Boletín Estadístico “Cuenca en Cifras”, lográndose repartir un total de 300 ejemplares en la ciudad. Esta medida tuvo como objetivo, la publicación de las estadísticas en torno a este problema que permitan generar acciones y tomas decisiones relacionadas con la seguridad pública. Unido a ello, también se llevó a cabo el Observatorio Ciudadano de la Comunicación: Cambiando Imaginarios Sociales que sostienen la Desigualdad, siendo beneficiados aproximadamente 2.120 mujeres y 1.880 hombres y con 1 participación de más de 4.000 personas, cuyo objetivo fue fortalecer la participación ciudadana desde un enfoque crítico e informado, que permita construir un imaginario social que garantice el respeto de los derechos humanos.

También se ejecutó el Observatorio del Estado Situacional del Ejercicio de Derechos de Grupos de Atención Prioritaria, en el que se analizaron los mecanismos de medición para el cumplimiento de los derechos de las mujeres víctimas de violencia; el Programa Impulso Mujer, que generó actividades de capacitación en barrios de Cuenca; se ejecutaron talleres en los Centros de Atención a las Familias; la celebración del Evento Internacional Herramientas Comunicacionales con Enfoque de Género, que se encargó de fundamentar, ampliar y reforzar los conocimientos vinculados con la relación entre la comunicación y los contenidos de violencia de género que se publicitan por los diversos medios de comunicación.

De gran importancia fue el Proyecto: “Noviazgo sin Violencia”, que tuvo como finalidad generar espacios de reflexión entre los adolescentes de los diversos centros educativos del cantón, sobre la violencia contra la mujer y la necesidad de fomentar relaciones de respeto entre las parejas. También se ejecutaron programas de capacitación a los integrantes de las Juntas Cantonales de Protección de Derechos y a las Secretarías Ejecutivas de diferentes zonas; fortalecimiento de los Consejos Consultivos; realización de Talleres en tema de prevención de violencia a integrantes de los sistemas comunitarios; sensibilización a la población rural en materia de derechos humanos.

De gran valor fue el Programa “Segura de Ti Misma” realizado con el objetivo de dotar de herramientas a las mujeres que son parte de la Guardia Ciudadana para enfrentar cualquier comportamiento de violencia en el espacio público; el Programa de atención integral a las mujeres del Cantón Cuenca “Casa de la Mujer”, que promueve el empoderamiento de este sector poblacional tanto en el entorno rural como el urbano, con una inversión de más de 80.000 dólares, aunque aún con poca participación. También es meritorio



señalar el Programa “Casa Violeta Cuenca”, que tiene como objetivo la atención y restitución de los derechos de las mujeres adolescentes víctimas de violencia desde un enfoque de género, con una inversión de más de 200.000 dólares, pero en la que solo se ha beneficiado a 26 adolescentes y a 6 menores.

Como se ha evidenciado hasta el momento, en el cantón Cuenca muchas y diversas han sido las acciones que han estado diseñadas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Desde hace años, existe un movimiento importante de promoción y defensa de derechos de las mujeres que se ha mantenido hasta la fecha, lo que demuestra que ha existido en la historia del cantón gobiernos, instituciones y fundaciones que se han preocupado del tema. Ello sin lugar a dudas es un punto de gran relevancia. No obstante, los indicadores de denuncias y cifras que han sido abordadas en torno a este tipo de violencia, a pesar de las acciones trabajadas no está resultado tan favorable como se desea. Ello demuestra que, en efecto, es pertinente perfeccionar las políticas públicas locales en aras de dotarlas de mayor eficacia.

3.4. Análisis e interpretación de los resultados de las encuestas y aplicadas

3.4.1. Encuesta a promotoras de derechos contra la Violencia de Género.

Pregunta 1. Marque con una X, cuánto tiempo tiene usted como promotora de derechos contra la violencia de género.

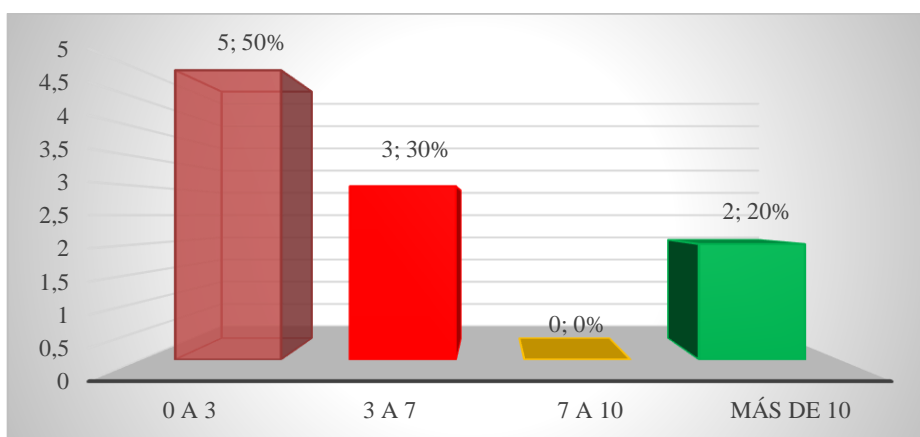
Tabla 1.

Años	Frecuencia	Porcentaje
0 a 3	5	50%
3 a 7	3	30%
7 a 10	0	0%
Más de 10	2	20%
TOTAL	10	100%

Fuente: Investigación Directa.

Elaborado por: Genaro Marcelo Soto Alemán.

Gráfico 5.



Fuente: Investigación Directa.

Elaborado por: Genaro Marcelo Soto Alemán.

ANÁLISIS: A la pregunta que se analiza, el 50% de la muestra respondió tener una experiencia como promotora de derechos de las mujeres entre 0 a 3 años; el 30% respondió tenerla entre 3 a 7 años y el 20%, expresó tenerla más de 10 años.

INTERPRETACIÓN: La finalidad de esta pregunta es conocer la experiencia que posee la muestra encuestada en torno a la defensa de los derechos de las mujeres en su calidad de promotoras. Es muy significativo que la mitad de las encuestadas posean una experiencia de hasta 3 años, pero más significativo es que la quinta parte de ellas lleva como promotoras más de 10 años, lo que demuestra que, en efecto, la selección a la que se le aplicó la encuesta en sentido general, posee conocimientos suficientes para abordar con objetividad y certeza las preguntas que se le han realizado.

Pregunta 2. De su experiencia, ¿Cómo considera los índices de violencia contra las mujeres en la ciudad de Cuenca?

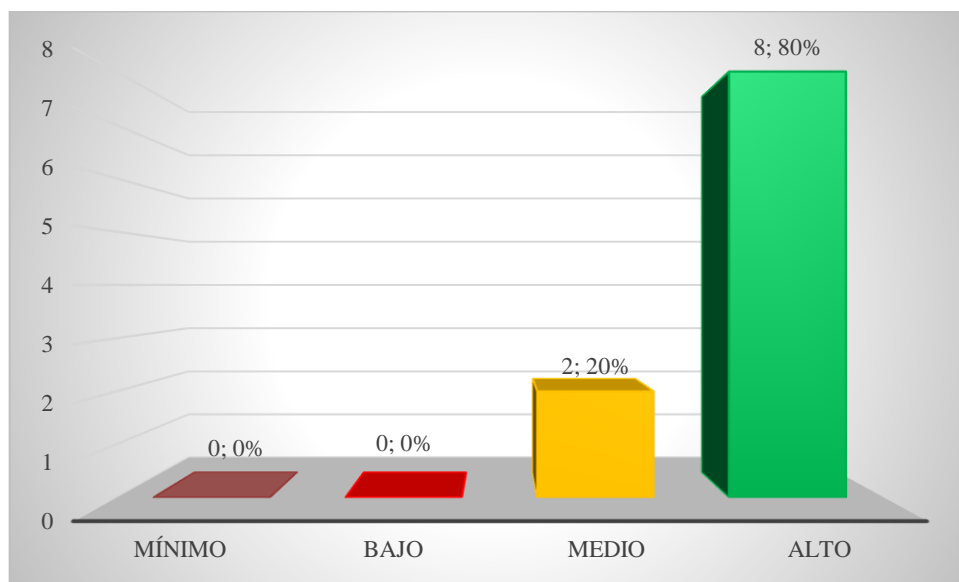
Tabla 2.

	Frecuencia	Porcentaje
Mínimo	0	0%
Bajo	0	0%
Medio	2	20%
Alto	8	80%
TOTAL	10	100%

Fuente: Investigación Directa.

Elaborado por: Genaro Marcelo Soto Alemán.

Gráfico 6.



Fuente: Investigación Directa.

Elaborado por: Genaro Marcelo Soto Alemán.

ANÁLISIS: A la interrogante que se analiza, el 80% respondió que su percepción de los índices de violencia en la ciudad de Cuenca es alta; mientras que un 20% los considera medios.

INTERPRETACIÓN: La finalidad de la pregunta es conocer el criterio que posee la muestra encuestada en torno a su percepción del índice de violencia que existe en dicho cantón. Es realmente significativo, pero preocupante, el hecho de que la amplia mayoría de los encuestados consideren que este tipo de violencia se manifiesta con intensidad elevada, lo que demuestra en efecto que, ciertamente existe el fenómeno en la ciudad y con un alto predominio, denotando ineficacia de las normas y políticas adoptadas para erradicar el problema.

Pregunta 3. ¿Considera usted si la mera tipificación de la figura del femicidio en el Código Orgánico Integral Penal COIP, ha sido un elemento efectivo y determinante para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y el femicidio en el Ecuador?

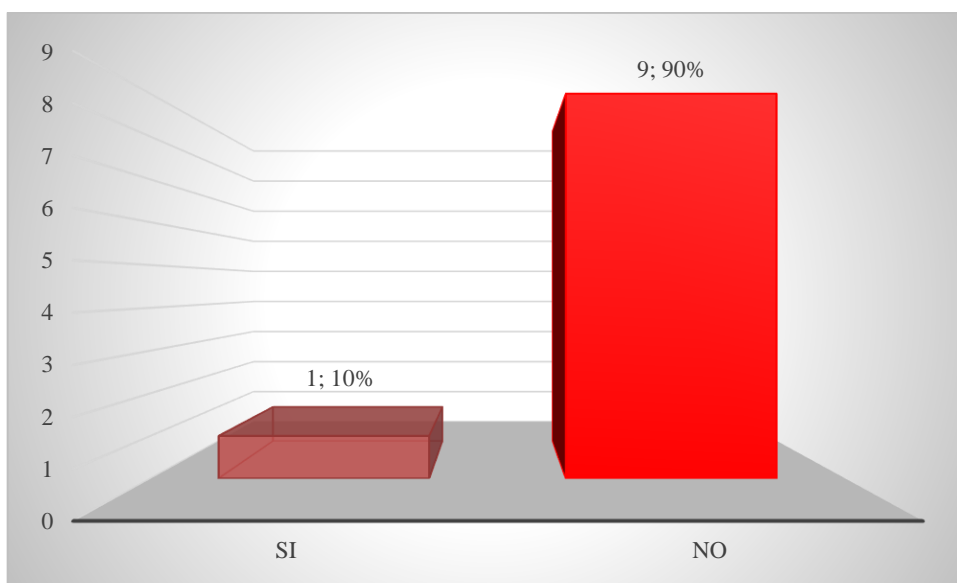
Tabla 3.

	Frecuencia	Porcentaje
Si	1	10%
No	9	90%
TOTAL	10	100%

Fuente: Investigación Directa.

Elaborado por: Genaro Marcelo Soto Alemán.

Gráfico 7.



Fuente: Investigación Directa.

Elaborado por: Genaro Marcelo Soto Alemán.

ANÁLISIS: A la interrogante en cuestión, el 90% considera que la regulación del delito de femicidio en el COIP en el año 2014, no ha sido efectivo en la lucha contra la violencia de género y el femicidio en sí; mientras que un 10% considera que si ha sido determinante.

INTERPRETACIÓN: La finalidad de la interrogante es conocer el criterio que poseen los encuestados en torno a la pertinencia y eficacia de la regulación del delito de femicidio en la reducción de este fenómeno. Significativo es el hecho de que la amplia mayoría considera que, en efecto, esta tipificación no ha sido ni determinante ni efectiva en la lucha contra la violencia hacia las mujeres y el femicidio, lo que se demuestra a través de los indicadores y estadísticas que son conocidos.

Pregunta 4. ¿Considera usted que dentro de la Política Criminal del Estado ecuatoriano para prevenir el delito, se ha adoptado políticas públicas adecuadas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres?

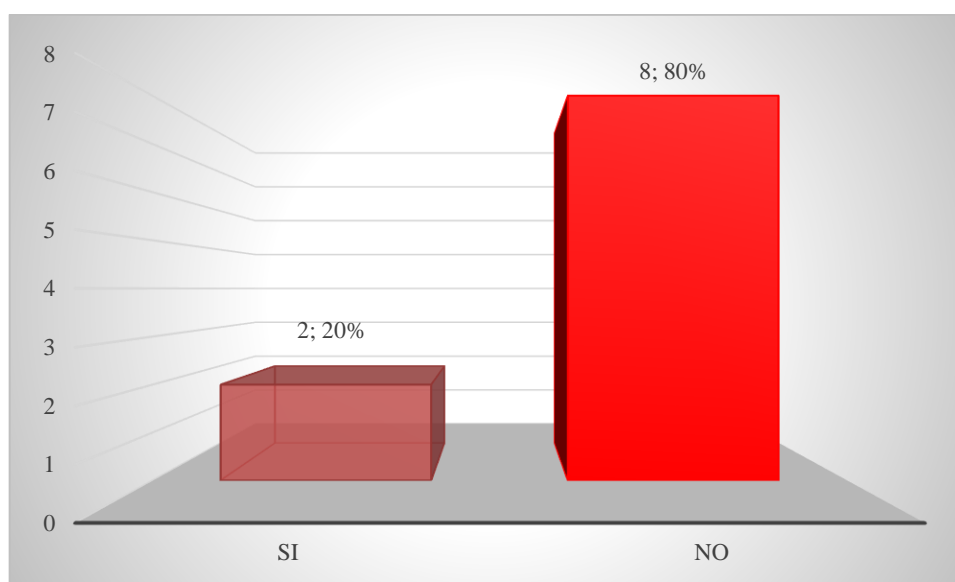
Tabla 4.

	Frecuencia	Porcentaje
Si	2	20%
No	8	80%
TOTAL	10	100%

Fuente: Investigación Directa.

Elaborado por: Genaro Marcelo Soto Alemán.

Gráfico 8.



Fuente: Investigación Directa.

Elaborado por: Genaro Marcelo Soto Alemán.

ANÁLISIS: A la pregunta que se analiza, el 80% de los encuestados consideran que, en efecto, las políticas criminales adoptadas en el Ecuador no se traducen en políticas públicas eficientes para erradicar el delito; mientras que el 20% considera lo contrario.

INTERPRETACIÓN: La finalidad de la pregunta es conocer si desde la consideración de los encuestados, la política criminal incide de forma adecuada en las políticas públicas que el estado ecuatoriano adopta, traduciéndose de forma positiva en la reducción de la violencia. Es realmente igual de preocupante que la amplia mayoría de los encuestados consideren que no son eficientes, lo que provoca sin duda alguna que los índices de violencia vayan creciendo año tras año. Es pertinente, por ende, desde esta consideración, reestructurar la política criminal.

Pregunta 5. ¿Considera usted si el impulso de políticas públicas adecuadas, puede incidir de forma positiva en la disminución de la violencia contra las mujeres y el femicidio en la ciudad de Cuenca?

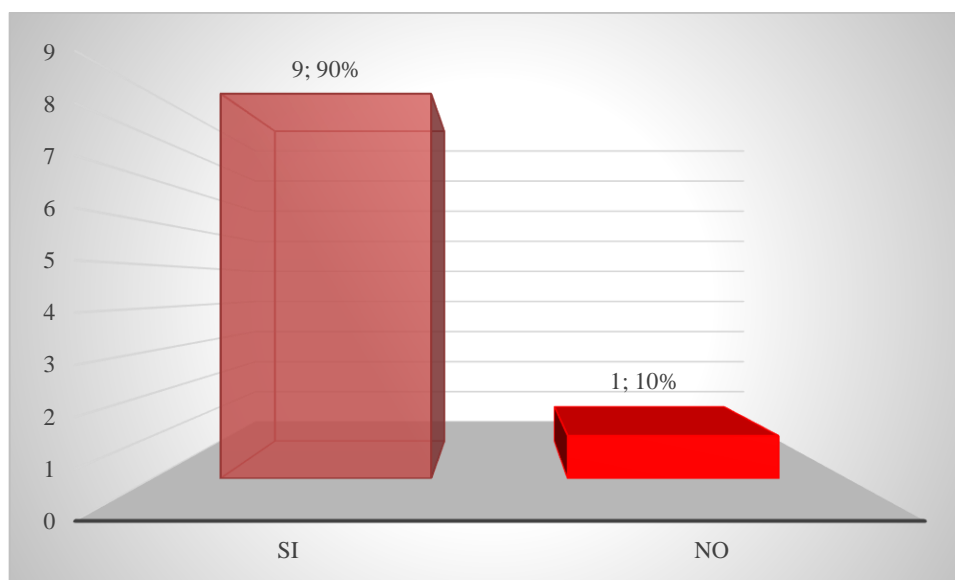
Tabla 5.

	Frecuencia	Porcentaje
Si	9	90%
No	1	10%
TOTAL	10	100%

Fuente: Investigación Directa.

Elaborado por: Genaro Marcelo Soto Alemán.

Gráfico 9.



Fuente: Investigación Directa.

Elaborado por: Genaro Marcelo Soto Alemán.

ANÁLISIS: A la interrogante en cuestión, el 90% de los encuestados consideran que políticas públicas eficientes sí pueden incidir de forma positiva en la reducción de la violencia contra las mujeres y el femicidio en la ciudad de Cuenca; mientras que el 10% opina lo contrario.

INTERPRETACIÓN: El objetivo de la pregunta es conocer el criterio de los encuestados en torno al hecho de que las políticas públicas eficientes podrían incidir de forma favorable o no, en la reducción y finalmente en la eliminación de la violencia contra las mujeres y el femicidio en el cantón Cuenca. El hecho de que la amplia mayoría de la muestra considere que sí, es realmente evidencia de una madurez en el sentido de que, en efecto, la adopción de políticas públicas integrales, que logren de forma adecuada incidir en las causas que generan esta problemática, resultaría en beneficios para la eliminación de este tipo de violencia.

Pregunta 6. ¿Conoce usted si en la ciudad de Cuenca, los órganos e instituciones llamadas a hacerlo, han promovido en los últimos años, políticas y acciones locales adecuadas y eficientes para erradicar la violencia contra las mujeres y el femicidio?

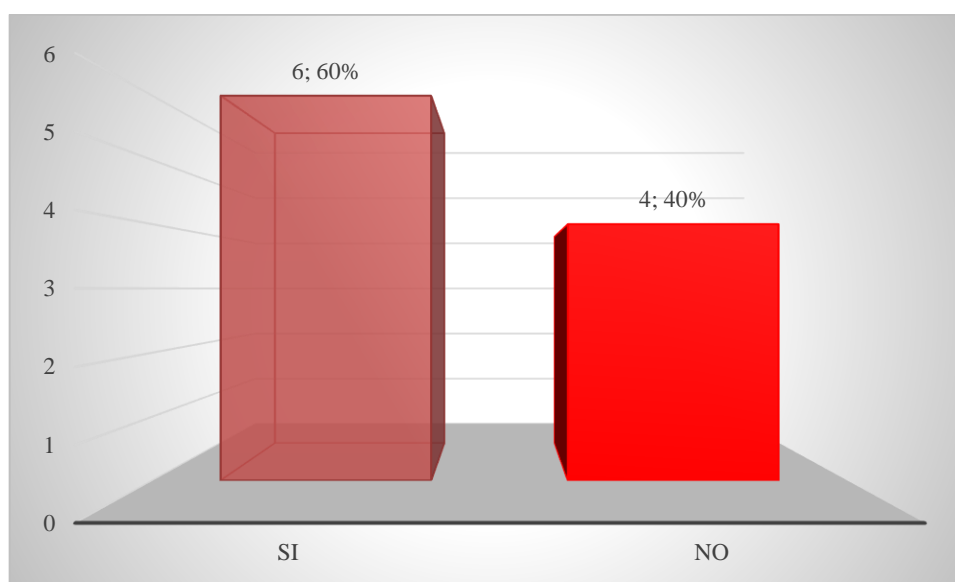
Tabla 6.

	Frecuencia	Porcentaje
Si	6	60%
No	4	40%
TOTAL	10	100%

Fuente: Investigación Directa.

Elaborado por: Genaro Marcelo Soto Alemán.

Gráfico 10.



Fuente: Investigación Directa.

Elaborado por: Genaro Marcelo Soto Alemán.

ANÁLISIS: A la pregunta que se analiza, el 60% respondió si conocer en el cantón Cuenca, políticas y acciones encaminadas a eliminar la violencia contra las féminas y el femicidio; mientras que el 40% respondió lo contrario.

INTERPRETACIÓN: La intención de la pregunta es conocer desde la perspectiva de los encuestados, si han tenido conocimiento en la ciudad de Cuenca, de la adopción por parte de las autoridades de medidas o acciones que deriven de políticas con la finalidad de eliminar la violencia de género y el femicidio. En este sentido, si bien es cierto que la mayoría respondió sí conocerlas, lo preocupante es que las dos terceras partes de la muestra respondieron desconocer dichas acciones, lo que demuestra que el conjunto de políticas que son reguladas por las autoridades en la ciudad, no son de general conocimiento ni se sienten en la realidad cantonal como debiera ser. El hecho de que promotores de los derechos de las mujeres desconozcan este tipo de acciones, demuestra falencias en la implementación de las mismas.



Pregunta 7. Mencione las Políticas Públicas Locales o acciones para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y el femicidio, que usted conoce se han dictado en la ciudad de Cuenca, en los últimos años.

En este sentido, el 60% de la muestra respondió sí conocer políticas y acciones que han sido implementadas en la realidad cantonal para erradicar y prevenir la violencia contra las mujeres y el femicidio. Dentro de las acciones que conocían de forma cualitativa se encuentran varios proyectos del GAD Municipal y Provincial, en los que se ha trabajado de forma conjunta con los promotores; la mesa cantonal de género, las actividades que se realizan en los 16 días de activismo en el mes de noviembre para conmemorar el 25 el día de la no violencia hacia las mujeres; la promulgación de la ordenanza para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres en Cuenca; la creación de la Red VIF, de la mesa de la Violencia; las acciones derivadas del Plan de Igualdad de Oportunidades.

Estos constituyen las principales acciones que han sido referenciadas por los encuestados que sí han conocido de políticas cantonales para eliminar este problema. Como se evidencia, los que sí conocen de las mismas, en su conjunto, sí dominan con suficiencia en mayor o menor medida, el conjunto de medidas que se han adoptado a través de los años en la ciudad para eliminar la violencia contra las mujeres, lo que demuestra un conocimiento adecuado en torno a ellas.

Preguntas cualitativas a promotoras de derechos contra la violencia de género

Dentro del cuestionario se realizaron preguntas cualitativas para profundizar el conocimiento que tenían las promotoras sobre la implementación y políticas para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. De esta forma, se diseñaron dos preguntas con este fin. La primera pregunta buscaba indagar a cómo la promotora de derechos en contra de la violencia contra la mujer, en la mesa cantonal de género u otro espacio cantonal pertinente, ha apoyado la implementación y ejecución de políticas locales o acciones para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y el femicidio, en la ciudad de Cuenca.

Variadas y disímiles fueron las respuestas. El apoyo según varios de las encuestadas, ha consistido en promover mociones ante la mesa cantonal de género, aunque a pesar de haber sido recomendadas, no se han definido y menos aplicado. En este sentido, otras encuestadas han referido que han apoyado con ideas, proyectos, aunque no han sido aplicados en su totalidad porque existen otros grupos minoritarios que tienen otros intereses que afectan la implementación de dichas políticas. Otro conjunto de encuestadas refiere que el apoyo se manifiesta esencialmente a través de su presencia en la mesa cantonal con una importante



representación. También brindan su apoyo con atención en el orden legal, social, psicológico a las mujeres que han sido víctimas de este tipo de violencia. También exponen que trabajan con grupos vulnerables en difusión y prevención; así como estar presentes en eventos.

Otro conjunto de encuestadas refiere que el apoyo de los promotores varía, porque en unos casos intervienen visibilizando las necesidades de los centros y casas que brindan atención a las mujeres víctimas de este tipo de violencia; y en otros casos, detectando errores y falencias de la administración de justicia en la efectivización de los derechos de las víctimas. Estos en sentido general constituyen las principales acciones de apoyo de la muestra encuestada a las políticas y acciones de eliminación de la violencia contra las mujeres y el femicidio en la ciudad de Cuenca.

Como se puede demostrar con la respuesta genérica de las encuestadas, a las promotoras de los derechos de las mujeres en este cantón no se le da la debida participación en la conformación de las políticas públicas en la ciudad, porque aunque algunos señalan que tienen sus representantes en la mesa cantonal de género, también refiere que sus recomendaciones y consideraciones no son aplicadas o ejecutadas, dejando entonces para estos promotores, la acción de ayudar o apoyar pero desde el exterior a la conformación de dichas políticas, cuestión que desde nuestra consideración, es erróneo.

Otra pregunta cualitativa que se realizó, fue sobre sus propias iniciativas de políticas públicas (Pregunta 10) para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y el femicidio en la ciudad de Cuenca, con la finalidad de ver el tipo de empoderamiento sobre el tema entre las encuestadas.

Sobre esta interrogante, las encuestadas tuvieron varias propuestas. Algunas de las encuestadas consideraron que lo realmente importante y principal sería promover campañas de concientización puesto que esa sería una buena forma de prevenir, con la finalidad de que la sociedad cuencana conociera las causas y consecuencias, principalmente jurídicas, de este tipo de comportamiento. Otros encuestados defienden la idea de que debiera aprobarse una ordenanza para que las instituciones educativas básicas tengan como materia obligatoria la equidad de género. Otra parte de la muestra, apuesta por la lucha porque no desaparezcan los grupos y organizaciones de lucha contra la violencia de género, así como el necesario fortalecimiento económico de los grupos de promotores para poder brindar más apoyo.



Adicional a ello, se propone la realización de talleres de capacitación constante en los centros educativos del cantón, así como eventos de empoderamiento y fomento de la independencia económica de las mujeres. También sería importante ampliar los proyectos y gastos de inversión para la lucha contra este tipo de violencia. Estas constituyen en principio, las principales propuestas aportadas por la muestra encuestada. Si se consolidan en ideas principales, es claro que las propuestas van dirigidas a la realización de programas de educación en cuestiones vinculadas con el género, especialmente en los centros educacionales, y centros laborales; y también el destino de recursos económicos para perfeccionar y ampliar las acciones tendentes a prevenir dicho fenómeno.

3.4.2. Encuesta a abogados y abogadas en el libre ejercicio de la profesión

Para tener un acercamiento a la visión de los abogados y abogadas en libre ejercicio, se decidió realizar un cuestionario, que tiene preguntas cuantitativas y cualitativas para ver el grado de involucramiento con el tema. De esta forma se realizaron 8 preguntas cuantitativas y 2 cualitativas.

Pregunta 1. Marque con una X, cuántos años de experiencia tiene como abogado, en el libre ejercicio de la profesión.

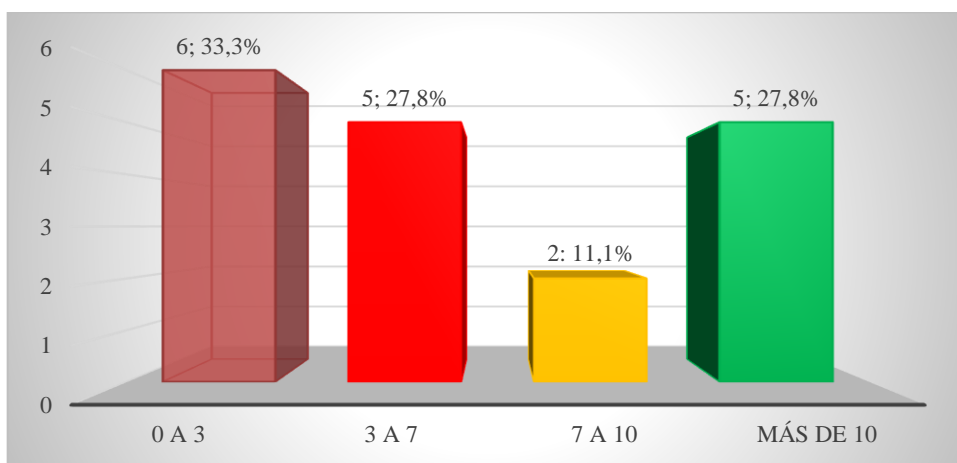
Tabla 7.

Años	Frecuencia	Porcentaje
0 a 3	6	33.3%
3 a 7	5	27.8%
7 a 10	2	11.1%
Más de 10	5	27.8%
TOTAL	18	100%

Fuente: Investigación Directa.

Elaborado por: Genaro Marcelo Soto Alemán.

Gráfico 11.



Fuente: Investigación Directa.

Elaborado por: Genaro Marcelo Soto Alemán.

ANÁLISIS: A la pregunta que se analiza, el 33.3% de los encuestados posee una experiencia de entre 0 a 3 años; el 27.8% de entre 3 a 7 años; igual porcentaje posee una experiencia de las de 10 años y el 11.1%, de 7 a 10 años.

INTERPRETACIÓN: La interrogante busca conocer cuál es la experiencia profesional de los encuestados, a los efectos de poder evaluar la objetividad y certeza de sus conocimientos en las respuestas ofrecidas en la encuesta. Aunque el mayor porcentaje posee una experiencia de 0 a 3 años, es realmente importante que más de la quinta parte de la muestra posea más de 10 años de experiencia profesional y otro tanto entre 3 y 7 años. Todo ello permite sin lugar a dudas considerar válidos los resultados de la encuesta.

Pregunta 2. Desde su experiencia, ¿Cómo considera los índices de violencia contra las mujeres en la ciudad de Cuenca?

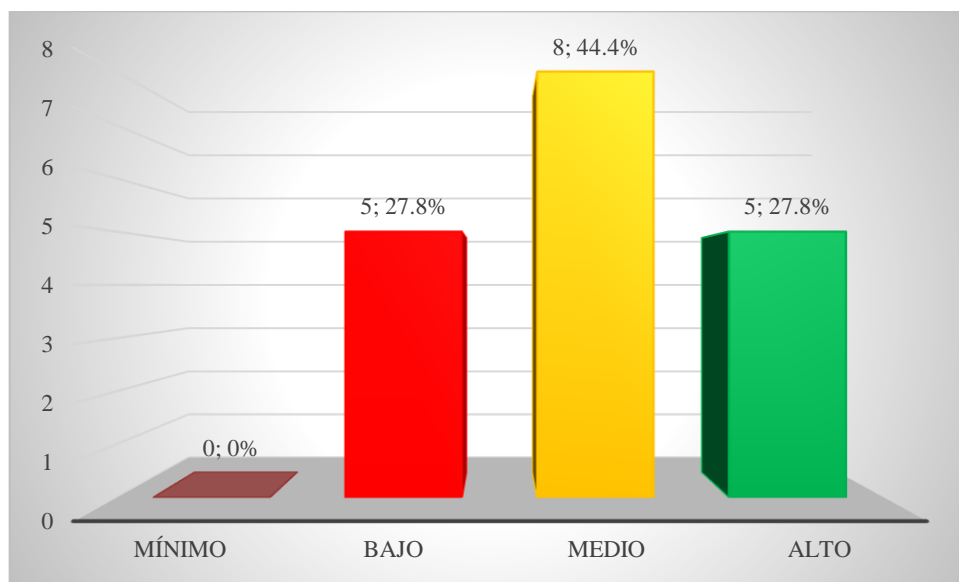
Tabla 8.

	Frecuencia	Porcentaje
Mínimo	0	0%
Bajo	5	27.8%
Medio	8	44.4%
Alto	5	27.8%
TOTAL	18	100%

Fuente: Investigación Directa.

Elaborado por: Genaro Marcelo Soto Alemán.

Gráfico 12.



Fuente: Investigación Directa.

Elaborado por: Genaro Marcelo Soto Alemán.

ANÁLISIS: A la pregunta que se analiza, el 44.4% considera que el índice de percepción de la violencia de género en Cuenca es medio, mientras que el 27.8% considera que es alto e igual porcentaje considera que es bajo.

INTERPRETACIÓN: Como se puede evidenciar de la interrogante, caso la mitad de los encuestados consideran que la violencia contra las mujeres en el cantón Cuenca es media, mientras que porcentajes importantes consideran alta, lo que demuestra que, en efecto, este tipo de manifestación preocupa y se encuentra latente en la realidad cantonal. Este dato difiere de las personas promotoras de salud quienes consideran que el índice de violencia contra la mujer es alto. Este dato puede estar demostrando el poco conocimiento de los abogados y abogadas en el tema y la escasa preparación en la formación del derecho sobre la problemática de la violencia de género.

Pregunta 3. ¿Considera usted si la mera tipificación de la figura del femicidio en el Código Orgánico Integral Penal, COIP, ha sido un elemento efectivo y determinante para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y el femicidio en el Ecuador?

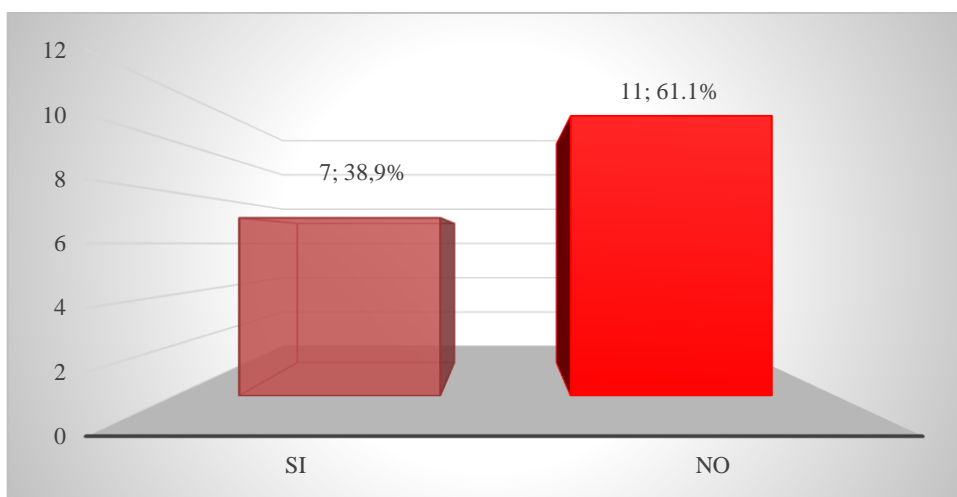
Tabla 9.

	Frecuencia	Porcentaje
Si	7	38.9%
No	11	61.1%
TOTAL	18	100%

Fuente: Investigación Directa.

Elaborado por: Genaro Marcelo Soto Alemán.

Gráfico 13.



Fuente: Investigación Directa.

Elaborado por: Genaro Marcelo Soto Alemán.

ANÁLISIS: Ante la interrogante que se formula, el 61.1% de los encuestados opinaron que la tipificación del delito de femicidio en el COIP, no fue ni efectiva ni determinante para eliminar las manifestaciones de violencia contra la mujer ni el femicidio en el Ecuador; mientras que un 38.9% opinó lo contrario.

INTERPRETACIÓN: El resultado de esta pregunta es importante. El hecho de que la amplia mayoría de los encuestados consideren que en efecto, la regulación del femicidio como delito en el COIP no haya resultado o incidido de forma positiva en la reducción de dicho problema, es consecuencia de una madurez de la mentalidad de los encuestados que muy bien evalúan que la sola tenencia de una norma jurídica penal que sanciona un comportamiento determinado, no provee el espacio necesario y definitivo para incidir de forma contundente en la realidad a la que va destinada su regulación. Sin embargo, sigue siendo alto el porcentaje que considera que con la sola tipificación del delito de femicidio ha sido determinante para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer.

Pregunta 4. ¿Considera usted si dentro de la Política Criminal del Estado ecuatoriano para prevenir delito, se han adoptado políticas públicas adecuadas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y el femicidio?

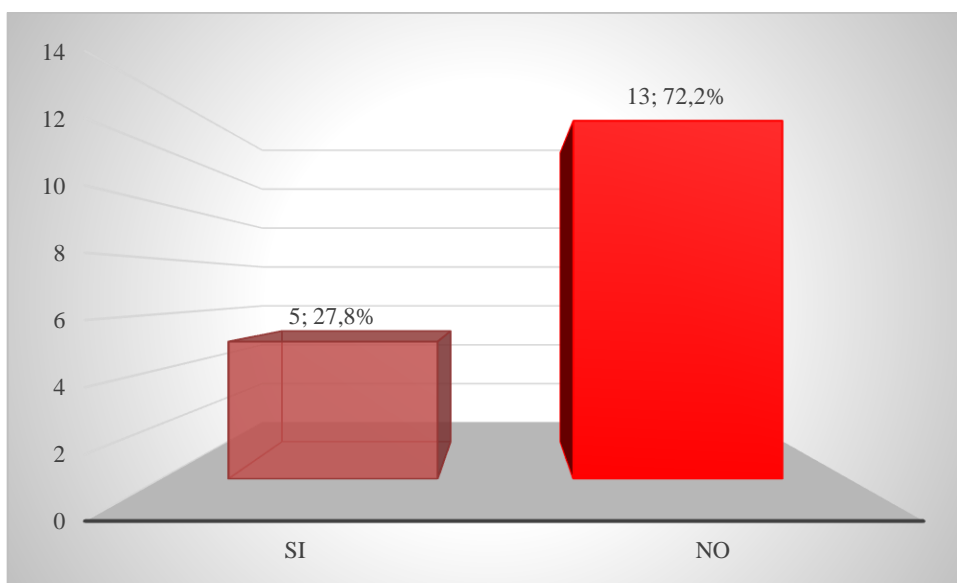
Tabla 10.

	Frecuencia	Porcentaje
Si	5	27.8%
No	13	72.2%
TOTAL	18	100%

Fuente: Investigación Directa.

Elaborado por: Genaro Marcelo Soto Alemán.

Gráfico 14.



Fuente: Investigación Directa.

Elaborado por: Genaro Marcelo Soto Alemán.

ANÁLISIS: Ante la interrogante que se plantea, el 72.2% considera que, dentro de la política criminal en el Ecuador, no han sido acertadas las políticas públicas adoptadas y por ende, no han jugado su papel decisivo en la reducción de la violencia de género y el femicidio en el país; mientras que el 27.8%, opinó lo contrario.

INTERPRETACIÓN: El resultado de esta interrogante es realmente importante. El hecho de la amplia mayoría de los encuestados, considere que dentro de la política criminal ecuatoriano las políticas públicas para erradicar la violencia de género y el femicidio no estén resultando, indica que los abogados encuestados tienen la certeza de que, en efecto, existen falencias y dificultades en la implementación de dichas políticas que no están favoreciendo los resultados deseados. En este sentido, es claro que existe una consideración mayoritaria de que existe una descoordinación de las reales acciones que son necesarias realizar para que de forma adecuada se produzcan resultados favorables en el entorno del problema.

Pregunta 5. ¿Conoce usted si en la ciudad de Cuenca, los órganos e instituciones llamadas a hacerlo, ha promovido en los últimos años, políticas, ordenanzas y acciones locales adecuadas y eficientes para erradicar la violencia contra las mujeres y el femicidio?

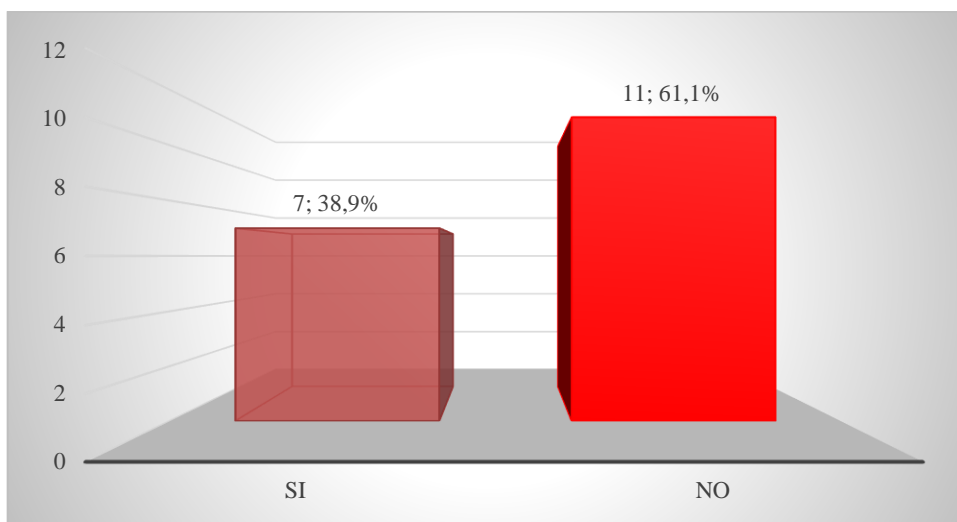
Tabla 11.

	Frecuencia	Porcentaje
Si	7	38.9%
No	11	61.1%
TOTAL	18	100%

Fuente: Investigación Directa.

Elaborado por: Genaro Marcelo Soto Alemán.

Gráfico 15.



Fuente: Investigación Directa.

Elaborado por: Genaro Marcelo Soto Alemán.

ANÁLISIS: A la pregunta que se realiza, el 61.1% desconoce si en los últimos años en Cuenca se han adoptado políticas públicas para eliminar la violencia de género y el femicidio; mientras que el 38.9%, expresó si conocerlas.

INTERPRETACIÓN: El resultado general de esta pregunta es preocupante. Si bien es cierto que casi las dos terceras partes de la muestra de abogados encuestados consideran que si han conocido de dichas políticas; existe una cantidad mayoritaria que refiere desconocerlas. Esto da cuenta, como se dijo en la primera pregunta, que existe una falta de formación y conciencia sobre el tema. Esto evidencia sin lugar a dudas que, en efecto, las medidas y acciones que han sido adoptadas a través d ellos años en Cuenca, no han tenido el impacto social deseado, y ello es consecuencia de una inadecuada implementación. El hecho de que abogados y abogadas desconozcan estas cuestiones, demuestran la ineficacia de los diseños y aplicación de estas políticas, las que no son percibidas por la población y, por ende, no tienen el efecto deseado en ella.



UNIVERSIDAD DE CUENCA

Pregunta 6. Según su experiencia, estadísticamente, ¿qué tan eficaces y cuan favorables para nuestro medio, han resultado la implementación de las políticas públicas dictadas en la ciudad de Cuenca, para erradicar la violencia contra las mujeres y el femicidio?

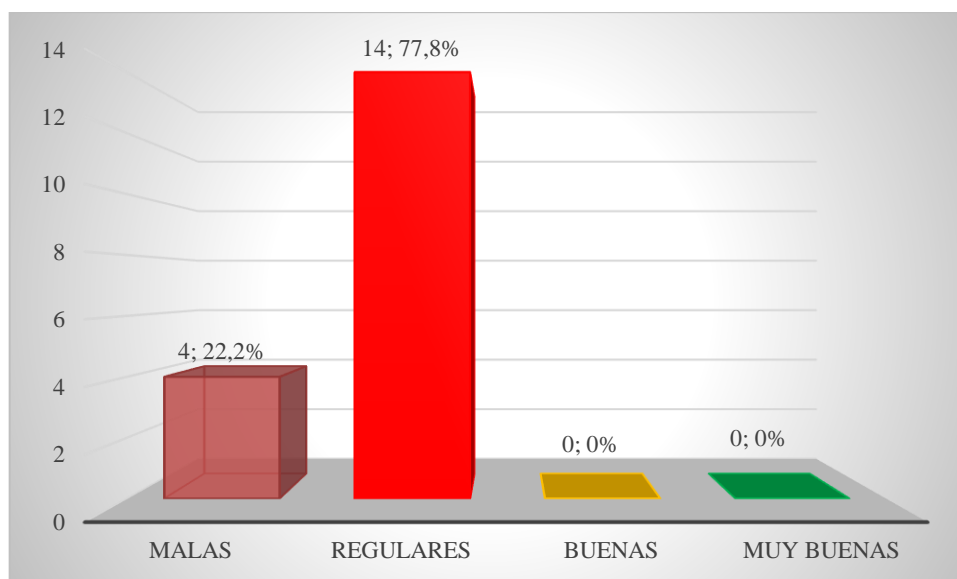
Tabla 12.

	Frecuencia	Porcentaje
Malas	4	22.2%
Regulares	14	77.8%
Buenas	0	0%
Muy Buenas	0	0%
TOTAL	18	100%

Fuente: Investigación Directa.

Elaborado por: Genaro Marcelo Soto Alemán.

Gráfico 16.



Fuente: Investigación Directa.

Elaborado por: Genaro Marcelo Soto Alemán.

ANÁLISIS: A la pregunta que se analiza, el 77.8% de los encuestados consideran que las políticas implementadas en el cantón Cuenca para erradicar la violencia hacia las mujeres y el femicidio han sido de regular eficacia y favorabilidad, mientras que el 22.2% las considera malas.

INTERPRETACIÓN: El resultado de esta interrogante lo que hace es demostrar o ratificar el hecho de que las políticas públicas que han sido adoptadas en dicha ciudad han sido ineficientes y por ende, no han logrado los fines para el cual fueron diseñadas. El hecho de que la amplia mayoría las califique como regulares y el resto de malas, evidencia que, en efecto, las medidas que han sido adoptadas en estos años, no cumplen con su cometido ni logran los objetivos, evidenciándose claramente en las cifras conocidas.

Pregunta 7. ¿Considera usted, si las ordenanzas, resoluciones, acuerdos, compromisos y políticas públicas aprobadas en la ciudad de Cuenca, referentes a erradicar la violencia contra la mujer, han sido adecuadas a la realidad estructural de la sociedad cuencana?

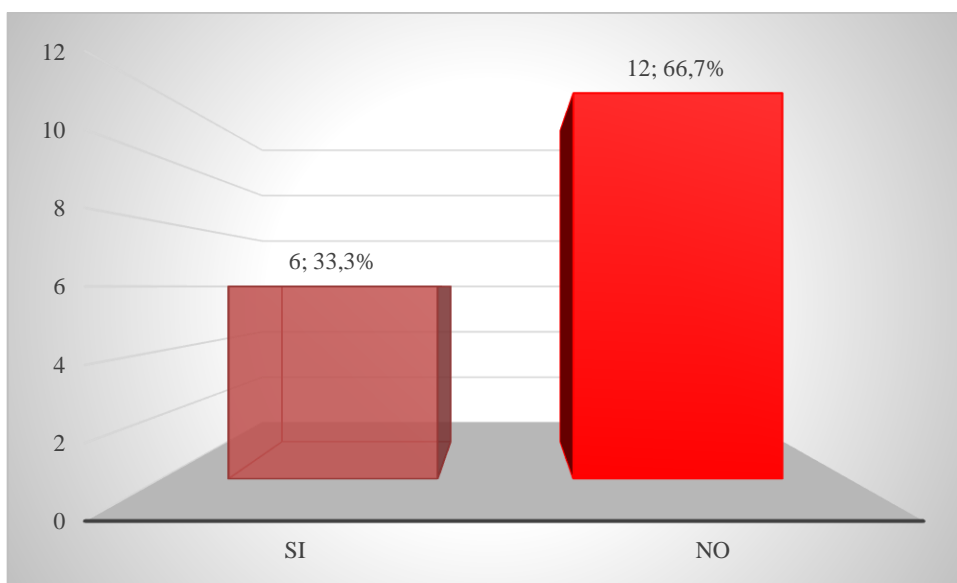
Tabla 13.

	Frecuencia	Porcentaje
Si	6	33.3%
No	12	66.7%
TOTAL	18	100%

Fuente: Investigación Directa.

Elaborado por: Genaro Marcelo Soto Alemán.

Gráfico 17.



Fuente: Investigación Directa.

Elaborado por: Genaro Marcelo Soto Alemán.

ANÁLISIS: A la interrogante que se analiza, el 66.7% de la muestra encuestada considera que las normas y políticas adoptadas en la ciudad de Cuenca para erradicar la violencia contra las mujeres, no se encuentran acorde a la realidad social que se vive en el cantón; mientras que el 33.3%, opinó lo contrario.

INTERPRETACIÓN: Esta interrogante tiene la finalidad de conocer si las normas jurídicas dictadas por las autoridades cuencanas y las políticas adoptadas, responden a la realidad social de Cuenca. El hecho de que la mayoría de los encuestados consideren que no, puede demostrar que las políticas diseñadas no estuvieron de la mano con el Colegio de Abogados en el cantón para la sensibilización de los y las profesionales del derecho. Es así que por ello no se ha logrado un verdadero impacto en la realidad social cuencana, porque las ordenanzas y medidas no han estado estructuradas sobre la realidad en la que viven las mujeres del cantón y el entorno en el que se desarrolla este tipo de violencia. De esta forma, es claro que el rediseño de dichas acciones se impone, desde un sustrato real y objetivo, que sea capaz de determinar las causas reales y condiciones verdaderas del entorno en el que tiene lugar la violencia.

Pregunta 8. ¿Cuál considera usted, debe ser la característica reivindicatoria principal, que debe tener una política pública de prevención y erradicación de violencia contra la mujer en la ciudad de Cuenca?

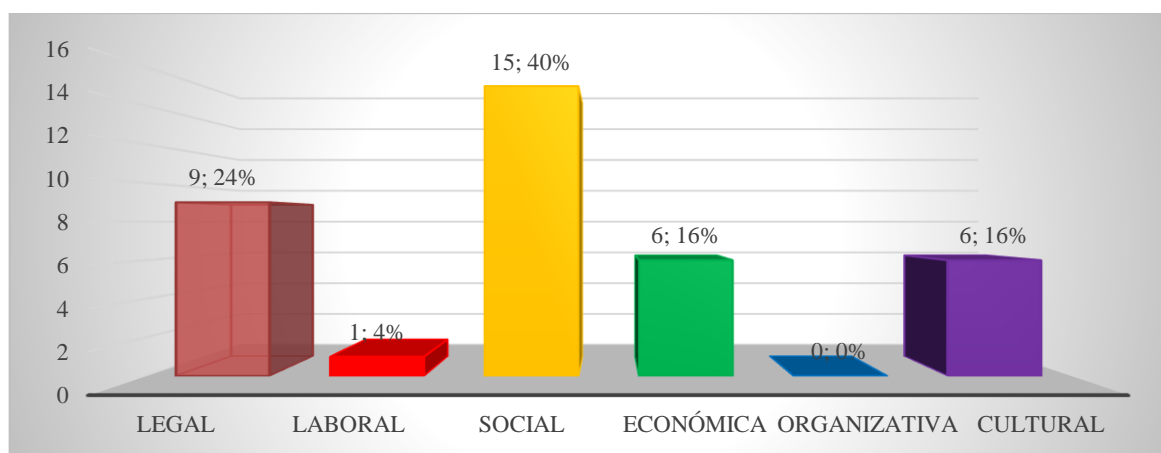
Tabla 14.

	Frecuencia	Porcentaje
Legal	9	24%
Laboral	1	4%
Social	15	40%
Económica	6	16%
Organizativa	0	0%
Cultural	6	16%
TOTAL	-	100%

Fuente: Investigación Directa.

Elaborado por: Genaro Marcelo Soto Alemán.

Gráfico 18.



Fuente: Investigación Directa.

Elaborado por: Genaro Marcelo Soto Alemán.

ANÁLISIS: Para el análisis de esta interrogante, se ha tenido como total, la cantidad general de respuestas adoptadas, teniendo ello en consideración a que los encuestados en su mayoría han señalado varias opciones. En este sentido, del total de opciones que han sido referidas por los encuestados, el 40% de ellos considera que el aspecto esencial sobre el que se deben estructurar estas políticas es el social; el 24% refiere que es el legal; el 16% el económico; igual porcentaje el cultural y solo el 4% considera en el entorno laboral.

INTERPRETACIÓN: La interrogante que se analizó con el conjunto de opciones posibles, evidencian sin lugar a dudas que, las políticas públicas en el cantón Cuenca que busquen prevenir y erradicar la violencia de género y el femicidio, deben tener como principal elemento característico, el orden social. Claramente, el entorno social en el que se desarrollan las relaciones de poder entre el hombre y la mujer, así como los patrones culturales machistas, constituyen el principal punto de partida de este tipo de violencia y al que deben dirigirse la mayor cantidad de acciones posibles. Ello claramente evidencia un conocimiento de la muestra seleccionada de que el sustrato social es importante para revertir la situación. Sin embargo, es importante también referir otros enfoques como el legal, cultural y económico en los que igualmente deben diseñarse acciones que tributen en conjunto, a la eliminación de esta manifestación de violencia.



Preguntas cualitativas a abogadas y abogados en libre ejercicio

Dentro del cuestionario se realizaron preguntas cualitativas para profundizar el conocimiento que tenían los y las abogadas sobre la implementación y políticas para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. De esta forma, se diseñaron dos preguntas con este fin. La primera pregunta (9) buscaba indagar a cómo la promotora de derechos en contra de la violencia contra la mujer, en la mesa cantonal de género u otro espacio cantonal pertinente, ha apoyado la implementación y ejecución de políticas locales o acciones para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y el femicidio, en la ciudad de Cuenca.

Pregunta 9. Mencione las Políticas Públicas Locales o acciones para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y el femicidio, que usted conoce se hayan dictado en la ciudad de Cuenca, en los últimos años.

Ante la interrogante en cuestión, los encuestados consideran que se han adoptado ordenanzas, pero que no están de acuerdo a la realidad en la que se vive. Téngase en cuenta que la mayoría de los encuestados y encuestadas no tienen una formación en la problemática, sin embargo, se muestran preocupados ante el tema. También refieren conocer de charlas por parte del municipio en determinados lugares y fechas. Conocen generalmente el Plan Cantonal de Prevención de Violencia para el periodo 2010-2020, el encuentro Iberoamericano de Género Cuenca 2018, así como la propuesta de ordenanza para primer debate en este propio año. Otro encuestados han expuesto que no conocen ninguna política pública que haya sido considerada por la municipalidad de Cuenca.

En este sentido, es claro que entre las abogadas y abogados que han sido encuestados, no existe un conocimiento adecuado de cuáles han sido las políticas públicas que han sido adoptadas para eliminar la violencia de género en la ciudad de Cuenca. Ello es indicativo que dichas acciones han sido deficitarias que ni siquiera gran parte de los profesionales del derecho las conocen, mucho menos la mayoría de la población. Ello demuestra y ratifica la ineficacia de dichas medidas, pues el desconocimiento de las mismas demuestra carencia de conocimiento y generalización entre la población cuencana.



Pregunta 10. Desde su campo de acción ¿Qué propuesta de Política Pública Local, usted plantearía implementarse en nuestro medio, para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y el femicidio en la ciudad de Cuenca?

Variadas fueron las propuestas que han sido aportadas por los encuestados. Algunos consideran que se deberían crear normas de acuerdo a la realidad en la que se vive en el cantón. Es así que es necesario capacitar a toda la sociedad sobre qué debe entenderse por género y evitar a toda costa cualquier comportamiento de odio hacia las mujeres. Adicional a ello, debe fortalecerse la política pública en el orden social, mediante la concientización por medio de charlas y seminarios. Otros encuestados consideran que deben realizarse acciones en el orden educativo y cultural. En este sentido en las instituciones educativas primarias y secundarias deben tener dentro de su pensum educativo materias vinculadas con la equidad de género.

Otro grupo de encuestados consideran que las cuestiones vinculadas con el respeto y la equidad entre el hombre y la mujer, deben ser atendidas en todos los centros educativos desde la primaria hasta las universidades de forma tal que todos los procesos formativos se inculquen este tipo de pensamiento y se rompa el esquema patriarcal existente en muchos sectores de la sociedad ecuatoriana. Estos en esencia constituyen las principales medidas a adoptar que han sido recomendadas por los encuestados. De esta forma es claro que entre la muestra seleccionada existe conocimiento suficiente sobre los principales entornos en los que se puede trabajar.

3.4.3. Encuesta a funcionarios y funcionarias cantonales relacionados con la prevención y erradicación de la Violencia contra la Mujer

El tercer colectivo encuestado fue el de funcionarios y funcionarias cantonales relacionados con la prevención y erradicación de la Violencia contra la Mujer para efectos de conocer su percepción sobre las normas y su relación con las políticas públicas locales. Al igual que en las anteriores, se realizaron 8 preguntas cuantitativas y 2 preguntas cualitativas.

Pregunta 1. Desde su experiencia como funcionario/a cantonal ¿Considera usted si la mera tipificación de la figura del femicidio en el COIP, ha sido un elemento efectivo y determinante para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y el femicidio en Ecuador?

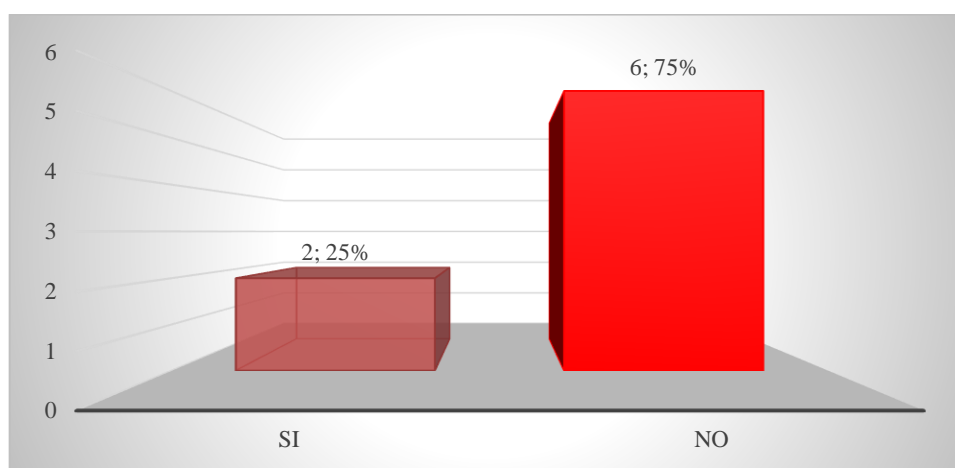
Tabla 15.

	Frecuencia	Porcentaje
Si	2	25%
No	6	75%
TOTAL	8	100%

Fuente: Investigación Directa.

Elaborado por: Genaro Marcelo Soto Alemán.

Gráfico 19.



Fuente: Investigación Directa.

Elaborado por: Genaro Marcelo Soto Alemán.

ANÁLISIS: A la pregunta que se analiza, el 75% de los encuestados opinaron que la mera tipificación del delito de femicidio en el COIP no ha sido ni efectivo ni determinante para la eliminación de la violencia contra las mujeres y el femicidio en el Ecuador; mientras que el 25% opinó que sí.

INTERPRETACIÓN: Aunque la cuarta parte de la muestra refiere que, en efecto, la regulación en el COIP de dicha figura delictiva es determinante para la erradicación de dicho problema, la amplia mayoría de los encuestados consideran que en nada es eficaz ni determinante, pues unido a la regulación legal, es necesario implementar políticas públicas coherentes y eficientes que contribuyan de forma efectiva, a reducir los índices de violencia hacia la mujer.

Pregunta 2. Desde su experiencia como funcionario cantonal ¿Considera usted, si tanto la Política Criminal del Estado ecuatoriano, como la Legislación Penal ecuatoriana, ofrece el marco legal pertinente para adoptar políticas públicas locales eficaces para combatir y erradicar la violencia de género, en la ciudad de Cuenca?

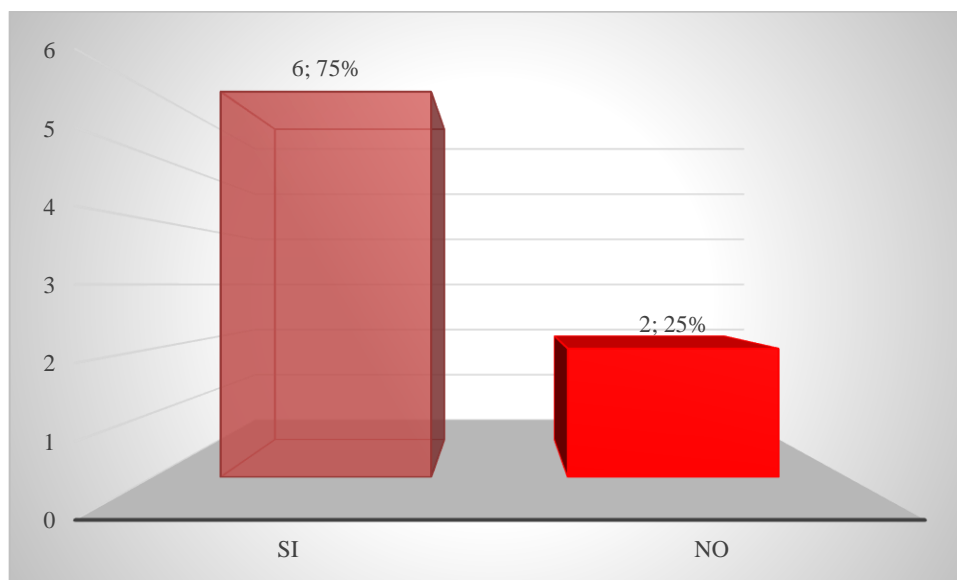
Tabla 16.

	Frecuencia	Porcentaje
Si	6	75%
No	2	25%
TOTAL	8	100%

Fuente: Investigación Directa.

Elaborado por: Genaro Marcelo Soto Alemán.

Gráfico 20.



Fuente: Investigación Directa.

Elaborado por: Genaro Marcelo Soto Alemán.

ANÁLISIS: A la pregunta que se analiza, el 75% de los encuestados respondieron que tanto la política criminal ecuatoriana como el marco jurídico, si favorece la adopción de políticas públicas que tributen a la reducción de la violencia contra la mujer en Cuenca; mientras que el 25% considera que no.

INTERPRETACIÓN: En esta interrogante interesante es la reacción de los funcionarios del cantón, pues la amplia mayoría considera que, en efecto, el ordenamiento jurídico nacional y la política criminal del ecuador, favorecen la adopción de políticas pública en Cuenca que resultan en la reducción de dicho tipo de violencia. Ello indica que la amplia mayoría de los encuestados se encuentra conforme con el entorno institucional y legal ecuatoriano para adoptar políticas.

Pregunta 3. ¿Considera usted si el impulso de políticas públicas adecuadas incide de forma positiva en la disminución de la violencia contra las mujeres y el femicidio?

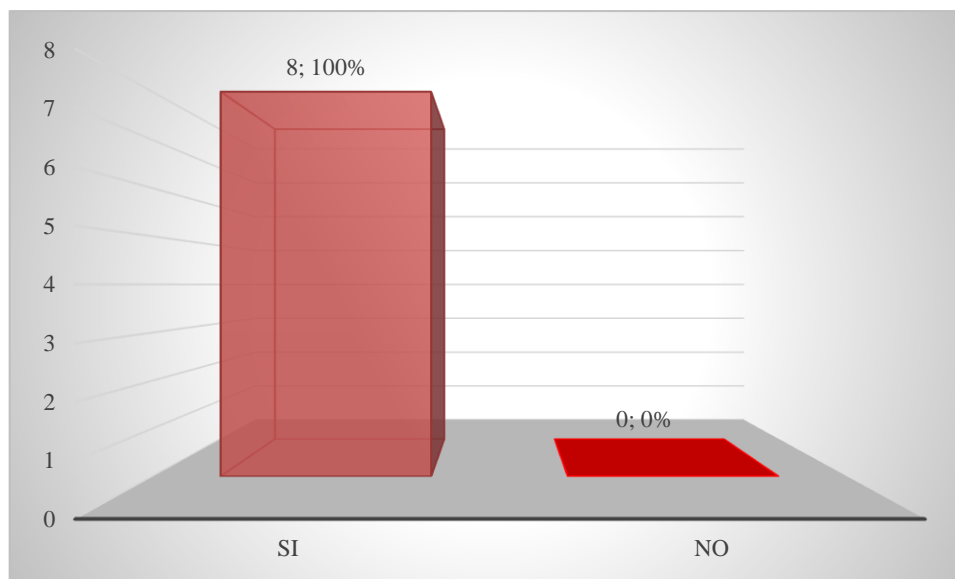
Tabla 17.

	Frecuencia	Porcentaje
Si	8	100%
No	0	0%
TOTAL	8	100%

Fuente: Investigación Directa.

Elaborado por: Genaro Marcelo Soto Alemán.

Gráfico 21.



Fuente: Investigación Directa.

Elaborado por: Genaro Marcelo Soto Alemán.

ANÁLISIS: A la interrogante que se analiza, el 100% de los encuestados considera que en efecto, políticas públicas adecuadas sí pueden incidir de forma positiva en la prevención y eliminación de la violencia contra la mujer y el femicidio.

INTERPRETACIÓN: El resultado de esta interrogante es muy importante. En este sentido, es claro que la totalidad de los funcionarios encuestados consideran que, las políticas públicas constituyen un mecanismo por medio del que se puede lograr luchar contra este problema. Existe un consenso absoluto entre la muestra de que, en efecto, el conjunto de acciones concretas que pueden realizarse, son las que definitivamente resultarán en erradicar este tipo de violencia. Ello es importante porque los encuestados son conscientes del valor de dichas políticas para lograr tales fines.

Pregunta 4. Según su experiencia ¿Durante el ejercicio de su cargo, conoce si en la ciudad de Cuenca, se han dictado políticas públicas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y el femicidio?

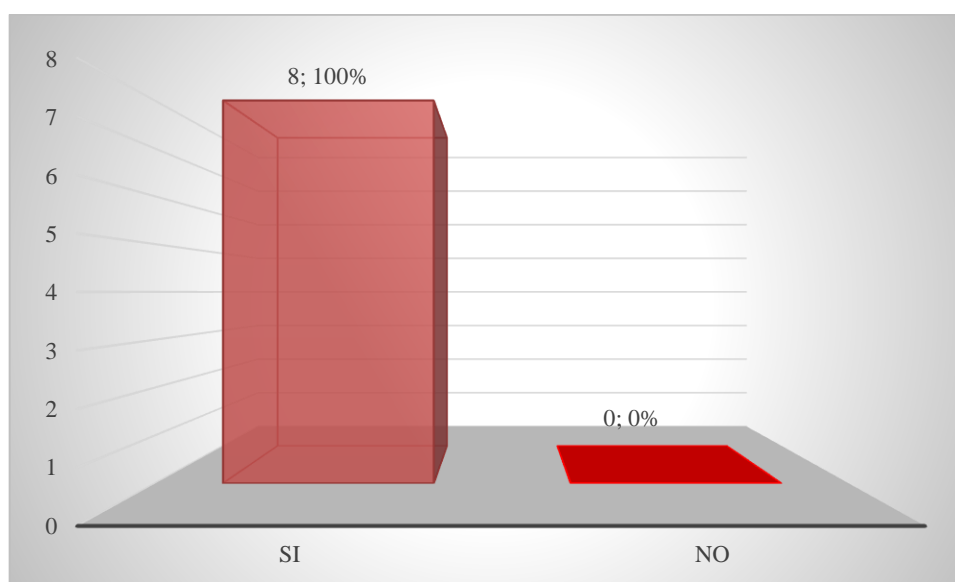
Tabla 18.

	Frecuencia	Porcentaje
Si	8	100%
No	0	0%
TOTAL	8	100%

Fuente: Investigación Directa.

Elaborado por: Genaro Marcelo Soto Alemán.

Gráfico 22.



Fuente: Investigación Directa.

Elaborado por: Genaro Marcelo Soto Alemán.

ANÁLISIS: Ante la pregunta que se analiza, el 100% de los funcionarios encuestados conocen de políticas públicas que han sido adoptadas en Cuenca para eliminar la violencia de género y el femicidio.

INTERPRETACIÓN: Como quiera que los funcionarios cantonales han tenido trayectoria y participación o conocimiento de una u otra forma en las políticas que han sido implementadas en el cantón, es claro que poseen conocimientos suficientes en torno a estas. Ello es importante, porque evidencia que los encuestados han estado relacionados de forma alguna con las medidas que han sido adoptadas en los últimos años, por lo que están en posición de poder evaluarlas.



Pregunta 5. Mencione las Políticas Públicas Locales o acciones para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y el femicidio, que usted conoce se han dictado en la ciudad de Cuenca, en los últimos años.

Diversas han sido las respuestas dadas por los funcionarios encuestados. Dentro de las políticas públicas que han sido diseñadas e implementadas en Cuenca para eliminar la violencia contra la mujer y el femicidio, se encuentran la redacción de ordenanzas, reglamentos, planes, proyectos y programas. Adicional a ello refieren el Plan de Igualdad de Oportunidades, el Plan Cantonal de Erradicación de la Violencia contra la Mujer 2014-2020, así como la normativa que ha sido aprobada para erradicar este tipo de violencia e instauración de la mesa cantonal.

Estas constituyen en esencia las principales políticas que han sido referenciadas por los encuestados. Como se evidencia, los funcionarios que constituyen la muestra poseen dominio en sentido general, del conjunto de medidas y acciones que han sido adoptadas en el seno del cantón Cuenca para luchar contra la violencia. Ello es importante porque evidencia que, entre la muestra encuestada, existe suficiente conocimiento sobre dichas medidas, pudiéndolas evaluar críticamente, lo que se evidencia con los datos que han sido analizados.

Pregunta 6. Según su experiencia, estadísticamente, ¿Cómo evaluaría usted la implementación de las políticas públicas dictadas en la ciudad de Cuenca, para erradicar la violencia contras las mujeres y el femicidio?

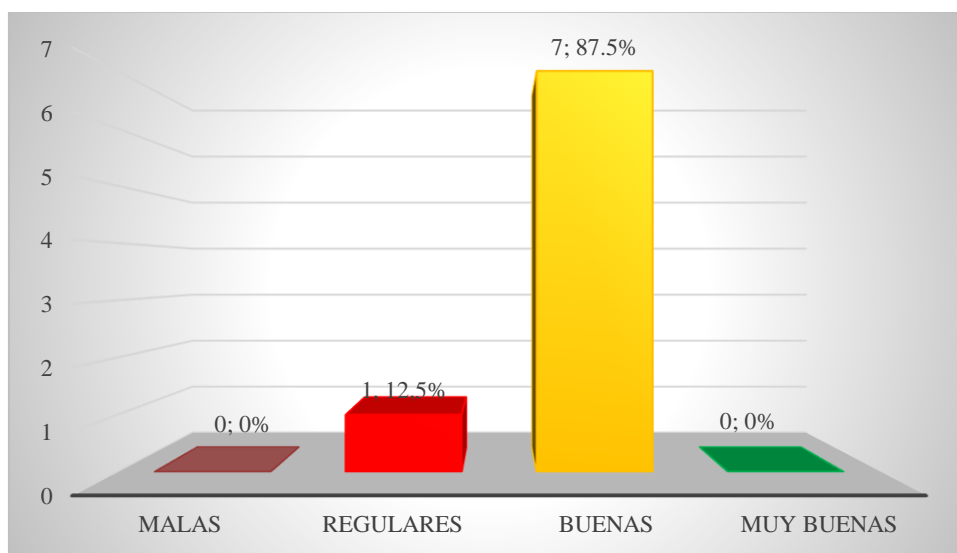
Tabla 19

	Frecuencia	Porcentaje
Malas	0	0%
Regulares	1	12.5%
Buenas	7	87.5%
Muy Buenas	0	0%
TOTAL	8	100%

Fuente: Investigación Directa.

Elaborado por: Genaro Marcelo Soto Alemán.

Gráfico 23.



Fuente: Investigación Directa.

Elaborado por: Genaro Marcelo Soto Alemán.

ANÁLISIS: A la pregunta que se analiza, el 87.5% de los funcionarios encuestados evalúan las políticas públicas implementadas en el cantón Cuenca como buenas, mientras que el 12.5% las considera como regulares.

INTERPRETACIÓN: La pregunta que se realiza y las respuestas derivada realmente es muy interesante. El hecho de que la amplia mayoría de los encuestados considere que las políticas que han sido diseñadas y puestas en práctica en el cantón son buenas, contradice los datos de violencia en dicho territorio. Existe un antagonismo, desde nuestra percepción, entre la calificación de buenas, con las cifras de violencia de género existentes en el cantón. Ello implica sin duda alguna que los encuestados se encuentran parcializados con las mismas, encontrándose incapacitados para ofrecer un criterio objetivo sobre las mismas que permitan reconocer la ineficiencia de estas.

Pregunta 7. ¿Considera usted, si las políticas públicas aprobadas en la ciudad de Cuenca, referentes a erradicar la violencia contra la mujer, han sido adecuadas a la realidad estructural de la sociedad cuencana?

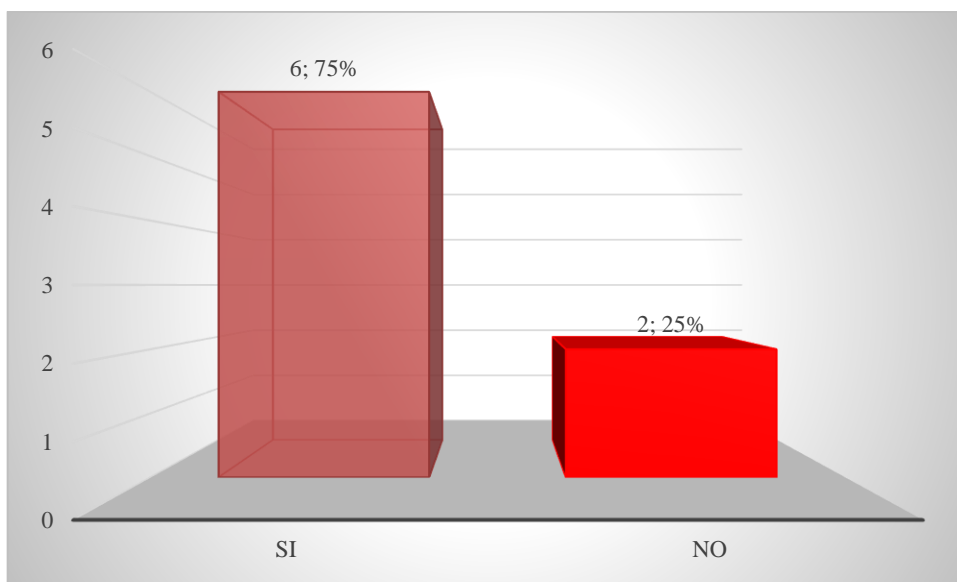
Tabla 20.

	Frecuencia	Porcentaje
Si	6	75%
No	2	25%
TOTAL	8	100%

Fuente: Investigación Directa.

Elaborado por: Genaro Marcelo Soto Alemán.

Gráfico 24.



Fuente: Investigación Directa.

Elaborado por: Genaro Marcelo Soto Alemán.

ANÁLISIS: A la pregunta que se analiza, el 75% de los encuestados consideran que el conjunto de normas jurídicas y políticas públicas adoptadas en Cuenca, responden a las exigencias de la realidad cantonal; mientras que un 25% opinó lo contrario.

INTERPRETACIÓN: El hecho de que la amplia mayoría de los encuestados consideran que, en efecto, las ordenanzas y resoluciones, así como las políticas que han sido diseñadas e implementadas en la realidad cantonal de Cuenca, han sido las adecuadas para la realidad estructural social de dicho territorio, evidencia un desconocimiento sobre la ineficacia de las mismas. Desde nuestra consideración, la valoración de los encuestados denota sentido de compromiso desde su postura de funcionarios, impidiéndoles observar que, en efecto, dichas medidas no han sido ni suficientes, ni las adecuadas, bastando para ello observar las cifras. También el dato puede indicar una falta de autoevaluación interna sobre la eficacia y eficiencia de las políticas y de los vasos comunicantes necesarios con las instituciones jurídicas para hacerlo efectivo.

Pregunta 8. ¿Cuál considera usted debe ser la característica principal que debe tener una política pública de prevención y erradicación de violencia contra la mujer en la ciudad de Cuenca?

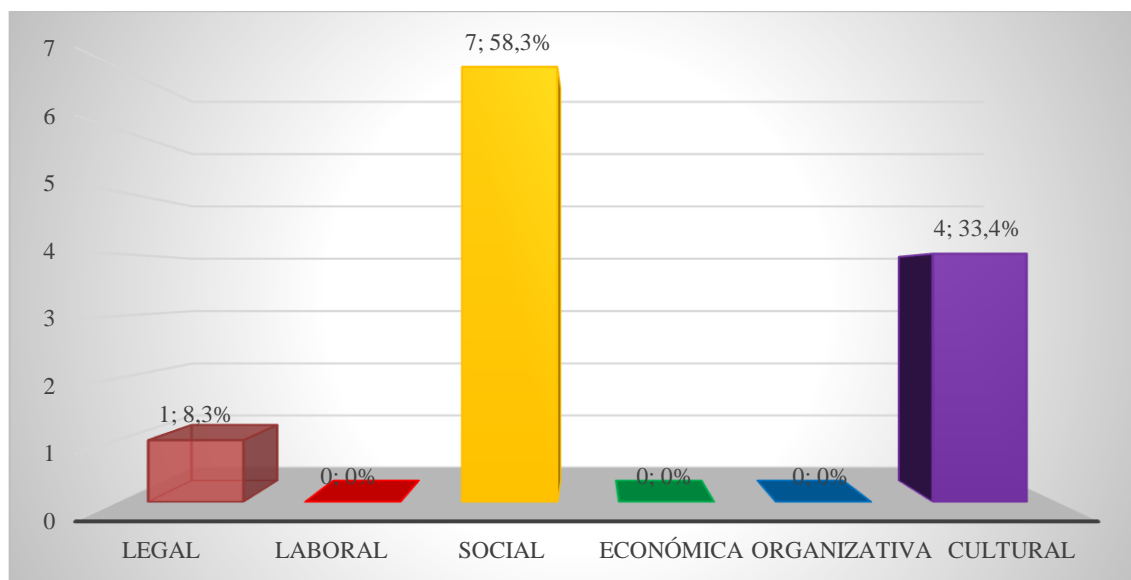
Tabla 21.

	Frecuencia	Porcentaje
Legal	1	8.3%
Laboral	0	0%
Social	7	58.3%
Económica	0	0%
Organizativa	0	0%
Cultural	4	33.4%
TOTAL	-	100%

Fuente: Investigación Directa.

Elaborado por: Genaro Marcelo Soto Alemán.

Gráfico 25.



Fuente: Investigación Directa.

Elaborado por: Genaro Marcelo Soto Alemán.

ANÁLISIS: A la pregunta que se analiza, que se realizó en base a la totalidad de respuestas y no de encuestados, pues estos optaron por responder varias opciones; el 58.3% coincide en que la característica esencial que debe primar en dichas políticas es el aspecto social, seguido del 33.4% que refirió el componente cultural y el 8.3% también el legal.

INTERPRETACIÓN: Como es claro, existe coincidencia mayoritaria en el hecho de que, en efecto, el componente social es la característica principal que debe imperar en el diseño y delimitación de las políticas públicas en el cantón Cuenca. Existe conformidad con el hecho de que es el entorno social, los elementos que surgen en este aspecto, los que inciden en mayor medida en los componentes de la violencia de género, claramente acompañados de otros como la cultura y lo jurídico.



Preguntas cualitativas a funcionarios y funcionarias locales

Dentro del cuestionario se realizaron preguntas cualitativas para profundizar la percepción de los funcionarios y funcionarias sobre la implementación y políticas para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. De esta forma, se diseñaron dos preguntas con este fin. La primera pregunta (9) buscaba indagar a cómo la promotora de derechos en contra de la violencia contra la mujer, en la mesa cantonal de género u otro espacio cantonal pertinente, ha apoyado la implementación y ejecución de políticas locales o acciones para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y el femicidio, en la ciudad de Cuenca.

Pregunta 9. Desde su campo de acción ¿Qué propuesta de Política Pública Local, usted plantearía implementarse en nuestro medio, para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y el femicidio en la ciudad de Cuenca?

Los funcionarios que han sido encuestados, opinaron sobre diversas políticas que pueden ser adoptadas para prevenir y erradicar el fenómeno de la violencia de género. En este sentido un grupo de encuestados consideran que la educación es primordial, y deben establecerse medidas para que sea ejecutada desde un enfoque de género en todos los niveles. También refieren que es importante sancionar fuertemente cualquier comportamiento de violencia de género tanto en los espacios públicos como privados.

Unido a ello, los encuestados se pronuncian sobre la necesidad de reformar las campañas de concientización y el incremento de la rigurosidad en la aplicación de las sanciones, pues la amplia mayoría refieren que las campañas en el territorio no han sido habituales, debiéndose también defender el incremento de la severidad de las penas. También se expresan sobre la necesidad de actualizar las ordenanzas municipales y adecuarlas a las nuevas exigencias del orden jurídico nacional. Muchos encuestados consideran que la sanción de la nueva ordenanza para la erradicación de la violencia de género en el cantón, sería un paso de avance realmente importante en el logro de tal finalidad. Estas constituyen algunas de las medidas más importantes que han sido propuestas por los funcionarios cantonales encuestados como mecanismos para prevenir y erradicar la violencia hacia las mujeres. Es de destacar una ausencia al acercamiento que deben tender los funcionarios y funcionarias con las instituciones jurídicas y judiciales de la provincia de cuenta, tales como el Colegio de Abogados, la Fiscalía Provincial, entre otros. Al ser una pregunta abierta, las personas encuestadas estaban en la libertad de responder críticamente sobre la realidad.

Pregunta 10. Según su experiencia ¿Qué tan positivo ha sido el accionar de los órganos cantonales de la ciudad de Cuenca, responsables de ejercer, promover, aprobar y garantizar la implementación de políticas locales, para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y el femicidio?

Todas las respuestas de los funcionarios cantonales encuestados han sido positivas en este sentido. La totalidad de ellos considera que el accionar de los órganos cantonales ha sido adecuado, porque por medio de la actuación de las autoridades de Cuenca, se ha logrado comprender entre los ciudadanos que cualquier acto de violencia contra la mujer en un entorno público o privado, constituye un delito, logrando concientizar a la amplia mayoría de la población sobre ello. Otros encuestados consideran que, en estos últimos años, se ha evidenciado una mejor articulación de la política en este sentido, pero que aun así, es necesario que otras instancias generen acciones y que la sociedad en su conjunto analice y reconstruya los patrones machistas que sostienen comportamientos de este tipo.

En sentido general, la amplia mayoría de funcionarios considera que el accionar de los órganos encargados de regular esta problemática en Cuenca, ha sido en sentido general, positivo, determinando y dejando claro que la violencia de género debe ser desterrada de la realidad cantonal a toda costa. No obstante, desde nuestra percepción debe existir una evaluación crítica permanente, que les permita diagnosticar la eficiencia de las políticas a favor de la erradicación de la violencia de género.

3.4.4. Encuesta a jueces, juezas y fiscales

Uno de los actores principales de esta investigación son los jueces, juezas y fiscales. Es de vital importancia tener un acercamiento, sobre la percepción que tienen con relación a la erradicación de la violencia de género. Para cumplir con el objetivo, se decidió realizar un cuestionario, que tiene preguntas cuantitativas y cualitativas para ver el grado de conocimiento e involucramiento con la temática. De esta forma se realizaron 8 preguntas cuantitativas y 2 cualitativas.

Pregunta 1. Marque con una X su cargo

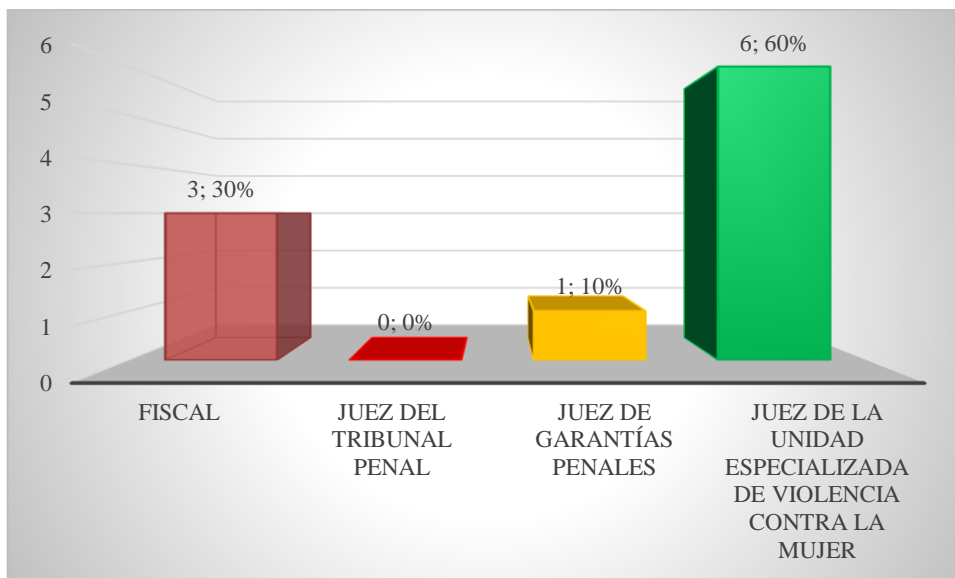
Tabla 22.

	Frecuencia	Porcentaje
Fiscal	3	30%
Juez del Tribunal Penal	0	0%
Juez de Garantías Penales	1	10%
Juez de la Unidad Especializada de Violencia contra la Mujer	6	60%
TOTAL	10	100%

Fuente: Investigación Directa.

Elaborado por: Genaro Marcelo Soto Alemán.

Gráfico 26.



Fuente: Investigación Directa.

Elaborado por: Genaro Marcelo Soto Alemán.

ANÁLISIS: A la pregunta que se analiza, el 30% de los encuestados son fiscales; el 10% son jueces de garantías penales y el 60% son jueces de Unidades Especializadas de Violencia contra la Mujer.

INTERPRETACIÓN: La interrogante que se analizó, tiene como finalidad conocer el ejercicio profesional de los encuestados. Realmente es muy importante que la amplia mayoría de los jueces y fiscales que han sido encuestados, pertenezcan a unidades especializadas de violencia contra la mujer, porque ello posibilitará recabar más información pertinente y adecuada a los objetivos del estudio. El hecho de que los jueces y fiscales estén relacionados de una u otra forma con este fenómeno, posibilita contar con datos válidos y confiables.

Pregunta 2. Marque con una X la experiencia profesional que tiene en el ejercicio de su cargo

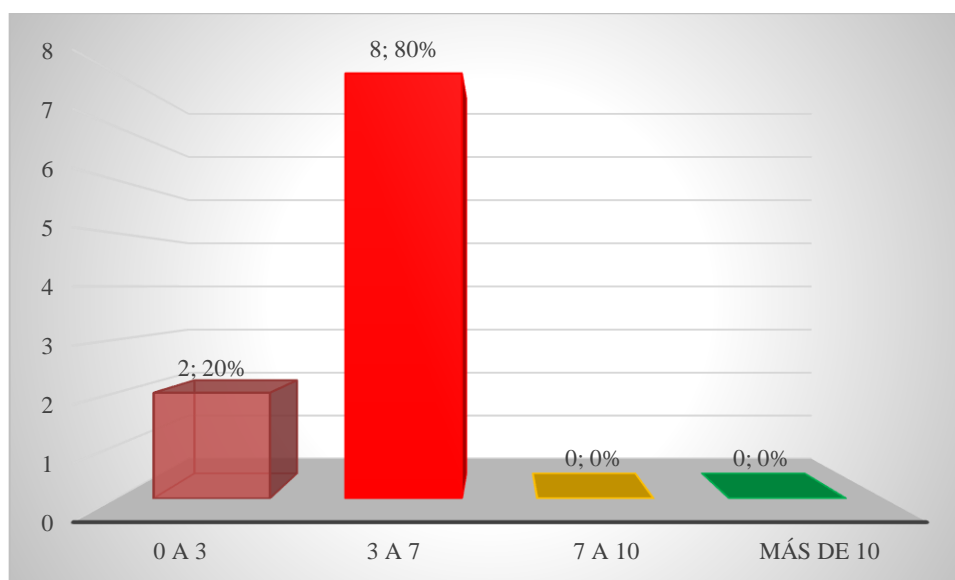
Tabla 23.

Años	Frecuencia	Porcentaje
0 a 3	2	20%
3 a 7	8	80%
7 a 10	0	0%
Más de 10	0	0%
TOTAL	10	100%

Fuente: Investigación Directa.

Elaborado por: Genaro Marcelo Soto Alemán.

Gráfico 27.



Fuente: Investigación Directa.

Elaborado por: Genaro Marcelo Soto Alemán.

ANÁLISIS: A la pregunta que se realiza, el 80% de los encuestados posee una experiencia profesional de entre 3 y 7 años, mientras que el 20% posee entre 0 y 3 años de trabajo como juez o fiscal.

INTERPRETACIÓN: El resultado de esta interrogante es importante, porque si bien no hay abogados con más de 7 años de experiencia en la muestra seleccionada, la gran mayoría de ellos encuestados posee entre 3 y 7 años de experiencia, lo que es suficiente como para que emitan juicios y criterios objetivos que tributen a conocer su percepción real sobre el fenómeno de la violencia de género en la ciudad de Cuenca.

Pregunta 3. Por experiencia en el ejercicio de su cargo ¿Cómo percibe usted los actos de violencia contra las mujeres en la ciudad de Cuenca?

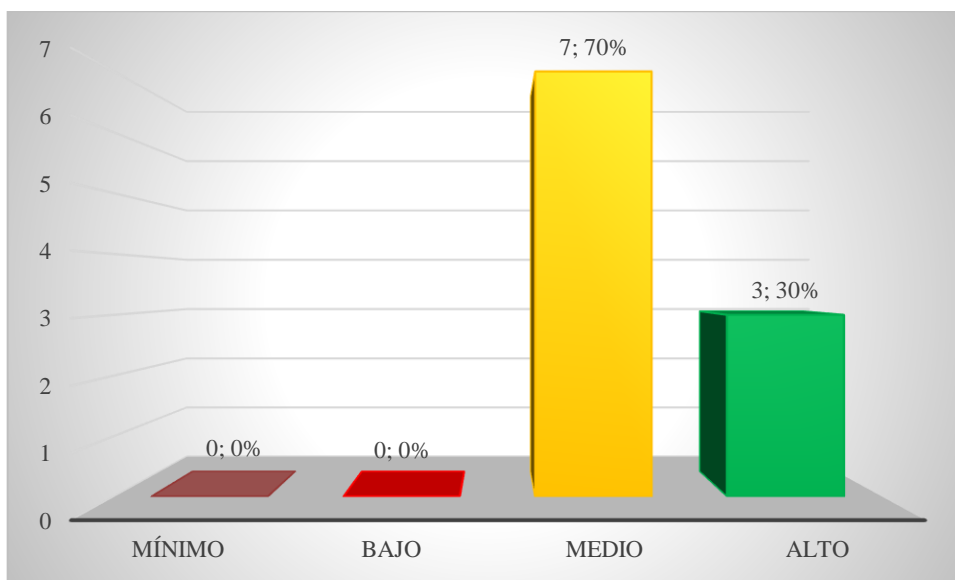
Tabla 24.

	Frecuencia	Porcentaje
Mínimo	0	0%
Bajo	0	0%
Medio	7	70%
Alto	3	30%
TOTAL	10	100%

Fuente: Investigación Directa.

Elaborado por: Genaro Marcelo Soto Alemán.

Gráfico 28.



Fuente: Investigación Directa.

Elaborado por: Genaro Marcelo Soto Alemán.

ANÁLISIS: A la pregunta que se realiza, el 70% considera que la percepción de violencia de género en la ciudad de Cuenca es media; mientras que el 30% restante la considera alta.

INTERPRETACIÓN: Esta pregunta tiene como finalidad conocer desde el criterio de los jueces y fiscales, su percepción en torno al grado de violencia de género existente en el cantón. Consistente con los anteriores grupos de encuestados, los jueces y fiscales tienen una percepción elevada de la violencia, que oscila entre media y alta, lo que sin lugar a dudas supone la necesidad de repensar el conjunto de acciones que han sido diseñadas e implementadas en la realidad del cantón, porque indiscutiblemente no ha resultado como se desea. En opinión de los encuestados, esto indica una mayor formación en el tema que los abogados y abogadas en libre ejercicio.

Pregunta 4. Considera usted si las normas jurídicas tipificadas con respecto a la prevención y erradicación de la violencia contra la mujer y el femicidio están correctamente reguladas en la legislación ecuatoriana.

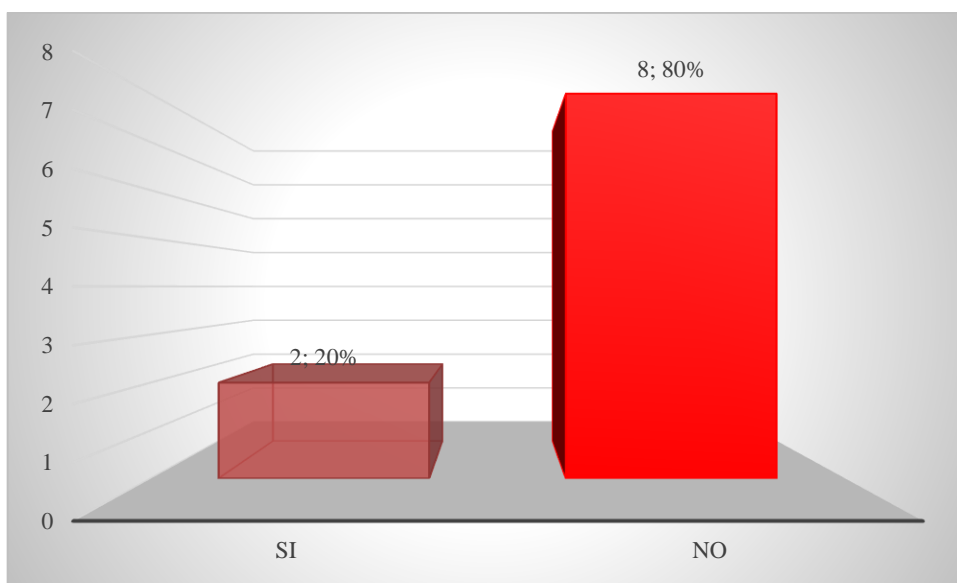
Tabla 25.

	Frecuencia	Porcentaje
Si	2	20%
No	8	80%
TOTAL	10	100%

Fuente: Investigación Directa.

Elaborado por: Genaro Marcelo Soto Alemán.

Gráfico 29.



Fuente: Investigación Directa.

Elaborado por: Genaro Marcelo Soto Alemán.

ANÁLISIS: A la pregunta que se analiza, el 80% considera que la regulación de las normas que se pronuncian sobre la prevención y eliminación de la violencia de género y el femicidio en el Ecuador, no se encuentran correctamente reguladas; mientras que un 20% opinó lo contrario.

INTERPRETACIÓN: El hecho de que la amplia mayoría de los jueces y fiscales encuestados coincidan en que el ordenamiento jurídico nacional, en materia de normas de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres no sea la adecuada, constituye sin lugar a dudas una crítica importante a las mismas, porque claramente provienen de los encargados de interpretar y aplicar las normas. Ello implica que dichas normas no se encuentran correctamente diseñadas, poseyendo falencias y dificultades que en nada tributan a proteger a la mujer ante actos de esta naturaleza.

Pregunta 5. ¿Considera usted si la sola tipificación de la figura del femicidio en el COIP, ha sido un elemento efectivo y suficiente para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y el femicidio?

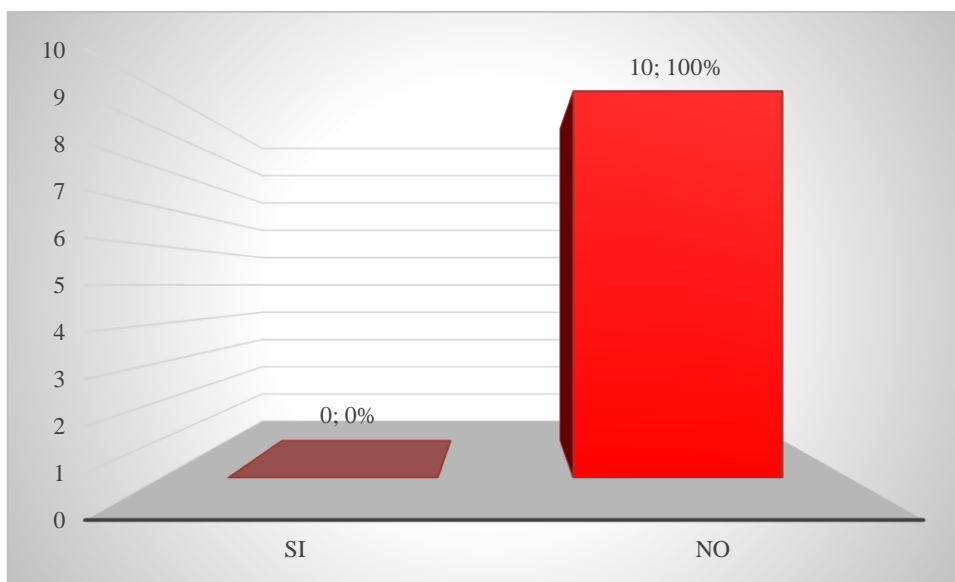
Tabla 26.

	Frecuencia	Porcentaje
Si	0	0%
No	10	100%
TOTAL	10	100%

Fuente: Investigación Directa.

Elaborado por: Genaro Marcelo Soto Alemán.

Gráfico 30.



Fuente: Investigación Directa.

Elaborado por: Genaro Marcelo Soto Alemán.

ANÁLISIS: A la pregunta que se analiza, el 100% de los jueces y fiscales encuestados consideran que la tipificación de la figura del femicidio en el COIP, no ha sido un elemento efectivo y decisivo en la eliminación de la violencia contra las mujeres y el femicidio.

INTERPRETACIÓN: El objetivo de la pregunta es conocer desde la postura de los jueces y fiscales, si la regulación en la norma penal ecuatoriana del femicidio, ayuda de forma contundente a la erradicación de la violencia de esta naturaleza. Es realmente importante el hecho de que, la totalidad de los jueces y fiscales coincidan en que, en efecto, la mera regulación de este tipo de conductas, no es suficiente para garantizar y proteger los derechos de la mujer. Ello implica incuestionablemente que es pertinente adoptar otras políticas además de las legales para lograr luchar de forma efectiva contra la violencia de género y el asesinato de mujeres.

Pregunta 6. ¿Considera usted si la aprobación de políticas públicas adecuadas podría incidir positivamente en la disminución de la violencia contra las mujeres y el femicidio?

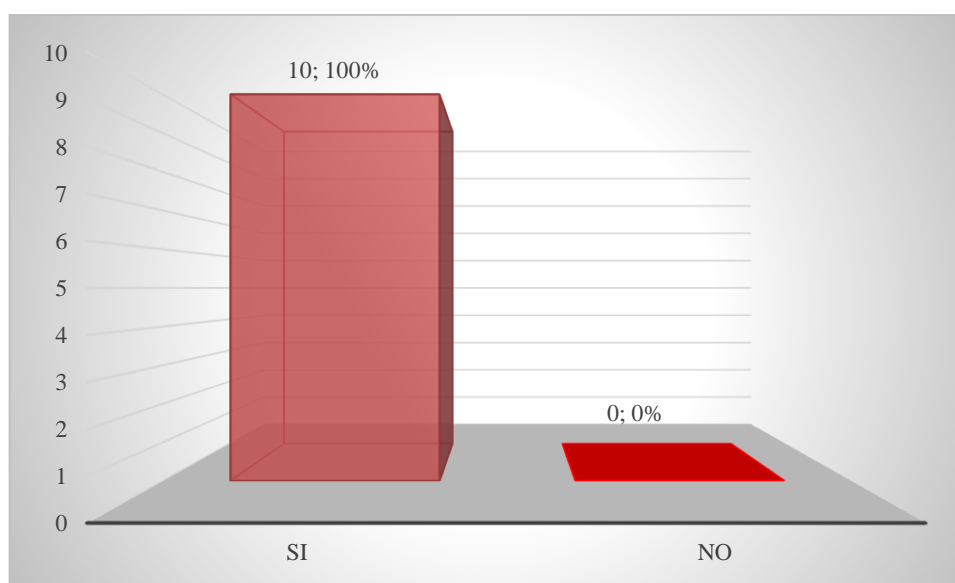
Tabla 27.

	Frecuencia	Porcentaje
Si	10	100%
No	0	0%
TOTAL	10	100%

Fuente: Investigación Directa.

Elaborado por: Genaro Marcelo Soto Alemán.

Gráfico 31.



Fuente: Investigación Directa.

Elaborado por: Genaro Marcelo Soto Alemán.

ANÁLISIS: A la pregunta que se analiza, el 100% de los encuestados consideran que la adopción de políticas públicas adecuadas sí incidiría de forma positiva en la eliminación de la violencia contra las mujeres.

INTERPRETACIÓN: La respuesta a esta interrogante sin duda alguna posee gran valor. El hecho de que la totalidad de los jueces y fiscales coincidan en que políticas públicas eficientes sí posibilitarían la erradicación de este tipo de violencia, implica un reconocimiento desde esta función, que la solución al problema no se encuentra en las leyes ni sanciones, sino en la eliminación de las causas estructurales que favorecen los comportamientos de este tipo.

Pregunta 7. ¿Conoce usted que en la ciudad de Cuenca, se hayan promovido en los últimos años, políticas públicas locales adecuadas para erradicar la violencia contra las mujeres y el femicidio?

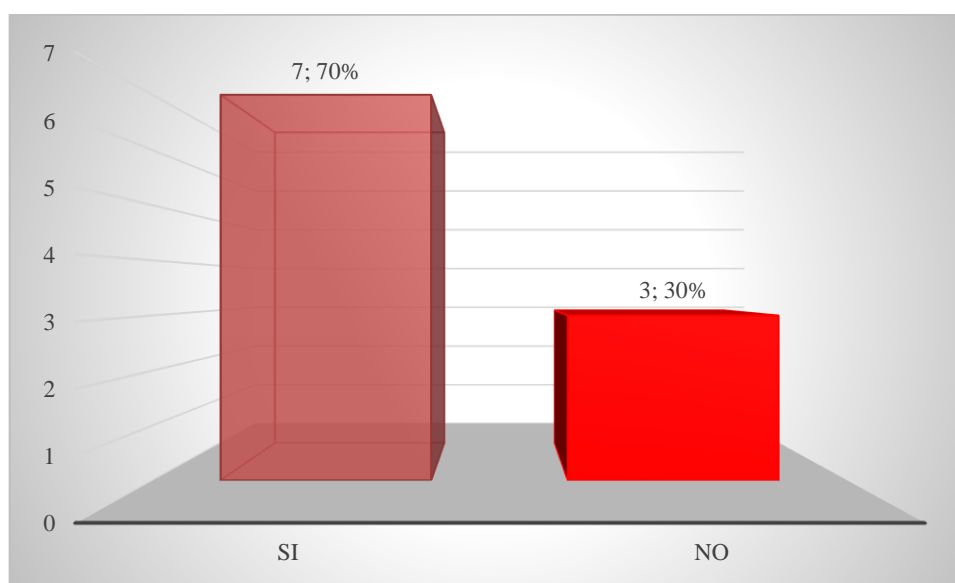
Tabla 28.

	Frecuencia	Porcentaje
Si	7	70%
No	3	30%
TOTAL	10	100%

Fuente: Investigación Directa.

Elaborado por: Genaro Marcelo Soto Alemán.

Gráfico 32.



Fuente: Investigación Directa.

Elaborado por: Genaro Marcelo Soto Alemán.

ANÁLISIS: Ante la pregunta que se ha formulado, el 70% de los encuestados respondió sí conocer la aplicación de políticas públicas para eliminar la violencia de género en Cuenca; mientras que el 30% opinó lo contrario.

INTERPRETACIÓN: Claramente la respuesta que se ha ofrecido en este sentido es muy importante. Ciertamente entre los jueces y fiscales encuestados en su mayoría, dominan y conocen determinadas acciones que han sido diseñadas y ejecutadas por las autoridades de Cuenca con la finalidad de prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres. Sin embargo, casi la tercera parte de los jueces y fiscales desconocen dichas acciones, lo que denota problemas en la socialización y generalización de las mismas, afectándose con ello la concientización y el efecto positivo de las mismas.

Pregunta 8. ¿Cuál considera usted, debe ser la característica reivindicatoria principal que debe tener una política pública de prevención y erradicación de violencia contra la mujer en la ciudad de Cuenca?

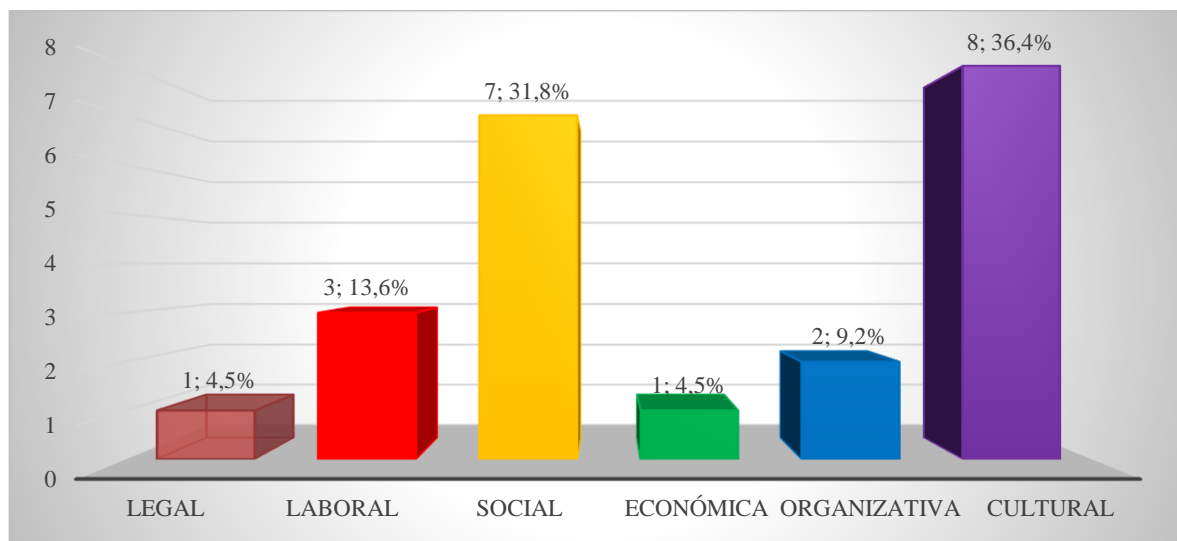
Tabla 29.

	Frecuencia	Porcentaje
Legal	1	4.5%
Laboral	3	13.6%
Social	7	31.8%
Económica	1	4.5%
Organizativa	2	9.2%
Cultural	8	36.4%
TOTAL	-	100%

Fuente: Investigación Directa.

Elaborado por: Genaro Marcelo Soto Alemán.

Gráfico 33.



Fuente: Investigación Directa.

Elaborado por: Genaro Marcelo Soto Alemán.

ANÁLISIS: A la interrogante que se analiza, el 36.4% de los jueces y fiscales encuestados consideran que el elemento característico principal de toda política pública para erradicar la violencia de género, el 36.4% considera que debe ser el entorno cultural; el 31.8% refiere que el social; el 13.6% el laboral; el 9.2% el organizativo; el 4.5 el legal e igual porcentaje el económico.

INTERPRETACIÓN: Lo más relevante de esta pregunta es que, la mayoría de los jueces y fiscales consideran que los ámbitos cultural y social constituyen los principales elementos característicos en los que se deben fundar las políticas públicas para eliminar este tipo de violencia. Existe coincidencia en el hecho de que, romper con los patrones culturales del machismo y fortalecer el entorno social, garantizarían de forma efectiva que estas políticas logren su cometido.



Preguntas cualitativas

Dentro del cuestionario se realizaron preguntas cualitativas para profundizar la percepción de los funcionarios y funcionarias judiciales sobre la implementación y políticas para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. De esta forma, se diseñaron dos preguntas con este fin.

Pregunta 9. ¿Cómo abogado, por la especialidad del cargo que ocupa, y la experticia adquirida en el desempeño de sus funciones, qué política Pública Local, para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y el femicidio, cree usted que se debería promover en la ciudad de Cuenca?

Los jueces y fiscales encuestados han aportado algunas ideas en torno a posibles políticas públicas que pudieran ser implementadas en la realidad cuencana para erradicar el problema de la violencia de género. Algunos consideran que deben adoptarse constantes campañas a nivel de entidades educativas, así como en el entorno audiovisual que permitan informar mucho más a la ciudadanía. En este sentido también deberían promoverse políticas educativas, sociales y culturales para que toda la sociedad y principalmente los niños, conozcan los derechos de las mujeres y se pueda construir una sociedad con equidad de género. En este punto coincide con las respuestas de los funcionarios locales de la ciudad de Cuenca, lo cual indica una aproximación de análisis que debe ser concretado.

Unido a ello, otros encuestados refieren que hay que promover el fortalecimiento de valores como la tolerancia y el respeto, principalmente en los centros educativos, pero también en el entorno laboral, debiéndole corresponder a los ministerios según cada competencia. En este sentido, un grupo de jueces y fiscales consideran que hay que adoptar políticas sobre la educación en prevención, así como un empoderamiento en derechos y atención a las víctimas de violencia de género que vaya mucho más allá que el sistema de justicia. Estos en sentido general, constituyen las principales ideas sobre políticas que podrían adoptarse en Cuenca para eliminar de una vez y por todas, la violencia contra las mujeres.

Pregunta 10. ¿Desde la experticia adquirida en el desempeño de sus funciones, qué propuesta personal cree usted que podría formalizar ante quien corresponda, para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y el femicidio, en la ciudad de Cuenca?

Diversas y variadas han sido las consideraciones aportadas por los encuestados. Un grupo de ellos defiende que, sería viable adoptar una verdadera mesa de justicia, que involucre a todas las entidades y a más colectivos sociales. También se considera que todo debe centrarse en el ámbito educativo, de las escuelas, donde se forman a los niños, niñas y

adolescentes. Adicionalmente recuerdan que es pertinente implementar políticas de publicidad en los diferentes medios de comunicación que propugna en el respeto y la protección a los derechos de las mujeres, así como que se formen a todos los miembros de la sociedad en los derechos y deberes que tenemos unos como otros.

Otro conjunto encuestado considera que es pertinente solicitar y demandar al alcalde de la ciudad de Cuenca, el diseño y aplicación de un Plan de Difusión de Respeto al Otro, que tenga lugar tanto dentro del municipio como en los diferentes organismos donde se ejerza sus competencias, ya fuere en el ámbito privado o público. También es consideración de los jueces y fiscales, la necesaria revisión técnica de las normas jurídicas para encontrar los problemas en la redacción de la ley y en su aplicación, y a partir de las falencias detectadas, reestructurar dichas normas para que sean mucho más efectivas. De esta forma se considera también que debe fomentarse los mecanismos para la prevención de este tipo de violencia en todo tipo de instituciones y en todos los barrios y comunidades del cantón.

Éstos constituyen sin lugar a duda, las principales consideraciones de los jueces y fiscales en torno a las propuestas que desde el entorno personal podrían incrementarse en el cantón, para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y el femicidio. Como ha podido observarse, la amplia mayoría de los encuestados consideran que el entorno educacional y social es esencial en la formulación de este tipo de políticas, debiendo establecerse a través de acciones y normas jurídicas coherentes y eficientes dictadas en el territorio.

3.4.5. Una aproximación para una propuesta de mecanismos legales e institucionales que disminuyan la violencia contra la mujer en la ciudad de Cuenca

Diseñar y proponer políticas públicas que generen acciones eficaces y pertinentes en la prevención, detección y erradicación de la violencia contra la mujer, en Cuenca, no resulta tarea fácil. Como se ha demostrado a lo largo del estudio, más de una década de propuestas normativas y de políticas públicas aprobadas y ejecutadas no han reducido significativamente en el cantón los índices de este tipo de violencia. Si bien se ha realizado un intento por ofrecer un marco integral que lo garantice, todos y cada uno de los planes y medidas han fallado incluso ya no en eliminar el fenómeno, sino en reducirlo.



Es así como, realizar una propuesta que sea diferente y que garantice de forma concreta los objetivos y metas que nos proponemos es tarea compleja. No obstante, en sentido general, el marco del derecho comparado analizado aconseja que, si bien es complejo realizarlo, no es difícil lograrlo. Desde nuestra consideración, para proponer determinadas políticas públicas en Cuenca, que reduzcan y lleguen a erradicar esta problemática, parte de la necesaria existencia de un marco normativo que le imponga, so pena de sanción, a los poderes públicos constituidos, el preocuparse y ocuparse de forma objetiva y con decisión política sobre el asunto.

Primordialmente, para considerar la elaboración de políticas públicas, es necesario contar con un marco jurídico lo suficientemente elaborado como para establecer obligaciones concretas para los órganos cantonales encargados, que no dejen cabida a confusiones o ausencia de responsabilidades en el diseño, elaboración, implementación, ejecución y monitoreo de cada uno de los estándares de dichas políticas. Ante ello es necesario que tanto la norma constitucional cuanto una ordenanza cantonal, reconozcan la obligatoriedad del gobierno cantonal de promover políticas públicas dirigidas a disminuir y finalmente eliminar la violencia contra la mujer. Por ello, considerando que esta problemática es multifactorial, tanto el Estado nacional cuanto el gobierno cantonal, deberían adaptar su normativa, tendiente a favorecer acciones que, de forma integral y conjunta, reviertan la equivocada cultura machista existente y generen una convivencia armónica entre mujeres y hombres.

Luego, sería pertinente la aplicación de mecanismos de evaluación continuos sobre la eficacia de las políticas públicas adoptadas. En Cuenca, si bien es cierto se cuenta con políticas públicas, éstas no cuentan con el monitoreo y con el seguimiento adecuado, lo que ha resultado, de acuerdo a los datos que se tienen, en una lucha infructuosa contra este fenómeno. Por ello, el conjunto de acciones que cada institución ejecuta, tiene que evaluarse constantemente, de forma tal que se pueda revisar su efectividad y la necesidad de direccionar constantemente su objetivo, por ello, debe ser aconsejable su evaluación permanente.

Teniendo como fundamento las cuestiones anteriores, se estaría en el escenario apropiado para combatir exitosamente el problema. Es así que las políticas públicas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres deben sustentarse primeramente en normas legales claras que determinen responsabilidades y compromisos de los órganos y organismos del sector público, garantizando de esta forma un compromiso integrado con el sector privado, involucrando a sindicatos, partidos políticos, organizaciones indígenas, organizaciones



sociales, de derechos humanos, y cuanta organización se encuentre constituida en el cantón, de forma tal que sean todos ayuden o favorezcan la decisión contundente de atacar el problema.

Un mecanismo muy importante sería la elaboración de un plan integral de acción cantonal, en el que se delimiten el conjunto de acciones concretas y específicas que deban ejecutarse tanto a nivel de cantón, parroquias, comunidades y barrios, de forma tal que se puedan vincular no sólo las esferas gubernamentales sino lograr la intervención y colaboración de todos los entes sociales en los que tienen lugar la política en sí, garantizando que los miembros de cada comunidad puedan sentir la relevancia de ejecutar y lograr las metas y objetivos de dichos planes.

Es necesario que, desde los diferentes órganos y entidades del sector público en Cuenca, las decisiones y acciones que se implementen para la consecución de los objetivos institucionales sean planteados integralmente desde un enfoque de género. En el campo laboral, muy importante es el informar, capacitar, sensibilizar y concientizar a los funcionarios y trabajadores de todo nivel, sobre los elementos vinculados a la equidad de género, de forma tal que provea no sólo el conocimiento y tratamiento necesario en el entorno laboral, sino que sirva como fundamento y pilar sustancial para la vida en familia.

Otro de los elementos que es necesario implementar dentro de estas políticas públicas es la intervención que debe realizar el Concejo Cantonal de Cuenca como ente rector de las mismas, sobre aquellos aspectos que son en esencia los que originan el fenómeno. Políticas y estrategias nacionales y cantonales contra la debilitada cultura, contra el sistema educacional carente de valores, contra los malos procesos de formación, a favor de la eliminación del desempleo, contra la malnutrición, la carencia de vivienda, falta de acceso a los servicios básicos, alimentación y los demás derechos a lo que tiene las personas, les ofrece el entorno propicio para desarrollar comportamientos de esta índole. Por ello, es necesario que se considere como imprescindible que, para eliminar el problema de la violencia de género, es necesario que toda la ciudadanía, sin excepción alguna tenga una vida digna, porque cuando el ser humano ve satisfechas sus necesidades básicas, es cuando se dispone favorablemente para ser activo y productivo socialmente, favoreciendo con ello la disminución de comportamientos de este tipo.

En este sentido, el gobierno cantonal cuencano debe tener la obligación de convertir en realidad todos y cada uno de los compromisos y estrategias que ha adoptado. De nada vale el



ordenamiento jurídico, así como los planes cantonales aprobados, si no son llevados a la práctica. Es necesaria que cada una de las acciones diseñadas sea puesta en la realidad con el espíritu y la pertinencia adecuada, para lo cual se exige un elemento esencial, que es la voluntad política indiscutible e incuestionable de lograr tales fines. Para ello es pertinente destinar los recursos necesarios, sin que constantemente se estén aludiendo justificaciones de orden presupuestario, para evadir compromisos de esta índole.

Un elemento esencial que debe contener todo plan cuya finalidad sea la erradicación de la violencia de género, es la necesidad de cambiar la concepción social de machismo. La cultura patriarcal se sustenta en posturas conservadoras, que poco a poco van eliminándose en el planeta. Por ello es necesario que, desde etapas tempranas en la vida de los niños y niñas, a través de programas educativos de obligatoria aplicación se quebranten las posturas vinculadas con el hecho de que el varón es el que trabaja y posee el rol rector dentro del hogar, y la mujer es quien debe dedicarse a los quehaceres de la casa y someterse al arbitrio del hombre, y debe ser en la escuela donde necesariamente se apoye la formación en valores y cultura de las futuras generaciones.

Finalmente, un punto esencial en toda política pública de prevención y erradicación de este tipo de violencia, es su evaluación continua. Exigentemente las acciones de control y evaluación de las políticas, deben realizarse de manera continua y en periodos cortos de tiempo. Lo ideal sería que cada una de las acciones sea constantemente evaluada, con el fin de reprogramar o re planificar su propósito y por ende su objetivo, persiguiendo la transformación social preponderante. Esto supondría un elevado grado de responsabilidad, que en todo momento debería preocuparse y ocuparse por lograr los indicadores deseados que contribuyan continuamente al logro del objetivo.

Estos, en general, constituyen los principales presupuestos que deberían caracterizar o identificar una política pública eficiente que pueda ser implementada en Cuenca y que de forma efectiva logre resultados a corto plazo. Desde mi consideración y como lo he venido defendiendo a lo largo de la investigación, tan importante es el diseño como la estructuración de políticas competentes y pertinentes. El pilar esencial de las mismas se encuentra en la voluntad política de articular acciones conjuntas entre órganos, instituciones y autoridades cantonales para lograr tales metas; involucrando en sus propuestas a la sociedad en general y al sector privado, quienes también deben preocuparse por la necesidad de una sociedad libre de violencia de toda clase. Por ello, la sociedad civil en su conjunto debe realizar acciones de



cooperación y exigencia necesarias que favorezcan un gobierno comprometido por llevar a la práctica, de forma objetiva y real, cada una de las estrategias que favorezcan dicho propósito.

CONCLUSIONES

La violencia de género constituye una grave vulneración de los derechos humanos. Desde hace años, la comunidad internacional se ha preocupado por dejar en claro el hecho de que este tipo de violencia atenta contra los derechos de las mujeres, afectando su integridad física, emocional, sexual, patrimonial y económica. Claramente, el femicidio es la manifestación extrema de la violencia contra las mujeres y las niñas en sociedades patriarcales donde el cuerpo de las mujeres sigue siendo cosificado. Es así como se puede evidenciar que la violencia contra la mujer constituye en la actualidad uno de los principales problemas sociales en la región latinoamericana, en el país y en la ciudad de Cuenca.

Por ello, a nivel internacional han sido aprobados un conjunto de instrumentos jurídicos, cuya finalidad es la de imponer a los Estados signatarios la obligación de adoptar políticas nacionales y locales coherentes y coordinadas que garanticen prevenir, detectar y eliminar cualquier manifestación de violencia de género. Como consenso de la comunidad internacional, se establece desarrollar todo el esfuerzo necesario para lograr tales fines. Derivado de ello, la amplia mayoría de naciones han adoptándolos mismos, promulgando normas jurídicas nacionales que logren armonizar los principios universales con las realidades que vive cada país.

América Latina y el Caribe constituye una de las regiones del planeta donde mayor índice de violencia contra las mujeres hay. A pesar de disímiles y complejos ordenamientos jurídicos nacionales, con sus respectivos planes de acción y estrategias, muchos países no han logrado reducir los índices de este tipo de violencia en los últimos años. Contrario a lo que se esperaba en función de los objetivos planteados en cada una de dichas naciones, las estadísticas indican que, lejos de disminuir o aminorar dicho problema, se ha generado un proceso de incremento, evidenciando con ello la ineficacia de dichas políticas y normas legales. Recordemos que en la investigación realizada por académica Ana Carcedo, en colaboración de la académica costarricense Camila Ordóñez Laclée, concluyeron que el 77.5% de los fallecimientos de mujeres que pudieron contabilizarse entre los años 2005 a 2007, en el Ecuador, y de los que existía suficiente información como para poder analizar casuísticamente los hechos, pueden calificarse como femicidios; mientras que el 16.3% de ese total pueden concebirse como posibles actos de este tipo (Carcedo& Ordóñez, 2011).



Sin embargo, algunos estados europeos, centro y norte americanos son un referente indiscutible para la región en materia de implementación de normas jurídicas y políticas públicas eficientes, que, si bien no ha logrado erradicar completamente la violencia hacia las mujeres, sí posee indicadores que delimitan la eficacia de las estrategias adoptadas. Esto evidencia que estos planes deben sustentarse sobre ejes de prevención, sanción y monitoreo constante, fundamentado en una voluntad política que ponga recursos humanos y económicos sin pretextos a disposición del logro de tales objetivos.

Si bien la Carta Magna de 1998 de Ecuador reconoció algunas cuestiones favorables a los derechos de las mujeres, además, se implementaron algunas políticas nacionales, sin embargo, no fue hasta el año 2008, con la Constitución de Montecristi que empezó un proceso renovador en la normativa y políticas públicas para favorecer la erradicación de la violencia de género. La aprobación de los planes nacionales del buen vivir, así como la adopción de otras decisiones favorecieron en el país un ambiente de lucha por erradicar dicho tipo de violencia. Sin embargo, y pese a los esfuerzos, el alto índice de violencia contra la mujer y el femicidio continúa.

En Cuenca, desde hace aproximadamente 20 años atrás, se vienen promoviendo determinadas normativas, acciones y políticas públicas con la finalidad de prevenir y erradicar la violencia que género y el femicidio. No obstante, en la realidad, dichas acciones y medidas no han resultado ser eficaces, ya que se ha podido observar un incremento sostenido del índice de violencia hacia la mujer, resultante de varios factores, entre los que se encuentra la escasa comunicación e implementación conjunta de las políticas públicas y del déficit de verdadera atención que las autoridades cantonales le han brindado a esta temática.

De la investigación realizada, principalmente de las encuestas y cuestionarios, que fueron aplicadas a las diferentes muestras seleccionadas, se evidencia que existe una elevada y preocupante percepción de la violencia en este territorio, así como una valoración negativa en torno a la eficacia de las políticas implementadas por las autoridades cantonales de Cuenca, que se consideran no adecuarse a la realidad estructural de la sociedad cuencana. Si bien hasta el presente año 2018 se continúa realizando acciones tendentes a la prevención y erradicación de la violencia de género y el femicidio en dicha ciudad, las cifras y estadísticas en torno a ello, evidencian que dichas medidas no han resultado del todo positivas, quedándose solo en la mera declaración de principios, pero que en la realidad concreta no existe un impacto real,



pues muchísimos de los profesionales que han sido encuestados desconocen las políticas lo que sin duda demuestra alguna carencia en la socialización de las mismas.

La poca eficacia de las estrategias implementadas para erradicar las causas generadoras de este tipo de violencia, la falta de procesos evaluativos constantes y oportunos, así como la poca voluntad política concreta y adecuada que asegure de forma efectiva dichas metas, han provocado que a lo largo de estos años se haya incrementado los comportamientos que evidencian violencia hacia las mujeres. Ello ha demostrado la insuficiencia o ineficacia de la normativa cuencana y las políticas públicas implementadas hasta el momento, para siquiera, reducir el fenómeno.

Finalmente, se puede precisar con el estudio, que las políticas públicas unidas a un marco legal eficiente y coherente, garantizarían resultados positivos en la lucha contra la violencia de género. Tanto en el Ecuador como en la ciudad de Cuenca, se ha evidenciado que las estrategias propuestas para combatir la problemática han estado dirigidas a tratar las consecuencias de este fenómeno, más no combatir sus causas, es por ello que los resultados no han sido para nada exitosos. Entonces es pertinente adoptar políticas públicas encaminadas a disminuir la pobreza, propender al mejoramiento de la educación, al empoderamiento social de la mujer, bajar el desempleo, combatir la malnutrición, y otras inequidades sociales que disminuyen el pleno goce de los derechos a lo que tiene las personas, generando planes cantonales reales, sensatos e integrales en los que exista compromiso concreto del Estado nacional y cantonal, para así lograr de forma efectiva, prevenir y erradicar toda clase de violencia.

RECOMENDACIONES

Considerando los elementos hasta este momento expuestos, es pertinente realizar un conjunto de recomendaciones que contribuyan en esencia a la implementación de políticas públicas efectivas que generen no sólo una disminución gradual de la violencia hacia las mujeres, sino finalmente una eliminación del fenómeno en sí. Teniendo ello en consideración, se recomienda lo siguiente:

- Presentar el texto de la investigación una vez que hubiere sido aprobado en su totalidad, a los principales órganos y organismos encargados en el cantón Cuenca de diseñar e implementar las políticas públicas de eliminación de la violencia de género contra las féminas, para su análisis, conocimiento y evaluación de las ideas y planteamientos adoptados en la misma.
- Recomendar de forma especial al Concejo Cantonal de Cuenca, que al momento de diseñar las políticas públicas, estas deben esencialmente estar dirigidas a reducir toda clase de inequidades sociales que limiten el pleno goce de los derechos de las personas, que eliminen la desigualdad, fortalezcan el sistema educativo, y propendan a la eliminación de patrones culturales patriarcales y machistas, para que contribuirían, sin lugar a duda, a impactar de forma positiva en la meta de disminuir o eliminar la violencia contra las mujeres.
- Socializar los resultados de la investigación con los diferentes colectivos académicos de la Universidad de Cuenca, del Azuay y otros altos centros de estudios del país, tanto de estudiantes, juristas, psicólogos, sociólogos, políticos, académicos en general, así como con los miembros y funcionarios de los órganos del sector público y privado y la sociedad civil en su conjunto, de forma tal que se garantice un análisis crítico propositivo en torno a los aspectos que han sido analizados en el estudio y se concientice la necesidad de adoptar posturas desde la comunidad y hasta las máximas instancias, para ayudar a la erradicación del fenómeno en sí.
- Promover las reformas pertinentes a la Ordenanza No. 273 que reforma la Ordenanza que establece las Políticas para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género en el Ámbito Público y Privado del cantón Cuenca, de forma tal que se permita una actualización constante, partiendo de las ineficiencias que sean detectadas



continuamente, de forma tal que el marco jurídico cantonal logre dar respuesta efectiva y pertinente a las exigencias que imponga la sociedad cuencana.

- Finalmente, desarrollar los elementos esenciales sobre los que se debe sustentar las políticas públicas en Cuenca, para hacerlas más efectivas y adecuadas a la realidad nacional, partiendo de los resultados adoptados en el estudio, de forma tal que puedan ser considerados a la hora de diseñar nuevas estrategias cantonales, parroquiales, comunitarias y barriales.



BIBLIOGRAFÍA

- Acevedo, D. (2012). Violencia laboral, género y salud. Trabajadoras y trabajadores de la manufactura. *Revista Salud a los Trabajadores*, 20(2), 167-177.
- Albarran, J. (2015). Referentes conceptuales sobre femicidio / feminicidio. Su incorporación en la normativa jurídica venezolana. *Revista Comunidad y Salud*, 13(2), 75-80.
- AWID. (29 de 11 de 2017). *Recordando a las mujeres asesinadas en 2017 mientras luchaban por los derechos humanos*. Obtenido de Asociación para los Derechos de las Mujeres y el Desarrollo (AWID): <https://www.awid.org/es/noticias-y-an%C3%A1lisis/recordando-las-mujeres-asesinadas-en-2017-mientras-luchaban-por-los-derechos>.
- Bandura, A. (1987). *Teoría del Aprendizaje Social*. Madrid: Editorial Espasa-Calpe.
- Barnuevo, B. (2015). *Delito de femicidio: Análisis de la violencia contra la mujer, desde una perspectiva jurídico penal*. Lima: ARA Editores.
- Barraca, J. (2011). El lenguaje de género como violencia y promotor de la violencia. *Comunicación y Hombre: Revista Interdisciplinar de Ciencia de la Comunicación y Humanidades*(7), 173-182.
- Barro, M. T. (2014). Patriarcado y autoritarismo. *Maremagnum: Publicación Galega sobre os Trastornos do Espectro Autista*(18), 157-162.
- Berrocal, A. I. (2016). Violencia de género y custodia compartida. *La Ley Derecho de Familia: Revista Jurídica sobre Familia y Menores*(12), 1-15.
- Camacho, L. (2005, p. 200). Derechos humanos de las niñas y mujeres negras del Valle del Chota en Ecuador. En C. Gamboa, O. Ruiz, M. Masaquiza, L. Carreño, L. Camacho, & R. Trujillo, *Aportes andinos sobre derechos humanos. Investigaciones monográficas* (págs. 157-220). Quito: Ediciones Abya-Yala.
- Campbell, J., & Runyan, C. (1998). Femicide. *Homicide Studies Review*, 2(4), 347-352.
- Carcedo, A., & Ordóñez, C. (2011). *Femicidio en Ecuador*. Quito: Comisión de Transición hacia el Consejo de las Mujeres y la Igualdad de Género. Obtenido de Comisión de Transición hacia el Consejo de las Mujeres y la Igualdad de Género.
- Chaher, S. (2012). La deconstrucción de la violencia simbólica. En J. C. Suárez, I. Liberia, & B. (. Zurbano, *I Congreso Internacional de Comunicación y Género. Libros de Actas* (págs. 1701-1710). Sevilla: Universidad de Sevilla.
- Correa, A. M. (2012). La política como un diálogo. *Polémika*, 3(8), 28-35.
- Corsi, J. (2012). *La violencia hacia las mujeres como problema social. Análisis de las consecuencias y de los factores de riesgo*. Deusto: Fundación Mujeres / Instituto Vasco de la Mujer.



- Cuenca, Alcaldía. (2018). *Declaración de Cuenca sobre Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género en la Democracia y el Desarrollo Local: Desafíos hacia la Agenda 2030*. Cuenca: Cuenca Alcaldía/PNUD/CEPAL/ONU Mujeres/UIM.
- Cuenca, Cabildo por las Mujeres. (2017). *Agenda del Plan de Igualdad de Oportunidades 2017-2020*. Obtenido de <http://cabildoporlasmujeres.galeon.com/productos1624383.html>.
- Cuenca, Concejo Cantonal. (25 de 11 de 2002). *Ordenanza No. 169 que establece las Políticas para Prevenir y Erradicar la violencia Intrafamiliar en el cantón Cuenca*. Obtenido de <http://www.cuenca.gob.ec/?q=node/8874>.
- Cuenca, Concejo Cantonal. (22 de 12 de 2008). *Ordenanza No. 273 que reforma la Ordenanza que establece las Políticas para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género en el ámbito Público y Privado del cantón Cuenca*. Obtenido de <http://www.cuenca.gov.ec/?q=node/8976>.
- Cuenca, Concejo Cantonal. (2012). *Plan Cantonal de Cuenca para la Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres 2012-2020*. Cuenca: Consejo Cantonal de Cuenca.
- Cuenca, FGE. (2018). *Memoria Anual de la Fiscalía de Cuenca 2017*. Cuenca: Fiscalía de Cuenca.
- Cuenca, GAD Municipal. (2017). *Programa Ciudades Seguras. Informe de Encuesta de Percepción sobre acoso y violencia en las parroquias rurales del cantón Cuenca*. Cuenca: Cuenca Alcaldías/ONU Mujeres/SENDAS.
- Deere, C. D., Twyman, J., & Contreras, J. (2014). Género, estado civil y la acumulación de activos en el Ecuador: una mirada a la violencia patrimonial. *Eutopía: Revista de Desarrollo Económico Territorial*(5), 93-119.
- Delgado, C., Cruz, M., & Fernández, P. A. (2012). Atributos y estereotipos de género asociados al ciclo de la violencia contra la mujer. *Revista Universitas Psychologica*, 11(3), 769-777.
- Dutton, D. G. (1985). An ecologically nested theory of male violence toward intimates. *International Journal of Women's Studies*, 8(4), 404-413.
- Dutton, D. G. (2012). The case against the role of gender in intimate partner violence. *Aggression and Violent Behavior*, 17(1), 99-104.
- Dutton, D. G. (2012). The case against the role of gender in intimate partner violence. *Aggression and Violent Behavior*, 17(1), 99-104.
- Dutton, D. G., & Painter, S. L. (1981). Traumatic bonding: The development of emotional attachments in battered women and other relationships of intermittent abuse. *Victimology: An International Journal*, 6(1-4), 139-155.
- Ecuador, Asamblea Constituyente. (20 de 10 de 2008). *Constitución de la República del Ecuador*. Obtenido de Registro Oficial No. 499: http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf.



- Ecuador, Asamblea Nacional. (10 de 2 de 2014). *Código Orgánico Integral Penal*. Obtenido de Aprobado mediante Ley No. 0. Publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 180: <http://www.asambleanacional.gob.ec/documentos/asamblea2013-2017/sala-prensa/coip-registro-oficial-180.pdf>.
- Ecuador, Asamblea Nacional. (23 de 01 de 2018). *Ley orgánica integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres*. Obtenido de Registro Oficial No. 175: <https://www.igualdadgenero.gob.ec/wp-content/uploads/2018/02/REGISTRO-OFICIAL-LEY-ORGA%CC%81NICA-INTEGRAL-PARA-PREVENIR-Y-ERRADICAR-LA-VIOLENCIA-CONTRA-LAS-MUJERES.pdf>.
- Ecuador, CNNA. (2004). *Plan Nacional Decenal de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia (Resolución No. 22)*. Quito: Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (Registro Oficial No. 475).
- Ecuador, CNNA-CONAMU. (2006). *Plan Nacional para combatir la trata, explotación sexual, laboral y otros medios de explotación de personas, en particular mujeres, niños, niñas y adolescentes*. QUITO: Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia - Consejo Nacional de Mujeres (Registro Oficial No. 375).
- Ecuador, CONAMU. (2005). *Plan de Igualdad de Oportunidades de las Mujeres Ecuatorianas (Decreto Ejecutivo No. 1207-A)*. Quito: Consejo Nacional de las Mujeres del Ecuador (Registro Oficial No. 234).
- Ecuador, Congreso Nacional. (11 de 12 de 1995). *Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia (Ley No. 103)*. Obtenido de Registro Oficial No. 839: <http://www.lexis.com.ec/wp-content/uploads/2017/09/LEY-CONTRA-LA-VIOLENCIA-A-LA-MUJER-Y-LA-FAMILIA.pdf>.
- Ecuador, Congreso Nacional. (03 de 01 de 2003). *Código de la Niñez y la Adolescencia*. Obtenido de Aprobado mediante Ley No. 100. Publicada en el Registro Oficial No. 737: <http://www.igualdad.gob.ec/docman/biblioteca-lotaip/1252--44/file.html>.
- Ecuador, Defensoría del Pueblo. (2016). *Política Institucional de Igualdad de Género 2016-2019*. Quito: Defensoría del Pueblo.
- Ecuador, Diario La Hora. (21 de 08 de 2017). *Femicidios: ONU Mujeres pide "estadísticas claras" a Ecuador*. Obtenido de <https://lahora.com.ec/noticia/1102093820/femicidios-onu-mujeres-pide-estadisticas-claras-a-ecuador>.
- Ecuador, El Comercio. (20 de 04 de 2018). *Cada tres días asesinan a una mujer en Ecuador*. Obtenido de <http://www.elcomercio.com/actualidad/dias-asesinato-mujer-ecuador-femicidios.html>.
- Ecuador, El Comercio. (12 de 03 de 2018). *Ecuador registra 18 femicidios en lo que va del 2018, según varias ONG*. Obtenido de <http://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-femicidios-violencia-mujer-seguridad.html>.
- Ecuador, El Universo. (01 de 01 de 2018). *151 femicidios en Ecuador durante el 2017, registró Cedhu*. Obtenido de



<https://www.eluniverso.com/noticias/2018/01/01/nota/6546565/151-femicidios-ecuador-durante-2017-registra-cedhu>.

Ecuador, El Universo. (2018). *Ni una menos*. Obtenido de <https://www.eluniverso.com/tema/ni-una-menos>.

Ecuador, INEC. (2012). *Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres*. Obtenido de <http://www.ecuadorencifras.gob.ec/violencia-de-genero/>.

Ecuador, INEC. (2017). *El perfil del femicidios. Cifras para eliminarlo*. Obtenido de <http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Infografias-INEC/2017/Violencia-de-genero2.pdf>.

Ecuador, La Hora. (30 de 10 de 2013). En los últimos 3 años, unos 97 feminicidios en Ecuador. *Periódico La Hora*, pág. <https://lahora.com.ec/noticia/1101584465/home>.

Ecuador, ME. (2008). *Plan Nacional para la Erradicación de los Delitos Sexuales en el Ámbito Educativo*. Quito: Ministerio de Educación.

Ecuador, Ministerio del Interior. (2017). *Comisión interinstitucional unifica datos oficiales de casos de Femicidio del país*. Obtenido de <http://www.ministeriointerior.gob.ec/comision-interinstitucional-unifica-datos-oficiales-de-casos-de-femicidio-en-el-pais/>.

Ecuador, MREMH. (2018). *Política para la Igualdad de Género*. Quito: Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

Ecuador, MSP. (26 de 07 de 2018). *Pronunciamiento Cruzada Nacional contra la Violencia de Género*. Obtenido de Ministerio de Salud Pública: <https://www.salud.gob.ec/pronunciamiento-cruzada-nacional-contra-la-violencia-de-genero/>.

Ecuador, Presidencia. (10 de 09 de 2007). *Decreto Ejecutivo No. 620 Declaración como política de Estado la erradicación de la violencia de género hacia la niñez, adolescencia y mujeres*. Obtenido de Registro Oficial No. 174: http://www.justicia.gob.ec/wp-content/uploads/2014/08/plan_erradicacionviolencia_ecuador.pdf.

Ecuador, SENPLADES. (2009). *Plan nacional del Buen Vivir 2009-2013*. Quito: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo.

Ecuador, SENPLADES. (2013). *Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017*. Quito: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo.

Ecuador, SENPLADES. (2017, p. 69). *Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. Toda una Vida*. Quito: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo.

Ecuador, SENPLADES-CNIG. (2014). *Agenda Nacional de las Mujeres y la Igualdad de Género 2014-2017*. Quito: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo - Consejo Nacional de Igualdad de Género.



- Ecuador, SNMLCF. (27 de 03 de 2018). *Primer Evento Técnico Científico sobre Femicidio - Ecuador 2018: la investigación del Femicidio la medicina legal y ciencias forenses: la multi e interdisciplinariedad en el abordaje de la investigación del Femicidio*. Obtenido de Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses / Universidad Andina Simón Bolívar: <https://www.cienciasforenses.gob.ec/primer-evento-tecnico-cientifico-sobre-femicidio-ecuador-2018/>.
- Ecuador, Diario La Hora. (21 de 08 de 2017). *Femicidios: ONU Mujeres pide "estadísticas claras" a Ecuador*. Obtenido de <https://lahora.com.ec/noticia/1102093820/femicidios-onu-mujeres-pide-estadisticas-claras-a-ecuador>.
- Facio, A. (2003). Los Derechos Humanos desde una perspectiva de género y las Políticas Públicas. *Revista Otras Miradas*, 3(1), 15-26.
- FAO. (06 de 2012). *Guía para mejorar la Igualdad de Género en las Cuestiones Territoriales*. Obtenido de Documento de trabajo de la División de Tierras y Aguas 3. División de Género, Equidad y Empleo Rural (ESW): <http://www.fao.org/docrep/016/me282s/me282s.pdf>.
- Ferenczi, S. (1988). *Diario clínico*. Buenos aires: Conjetural Editores.
- Fernández, E. (1991). *Teoría de la justicia y derechos humanos*. Madrid: Editorial Debate.
- Figuerola, M. D., Millán, r., Estrada, M., Isais, R., Bayardo, C., Trujillo, B., & Tene, C. E. (2004). Maltrato físico en mujeres. *Gaceta Médica de México*, 140(5), 481-484.
- Flores, N. M., & Olamendi, P. (2012). *Protocolo de actuación para la investigación del femicidio*. San Salvador: Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos / Fiscalía General de la República.
- Gallegos, a. d. (2012). La identidad de género: masculino versus femenino. En J. C. Suárez, I. H. Liberia, & B. (. Zurbano, *I Congreso Internacional de Comunicación y Género. Libro de Actas* (págs. 705-718). Sevilla: Universidad de Sevilla.
- García-Baamonde, M. E., Blázquez, M., & Moreno, J. M. (2012). El género como construcción sociocultural discriminatoria y violencia psicológica. En I. (. Vázquez, *Investigación y género, inseparables en el presente y en el futuro: IV Congreso Universitario Nacional "Investigación y Género"* (págs. 627-643). Sevilla: Universidad de Sevilla.
- Gelles, R. J. (1983). An Exchange/Social Control Theory. En D. Finkelhor, R. J. Gelles, G. T. Hotaling, & M. A. Satrus, *The dark side of families. Current family violence Research* (págs. 151-165). London: SAGE Publications.
- Gil Rodríguez, E. P., & Lloret Ayter, I. (2007). *La violencia de género* (1ª ed.). Barcelona: Editorial UOC.
- Gil, M. (2015). La violencia sexual como un atentado contra la dignidad de la mujer. *RDUNED: Revista de Derecho UNED, UNED*(17), 813-832.



- Gómez-Durán, E., Lailla-Vicens, J. M., Arimany-Manso, J., & Pujol-Robinal, A. (2014). La atención interdisciplinar y la violencia sexual. *Revista Española de Medicina Legal*, 40(3), 89-90.
- González, M. P., Zutta, D., & Perugache, A. (2016). Violencia basada en género dentro del contexto universitario: Visión de lois administrativos, 2013-2015. *Revista Universidad y Salud*, 18(2), 276-290.
- Goode, W. J. (1971). Force and violence in the family. *Journal of Marriage and Family*, 33(4), 624-636.
- Hernández, P. E. (2017). Violencia de Género. *Revista Publicando*, 4(10), 520-530.
- Kipen, A., & Caterberg, M. (2006). *Maltrato, un permiso milenario: La Violencia contra la mujer. Primera Edición*. Barcelona: Intermón Oxfam Ediciones.
- Lagarde, M. (1994). *La regulación social del género: el género como filtro de poder*. México: Consejo Nacional de Población.
- Lagarde, M. (2006). Del femicidio al feminicidio. *Desde el jardín de Freud: Revista de Psicoanálisis*(6), 216-225.
- López, E. (2015). *Educación en igualdad. La forma de prevenir la violencia de género*. Madrid: Universidad de La Laguna.
- Lowi, T. (1992). Políticas públicas, estudios de caso y teoría política . En L. Aguilar, *El estudio de las políticas públicas. Colección Antologías de Política Pública* (págs. 89-117). México: Miguel Ángel Porrúa.
- Maritain, J. (2001). *Los derechos del hombre y la ley natural: Cristianismo y democracia*. Madrid: Editorial Palabra.
- Martínez, C., Anaya, M. E., & Salgado, D. (2014). Desarrollo de la personalidad y virtudes sociales: relaciones en el contexto educativo familiar. *Revista Educación y Educadores*, 17(3), 447-467.
- Marzabal, I. (2013). El animus necandi y factores de riesgo en el delito de asesinato de pareja o ex pareja. Predicción de la violencia. *Revista de Derecho UNED*(10), 439-461.
- Mejía, D. (08 de 03 de 2015). *El machismo en Ecuador sigue sosteniendo a la violencia de género*. Obtenido de Diario El Universo: <https://www.eluniverso.com/noticias/2015/03/08/nota/4630861/machismo-sigue-sosteniendo-violencia-genero>.
- Morabes, S. d. (2014). *Ciclo de violencia el asistencia psicológica a víctimas de violencia de género*. Buenos Aires: Universidad Nacional de La Plata.
- Morales, M. d. (11 de 2012). *Las consecuencias del delito de Femicidio en Guatemala y la falta de atención a la víctima en el departamento Sacatepéquez*. Obtenido de Tesis previa a la obtención del grado académico de Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad de San Carlos de Guatemala: http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/04/04_10422.pdf



- Muñoz Conde, F. (2004). *Derecho Penal. Parte Especial. Décimo Quinta Edición*. Valencia: Editorial Tirant lo Blanch.
- ONU. (1979). *Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer*. Obtenido de <http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw25years/content/spanish/Conventio n-CEDAW-Spanish.pdf>.
- ONU. (25 de 06 de 1993, párraf. 18). *Declaración y Programa de Acción de Viena*. Obtenido de Conferencia Mundial de Derechos Humanos: http://www.ohchr.org/Documents/Events/OHCHR20/VDPA_booklet_Spanish.pdf.
- ONU. (15 de 09 de 1995). *Declaración y Plataforma de Acción de Beijín*. Obtenido de Adoptada por la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer: <http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20S.pdfL>.
- ONU. (15 de 09 de 1995). *Declaración y Plataforma de Acción de Beijing*. Obtenido de Aprobada en la 16ª sesión plenaria: <http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20S.pdf>.
- ONU. (09 de 2000). *Objetivos de Desarrollo del Milenio*. Obtenido de http://www.undp.org/content/undp/es/home/sdgoverview/mdg_goals.html.
- ONU. (2018). *Temas Mundiales: Mujer*. Obtenido de <http://www.un.org/es/globalissues/women/historia.shtml>.
- ONU, Asamblea General. (20 de 12 de 1993). *Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer*. Obtenido de Resolución No. 48/104: <http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx>.
- ONU, Asamblea General. (20 de 12 de 1993). *Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer*. Obtenido de <http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx>.
- ONU, Asamblea General. (02 de 02 de 1998). *Resolución 52/86 medidas de prevención del delito y de justicia penal para la eliminación de la violencia contra la mujer*. Obtenido de <http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/52/86&Lang=S>.
- ONU, CEDAW. (1989). *Recomendaciones Generales. Recomendación General No. 12*. Obtenido de Adoptadas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: <http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm-sp.htm#recom12>.
- ONU, CEDAW. (1992). *Recomendaciones Generales. Recomendación General No. 19*. Obtenido de Adoptadas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: <http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm-sp.htm#recom12>.
- ONU, Consejo de Seguridad. (13 de 10 de 2000). *Resolución No. 1325*. Obtenido de <http://www.un.org/womenwatch/ods/S-RES-1325%282000%29-S.pdf>.



- OPS. (2013, p. 1). *Comprender y abordar la violencia contra las mujeres. Femicidio*. Washington: OPS.
- Ortiz, M. E. (2013). Violencia de género. *Revista Nuevo Derecho*, 9(12), 57-68.
- Osorio, R. O. (2017). *Feminicidio: Poder, desigualdad, subordinación e impunidad: nomás invisibilidad*. Medellín: Funlam.
- Pastor, G. (2014). *Elementos conceptuales y analíticos de las políticas públicas*. Valencia: Tirant Lo Blanch.
- Peces, G. (1976). *Derechos Fundamentales*. Madrid: Guardiania de Publicaciones.
- Perela Larrosa, M. (2010). Violencia de Género: Violencia Psicológica. *Revista Nueva Época*(11), 353-376.
- Perela, M. (2010). Violencia de Género: Violencia Psicológica. *Foro: Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales*(11-12), 353-376.
- Pérez, A. E. (1991). *Delimitación conceptual de los Derechos Humanos*. Madrid: Editorial Tecnos S.A.
- Persico, L. (2003). *Soy una Mujer Maltratada*. Madrid: Editorial Alcobendas.
- Pfouts, J. H. (1978). Violent families: coping responses of abused wives. *Child Welfare*, 57(2), 101-111.
- Pintos, M. (1993). *La denuncia ante la Comisión Interamericana de derechos humanos*. Buenos Aires: Editores del Puerto.
- Pontón, J. (2009). *Femicidio en el Ecuador: realidad latente e ignorada. Ciudad Segura Programa Estudios de la Ciudad. No. 31*. Quito: FLACSO.
- Puleo, A. H. (2005). El patriarcado ¿una organización social superada? *Revista Temas para el Debate*(133), 39-42.
- Quiñones, A. (2017). Hacia una acción integral en materia de femicidio/feminicidio para América Latina y el Caribe. En G. Guajardo, & V. (. Cenitagoya, *Femicidio y suicidio de mujeres por razones de género. Desafíos y aprendizajes en la Cooperación Sur-Sur en América Latina y el Caribe* (págs. 69-86). Santiago de Chile: FLACSO-Chile.
- Quiñonez, H. S. (2017). La violencia de género y el derecho penal. *Dominio de las Ciencias*, 3(4), 447-458.
- Rivadeneira, M. F. (2017). Violencia física contra la mujer: una propuesta de abordaje desde un servicio de salud. *Revista CUIDARTE*, 8(2), 1656-1667.
- Rondón, U. W. (2015). *Mediación y violencia de género*. Murcia: Universidad de Murcia.
- Rosser, A. M., Suriá, R., García, A., & Villegas, E. (2015). Qué es y qué no es violencia de género para los estudiantes universitarios. En M. T. Tortosa, J. D. Alvarez, & N. (. Pellín, *XIII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria: Nuevas*



- estrategias organizativas y metodológicas en la formación universitaria para responder a la necesidad de adaptación y cambio* (págs. 253-265). Alicante: Universidad de Alicante.
- Russell, D. (2013). Femicide. The power of a name. En C. Laurent, M. Platzer, & M. (. Idomir, *Femicide: A global issue that demands action* (págs. 19-21). Viena: Academic Council on the United Nations System (ACUNS) Vienna Liaison Office .
- Russell, D., & Radford, J. (1992). *Femicide: The Politics of Woman Killing*. New York: Twayne Publishers.
- Stith, S. M., & Rosen, K. H. (1992). Estudio de la violencia doméstica. En S. M. Stith, M. B. Williams, & K. H. Rosen, *Psicosociología de la violencia en el hogar: estudio, consecuencias y tratamientos* (págs. 27-47). Bilbao: Desclée de Brouwer.
- Toledo, P. (2009). *Femicidio*. México: Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
- Torres-Melo, J., & Santander, J. (2013). *Intrpducción a las Políticas Públicas: conceptos y herramientas desde la relación entre Estado y Ciudadanía*. Bogotá: IEMP Ediciones.
- Trujillo Soto, L. O. (2011). *El femicidio*. Quito: Editorial Jurídica del Ecuador.
- Ushakova, T. (2012). La violencia de género desde la perspectiva del Derecho internacional. En L. (. Mella, *Violencia de género y Derecho del Trabajo: Estudio actuales sobre puntos críticos* (págs. 38-86). Madrid: Editorial La Ley.
- Valls, R., Oliver, E., Sánchez, A., Ruiz, L., & Melgar, P. (2007). ¿Violencia de género también en las Universidades? Investigaciones al respecto. *Revsta de Investigación Educativa*, 25(1), 219-231.
- Velázquez, L. M. (2011). Gran dolor se acumula y sólo irrumpe al relaarnos. Violencia contra, entre y de las mujeres estudiantes del Estado de México. *Géneros: Revista de Investigación y Divulgación sobre los estudios de género*, 8(10), 9-29.
- Velzeboer, M., Ellsberg, M., Clavel, C., & García, C. (2003). *La violencia contra las mujeres: responde el sector de la salud*. Washington: OPS / OMS.
- Vera, J. Á., & Rodríguez, C. K. (2009). La psicología social y el concepto de cultura. *Revista Psicología & Sociedade*, 21(1), 100-107.
- Viano, E. (1987). *Violencia, victimización y control social*. Córdoba: Editorial Lerner.
- Walker, L. (2000). *The Battered Woman Syndrome* (2 ed.). New York: Springer Publishing Company.
- Walker, L. E. (1984). *The Battered Woman Syndrome*. New York: Springer.
- Yugueros, A. J. (2012). Fuerzas de seguridad y violencia de género. En I. (. Vázquez, *Investigación y generó, inseparables en el presente y en el futuro* (págs. 2157-2168). Sevilla: Universidad de Sevilla.



Yugueros, A. J. (2014). La violencia contra las mujeres: conceptos y causas. *Barataria: Revista Castellano-Manchega de Ciencias Sociales*(18), 147-157.

Zavala Baquerizo, J. (2002). *Delitos contra las personas*. Quito: Editorial Edino.